

TESTIMONIO DE SILENCIO

Órgano de Expresión y Memoria de las Víctimas del Terrorismo del País Vasco



EL GOBIERNO VASCO EXPLORA LA CONVIVENCIA CON NUEVAS GENERACIONES Y EN MUNICIPIOS CASTIGADOS POR LA VIOLENCIA



ETA COMIENZA SU DESARME

Bilbao celebra el Día de la Paz e inaugura un mural en favor del diálogo



EL PARLAMENTO VASCO RINDE HOMENAJE A FERNANDO BUESA Y A ENRIQUE CASAS

EUSKADI EMPIEZA A CONSTRUIR LA CONVIVENCIA

EDITORIAL

El viernes 21 de febrero, ETA comen-
zó su desarme con la ya conocida
puesta en escena del vídeo en el que
entregaba una parte ínfima de su arsenal
a los verificadores internacionales. Como
señalaba el diario francés "Le Monde",
"no hay que dejar pasar esta oportuni-
dad", porque es una etapa más en la vía
de la resolución del doloroso conflicto
vasco, pero es una etapa importante y
hay que saludarla".

El artículo, publicado en primera plana,
admitía que los avances que se han dado
desde hace dos años son reales. "El
miedo ha desaparecido del País Vasco
donde la mayoría de los políticos circulan
sin escolta" y "pese al resentimiento aún
a flor de piel, los vascos de todas las ten-
dencias quieren pasar la página de la vio-
lencia, de la intimidación y de la represión",
señalaba el diario francés que
recordaba a su vez que la labor de los
verificadores en África del Sur, en la exYu-
goslavia y en Irlanda del Norte, "fue res-
petada e hicieron un trabajo esencial",
pero lamenta que el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, no reconozca
su papel.

Con el fin de pasar la página de la vio-
lencia y asentar las bases sólidas de la con-
vivencia, la Dirección de Víctimas y
Derechos Humanos el Gobierno vasco
está estudiando cómo extender la filoso-
fía del proyecto "Glencree" en el que vic-
timas de distinta índole mantuvieron
encuentros sucretos para compartir y
entender el sufrimiento del otro. En este
sentido, ha impulsado dos pruebas piloto
y también ha encargado un informe de
evaluación para conocer la viabilidad y el
efecto de este tipo de "talleres de con-
vivencia" tanto a nivel municipal como uni-
versitario. La diferencia radica en que en
esta ocasión los protagonistas son ciuda-
danos anónimos. La paz en Euskadi es
completamente irreversible, ahora de lo
que se trata es de cerrar las heridas de la
mejor forma posible para poder forjar una
sociedad integrada y sin odios. Y en esa
tarea los representantes políticos tienen
que dar lo mejor de sí mismos.

Kepa Pérez
(Director)

Director: Kepa Pérez.
Colaboradores: Mikel Elgeta Sasiain, Jaione Rementería, Xabier Arizeta, Nekane Urrutia.
Diseño: Cristina Ruiz Urionabarrenetxea.
Fuente: Agencias de noticias y Prensa diaria (El Correo, El Mundo, Deia y El País).
Depósito legal: BI-2564-03
Edita: ADDH Teléfono: (94) 4752883
C/ Hermógenes Rojo, Nº 8-2º izda. BILBAO
C/ Catalina de Erauso, 16-3º A-SAN SEBASTIÁN
e-mail: asociacionaddh@gmail.com
web: www.addh.org.es



A.D.D.H.
Asociación para la Defensa de la
Dignidad Humana
Giza Duintasunaren Aldeko Elkartea



LEHENDAKARITZA
Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia
Biktimen eta Eskubideen Zuzendaritza
PRESIDENCIA
Secretaría General para la Paz y Convivencia
Dirección de Víctimas y Derechos Humanos

- SUMARIO - Nº 42 A b r i l - 2014



El Gobierno vasco investigará los crímenes
terroristas pendientes de resolver.....3
El Gobierno vasco explora la convivencia tras
el final de ETA con nuevas generaciones4
"A los alumnos les extrañaba que no
sintiera odio, que pudiera perdonar".....6
Dos víctimas del programa "Glencree"
ofrecen su testimonio en Bilbao.....7
La escuela vasca respalda la propuesta de
Lakua para educar en paz y convivencia..... 8
El Gobierno vasco asegura que los colegios no
eligen a las víctimas que acuden a sus aulas.....9
Bilbao celebra el día de la no violencia.....10
Covite acusa a ETA de "genocidio" ante
la Corte Penal Internacional de La Haya.....11
Las víctimas ante el caos del a justicia..... 14
Jonan Fernández pide a Sortu un gesto
"especial" hacia las víctimas para avanzar
en el proceso de paz.....16
Los expertos consultados por Urkullu sitúan
su plan de paz al nivel de Sudáfrica e Irlanda.....17
Estrasburgo califica de "ejemplo a seguir" el
desmontaje de la Doctrina Parot por España....18
Interior forma a 41 víctimas del terrorismo
para favorecer su reinserción laboral.....20
El Gobierno de Navarra edita el libro "relatos
del plomo, historias del terrorismo en Navarra".....22
Testimonio de Jose Goikoetxea..... 26



Concepción Martín: "La bomba de ETA
estalló en el centro de mi hogar".....29
Getxo rinde su homenaje anual a
todas las víctimas del terrorismo.....32
Azpeitia rinde homenaje a Inaxio Uriá con
motivo del V aniversario de su asesinato.....32
Valencia homenajea a Manuel Broseta...33
Homenaje a Gregorio Ordóñez con motivo
del XIX aniversario de su asesinato.....34



El Partido Popular rinde homenaje a las
víctimas de ETA entre 1995 y 2000..... 35
Homenaje a Ramón Díaz en San Sebastián...35
Homenaje a Jiménez Becerra y Sevilla..... 36
Homenaje a Joseba Pagazaurtundua.....36
Homenaje a Fernando Buesa y Jorge
Diez en el Museo Atrium de Vitoria..... 37
El Parlamento Vasco rinde homenaje a
Fernando Buesa y a Enrique Casas..... 39
Homenaje a Isaías Carrasco en Arrasate.....40
Interior entrega 365 condecoraciones a las
víctimas del terrorismo41



Misa-Funeral de Estado en recuerdo a las
víctimas del 11-M en su X aniversario.....42
Los presos de ETA acatan las leyes y se
resignan a sus penas 44
ETA comienza el lento proceso de su
desarme 49
Los verificadores defienden su tarea para
"consolidar la Paz" tras declarar en la AN.....52
El Gobierno vasco avala la continuidad de
la verificación y apela a ETA a su desarme.....54
ETA confirma su voluntad de "sellar"
hasta el "último" de sus arsenales.....55
ETA liga su desarme ala labor de los
mediadores.....56
Los presos piden excarcelaciones
individualizadas.....58



**EL GOBIERNO VASCO INVESTIGARÁ LOS CRÍMENES
TERRORISTAS PENDIENTES DE RESOLVER**

El Ejecutivo ha encargado un informe para cuantificar los atentados sin esclarecer desde 1960 y analizar la situación de las víctimas.

El Gobierno vasco ha decidido incluir
en su agenda la necesidad de inves-
tigar los crímenes terroristas sin resolver.
Para ello ha encargado la elaboración de
un informe que permitirá cuantificar el
número de atentados de ETA, así como
de otras organizaciones, pendientes de
esclarecer desde 1960 y analizar la situa-
ción en la que se encuentran las víctimas.
Es decir, si reciben por parte de los po-
deres públicos el tratamiento al que tienen
derecho como damnificados. El gabinete de
Iñigo Urkullu destinará a este fin una partida
de 16.850 euros.

El estudio, que se enmarca en el plan de paz
y verá la luz antes de que termine el año, será
supervisado por «tres personas de prestigio
contrastado y amplia experiencia en la mate-
ria», reveló el martes 4 de marzo el portavoz
de Lakua, Josu Erkoreka, durante la rueda de
prensa posterior al Consejo de Gobierno. En
concreto, este trabajo recaerá en la criminalista
y profesora de Derecho Penal de la
Universidad del País Vasco Enara Garro, el
exdirector de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo del Ministerio de Interior con el
Ejecutivo de Zapatero, José Manuel
Rodríguez Uribe, y el fiscal y magistrado
emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.

La redacción y coordinación la llevará a cabo el escritor y perio-
dista Carlos Fonseca. Este último colabora desde hace meses con
la secretaria de Paz y Convivencia que lidera Jonan Fernández
para divulgar el contenido del plan de paz en Madrid. Este enlace
ha permitido a Fernández mantener catorce reuniones con magis-
trados de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial.

La apuesta porque los poderes públicos, en este caso el Gobierno
vasco, se involucren en la investigación de los crímenes terroristas
pendientes de resolver es una de las recomendaciones que eman-
nan del informe de Constatación de Vulneraciones de Derechos
Humanos ocurridas entre 1960 y 2013, que el Ejecutivo de Urkullu
presentó el pasado mes de junio. Aquel estudio atribuye 837 muer-
tos a atentados de ETA en sus distintas ramificaciones desde su
fundación; 94 a actuaciones «indebidas» y abusos de las Fuerzas
de Seguridad del Estado; y 73 a grupos parapoliciales y de extre-
ma derecha, entre los que se incluye a los GAL, el Batallón Vasco
Español y la Triple A. Manipulaciones de explosivos y tiroteos,
recogidos en un capítulo aparte, causaron otros 277 muertos.

Pero la lucha contra la impunidad es también una petición histó-
rica de las víctimas. Ya en 2012, la entonces presidenta de la
Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, trasla-
dó al Parlamento vasco la intención de los damnificados de evitar
la impunidad. Pagazaurtundua aprovechó su comparecencia en la



comisión de Derechos Humanos de la
Cámara para recordar que más de una
tercera parte de los atentados mortales
cometidos por ETA continúan aún sin
resolver. Pero lo cierto es que tras déca-
das de violencia, a día de hoy no existe
una base de datos oficial y accesible en la
que se recojan al detalle los sumarios de
cada atentado o se arroje luz sobre los crí-
menes pendientes y la situación de los
afectados. Lo que parece prácticamente
seguro es que el número de casos supe-
rará el centenar. Ni siquiera en la
Audiencia Nacional disponen de esta cifra.
Una oficina del alto tribunal trabaja desde
hace tres años en la recopilación de cen-
tenares de sumarios para crear una base

fiable. Tampoco se conoce, por ejemplo,
cuántos casos han prescrito.

El objetivo de este proyecto es «contar con un
documento detallado, completo y fidedigno»
que permita al Ejecutivo autónomo valorar
qué medidas deben adoptarse, «en el marco
de su competencia», para «satisfacer los
derechos a la verdad, justicia y reparación de
las víctimas», explicó Erkoreka.

El estudio tendrá como marco de referencia el
documento de Naciones Unidas 'Principios y
directrices básicos sobre el derecho de las víc-
timas de violaciones manifiestas de las nor-
mas internacionales de derechos humanos y
de violaciones graves del derecho internacio-
nal humanitario a interponer recursos y obte-
ner reparaciones'. El texto, aprobado en 2005,
emplaza a los poderes públicos de asistir y

reconocer a todos los damnificados, con independencia de si el
atentado terrorista en cuestión ha sido o no esclarecido.

La ONU señala, entre otras obligaciones, las de «investigar las vio-
laciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su
caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de con-
formidad con el Derecho interno e internacional», así como ofrecer
acceso equitativo y efectivo a la Justicia.

Erkoreka rechazó ofrecer una cifra aproximada sobre el número
de casos que permanecen aún sin resolver. Y es que, según advir-
tió, existen datos «muy diferentes» al respecto. Cabe recordar que
desde la Fundación de Víctimas del Terrorismo se ha llegado a
hablar de 314 crímenes. Un número que «no coincide» con el que
podría barajar, aunque de forma estimativa, la Audiencia Nacional.
El portavoz de Lakua y consejero de Justicia defendió en este sen-
tido que el Gobierno vasco desarrollará su «propia investigación»
con el fin de «aproximarse a este fenómeno con la mayor profun-
didad posible» y, a partir de ahí, «adoptar las medidas necesarias»
en relación con las víctimas.

El Ejecutivo colaborará para la elaboración del informe con otras
instituciones, en especial con la Audiencia Nacional, y aunque
cubrirá todos los crímenes ocurridos desde 1960, Erkoreka reco-
noció ayer que el «vacío documental» del periodo franquista hará
muy difícil que puedan investigarse atentados previos a la creación
del alto tribunal, competente en materia de terrorismo.

EL GOBIERNO VASCO EXPLORA LA CONVIVENCIA TRAS EL FINAL DE ETA CON NUEVAS GENERACIONES Y EN LOS MUNICIPIOS MÁS CASTIGADOS POR LA VIOLENCIA

El Gobierno vasco está estudiando cómo extender la filosofía del proyecto "Glencree" en el que víctimas de distinta índole mantuvieron encuentros discretos para compartir y entender el sufrimiento del otro.

La Dirección de Víctimas y Derechos Humanos ha impulsado dos pruebas piloto y encargado un informe de evaluación para conocer la viabilidad y el efecto de este tipo de "talleres de convivencia" tanto a nivel municipal como universitario. La diferencia radica en que en esta ocasión los protagonistas son ciudadanos anónimos.

La iniciativa "Glencree" se dio a conocer a mediados de 2012. Fueron los propios damnificados que participaron en la misma quienes decidieron, por iniciativa propia, sacarla a la luz. En un momento en el que se advierte de los riesgos de "equiparar" a unos afectados con otros o de construir un relato que no refleje la realidad de lo ocurrido en Euskadi, una veintena de víctimas de ETA, los GAL y el Batallón Vasco Español (BVE), así como de otros grupos terroristas y de personas que sufrieron abusos policiales, se unieron en un gesto inédito para pedir justicia y memoria. "Toda violencia -proclamaron- es injustificable."

Debido a los resultados "gratamente positivos" que arrojó el proyecto, sobre todo entre los damnificados, desde el Ejecutivo de Vitoria se optó por dar un paso más con el fin de plantear su posible continuidad. Los términos serían similares, pero no los protagonistas. Así, en lugar de reuniones entre víctimas, la idea sería impulsar talleres en los que participarían personas de a pie de calle, de diferentes ideologías, edades, profesiones, vinculadas o no al tejido asociativo... En definitiva, grupos heterogéneos. El objetivo es proporcionar a los participantes un espacio para hablar, escuchar, tomar consciencia y reflexionar sobre la violencia de intencionalidad política y sus consecuencias en Euskadi, desde las experiencias personales.

El Gobierno vasco puso en marcha el pasado mes de noviembre dos prue-



bas piloto. Una, en la Universidad de Mondragón, y la otra, tuvo acogida en tres municipios vascos: Balmaseda -gobernado por el PNV-, Irún (PSE) y Etxebarri, regido por la agrupación independiente La Voz del Pueblo. En todos los casos, la experiencia se dividió en dos fases, separadas entre sí por un periodo de una semana aproximadamente. La primera sesión, común tanto para universitarios como a nivel local, sirvió para presentar "Glencree" y hacer una reflexión sobre la convivencia en Euskadi tras décadas de terrorismo. Para ello, se utilizaron tanto en el documental sobre esta novedosa iniciativa como los dos escritos que emanaron de la misma, el texto en el que las víctimas participantes ofrecen su testimonio sobre las reuniones y el manifiesto conjunto que suscribieron al término de la experiencia. En este último, los damnificados invitan a la sociedad a realizar su propia visión autocrítica del pasado mediante un compromiso ineludible con la verdad y la justicia.

¿Qué espera de la reunión? ¿Se ha sentido alguna vez estereotipado por aquellos que piensan diferente a usted?.



Estas son algunas de las preguntas que se intercalan durante esa primera toma de contacto. Los grupos, de entre veinte y treinta participantes -en el caso de los municipios se apuesta por no superar la veintena-, están dinamizados por una persona curtida en este tipo de talleres de diálogo. Para la realización de estas pruebas piloto, el Gobierno vasco ha contado con la colaboración del colectivo Bakeola y del equipo que coordinó la iniciativa "Glencree", integrado por Galo Bilbao, Carlos Martín Beristain y

Julián Ibáñez de Opacua.

En la Universidad de Mondragón, como el taller se llevó a cabo como parte de una asignatura, el encargado de llevar las riendas de la sesión fue un profesor, tras recibir instrucciones por parte de los expertos. La participación, en cualquier caso, fue voluntaria. En lo que a los ayuntamientos se refiere, por ejemplo, la convocatoria -previo diálogo con la Dirección de Víctimas del Gobierno vasco- se realizó a través de una circular y, a posteriori, fueron técnicos de cada Consistorio quienes se pusieron en contacto con cada persona, de manera particular.

La segunda fase de las pruebas piloto varía en función del ámbito de actuación, pero no así su contenido. Mientras que a nivel municipal, y tras probar diferentes metodologías, se apuesta por mantener un debate menos estructurado con el grupo original de veinte personas, en la Universidad de Mondragón se utilizó la técnica del "world café". Consistió en dividir a los participantes en grupos más pequeños, de unos cinco estudiantes. En ambos casos se trató de profundizar y debatir sobre los efectos del terrorismo y la necesidad de construir la convivencia entre todos.

"¿Ha mantenido conversaciones constructivas sobre la violencia en Euskadi? Si es que no, ¿cuáles son las barreras con las que se ha encontrado?", "¿qué preguntas en relación a la violencia deberíamos hacernos?", "¿ha tenido alguna experiencia relacionada con la violencia?, ¿cómo le afectó?..." Son algunas de las cuestiones que se ponen sobre la mesa. "Se trata de entender, no de convencer ni de persuadir". Las dos fases vinieron a durar entre hora y

media, la primera, y entre dos y tres horas, la segunda.

Como colofón de las pruebas piloto, la universitaria y la municipal, el Gobierno vasco encargó la elaboración de un informe de evaluación para conocer la opinión que la experiencia mereció en sus participantes y comprobar su posible implantación. El estudio ha sido obra de un equipo de expertos, con una larga trayectoria en metodologías de diálogo, de una conocida universidad catalana. Desde el Gobierno vasco justifican su decisión de encargar el informe a una entidad de fuera de Euskadi en la necesidad de evitar la contaminación precia y lograr así una aproximación más aséptica a la realidad de la violencia en Euskadi. No es la primera vez que se recurre a esta comunidad para abordar cuestiones sobre pacificación. En la pasada legislatura, el Gobierno de Patxi López delegó en el profesor barcelonés Ricard Vinyes el diseño del futuro Instituto Vasco de la Memoria.

El informe corrobora el efecto positivo de este proyecto, que considera una importante herramienta pedagógica. Los expertos remarcan en este sentido cómo los participantes en los municipios alargaron voluntariamente las horas previstas en las reuniones. "De hecho -señalan-, todos los grupos y de forma mayoritaria, quizás contrariamente a lo que puede circular en el imaginario colectivo (que la gente tiene miedo o no quiere hablar, solo quiere pasar página), los participantes han expresado de forma explícita que tienen ganas y necesidad de hablar". Prueba de ello son las reflexiones que de manera habitual se escuchaban en los grupos y que aparecen recogidas en el escrito de evaluación: "Hace dos años que espero una oportunidad como ésta para hablar, porque quiero un futuro diferente para mis hijos", manifestó una de las personas que se animaron a asistir a las reuniones. Dos grandes objetivos

Dos serían los objetivos que se marca este proyecto inspirado en "Glencree": conseguir que se sumen al mismo el mayor número de personas posible, ya que permitiría una reflexión mucho más amplia de cara a la convivencia, y que los participantes respondan a diferentes sensibilidades. La dificultad en esta primera experiencia estribó en lograr que ciudadanos simpatizantes del PP y afines a Bildu se sentaran en la misma mesa. Un hecho, por otro lado, que no es



aislado. Ya en el Parlamento vasco sigue siendo, al menos hasta ahora, inviable que ambos partidos políticos compartan, por ejemplo, espacio en la ponencia de paz. Pero, en cualquier caso, un escenario que el Gobierno vasco no dan por imposible en el futuro. No sólo en la Cámara Vasca, donde ya comparten debates en el pleno y las comisiones, sino también a pie de calle. La pregunta que mayor controversia generó en los debates fue precisamente la que hace alusión a los "dilemas o choques de valores" que se le plantean a los ciudadanos a la hora de posicionarse ante la violencia de intencionalidad política y su impacto.

La materialización de este proyecto está aún pendiente de una decisión en firme

por parte de la Secretaría de Paz y Convivencia. Su puesta en marcha, al menos por ahora, no figura como tal en el Plan de paz. Ahora bien, este último recoge la apuesta del Ejecutivo de Vitoria por poner en marcha iniciativas en materia de convivencia, en colaboración con las diferentes instituciones - ayuntamientos y diputaciones- y entidades educativas. En esta línea, para

extender la filosofía de "Glencree" sería conveniente, según valoran, un impulso de esta herramienta por parte del Departamento de Educación que dirige Cristina Uriarte, así como el respaldo de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).

La idea sería llevar este proyecto a todos los ayuntamientos, sean del signo político que sean. En la prueba piloto, y por causas ajenas a la iniciativa en sí, no fue posible ponerlo en marcha en una localidad gobernada por Bildu. El fin último que persigue la iniciativa es sentar las bases de la convivencia entre las nuevas generaciones y en los municipios donde más se ha dejado sentir la violencia.

TALLERES DE CONVIVENCIA, UN PROYECTO INSPIRADO EN UNA EXPERIENCIA INÉDITA

Los talleres de convivencia con ciudadanos anónimos se inspiran en una iniciativa inédita que vio la luz en la pasada legislatura y que tuvo como protagonistas a una veintena de víctimas de diferente índole. Bautizado como "Glencree" por el lugar de Irlanda en el que empezó a gestarse, este proyecto comenzó su andadura de manera discreta en diciembre de 2007 -ETA permanecía aún en activo-, con un objetivo: entrar en contacto con otras experiencias y tomar conciencia de lo injusto de la violencia, "de su enorme impacto personal y familiar". "Hemos pasado del conocimiento mutuo a la empatía y al reconocimiento del otro, superando las barreras y estereotipos con los que emprendimos el camino", afirmaron los damnificados que asistieron a los encuentros. En la lista de participantes figuran, entre otros, familiares de víctimas de ETA como Mari Carmen Hernández, Amaia Guridi, Fernando Garrido o Leonor Regaño, así como de los GAL y el Batallón Vasco Español. Es el caso, por ejemplo, de Edurne Brouard,

Carmen Galdeano y Beatriz Susaeta. De igual modo, se involucraron en esta iniciativa allegados de personas que sufrieron excesos policiales, como Arantxa y Asun Lasa, Lurdes Zabala y Mikel Paredes. Este último es hermano de Juan Paredes Manot, "Txiki", fusilado por el régimen franquista en 1975.

La experiencia de "Glencree" arrancó con la adhesión de una decena de víctimas, pero fue creciendo hasta alcanzar casi una treintena. Se llevaron a cabo tres reuniones principales: en 2007, 2008 y 2011. Es en la tercera cuando los participantes apostaron por incorporar al grupo a los familiares de quienes sufrieron abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

Durante años, un manto de silencio cubrió esta iniciativa para evitar que cualquier interferencia externa pudiera dar al traste con la misma. En junio de 2012, las víctimas decidieron hacer pública su vivencia con la esperanza de que el proyecto animara a otros a hacer sus propios procesos.

MARI CARMEN HERNÁNDEZ: «A LOS ALUMNOS LES EXTRAÑABA QUE NO SINTIERA ODIOS, QUE PUDIESE PERDONAR»

La viuda de un asesinado por ETA, un profesor y uno de los promotores de las visitas de víctimas a las aulas explican un proyecto destinado a promover la convivencia en una mesa redonda organizada por Deusto Forum.



Compartí con ellos el día más triste de mi vida». Mari Carmen Hernández se sentó el curso pasado delante de un centenar de jóvenes de 16 años para explicarles cómo el 4 de junio de 2000 unos pistoleros de ETA asesinaron a su marido, José Mari Pedrosa, concejal del PP en Durango. Aquel asesinato supuso el punto y final a una campaña de presión y acoso, de pedradas en su casa, de pasquines esparcidos en su escalera, de insultos lanzados por algunas personas «con las que había llegado a jugar» en su infancia. «Ves la impasibilidad de la gente», dice.

Hernández fue una de las personas damnificadas por el terrorismo que se prestó a participar en el programa de 'Víctimas educadoras', impulsado durante el Gobierno de Patxi López. La idea es que quienes han sufrido el dolor en primera persona cuenten su vivencia a alumnos de Secundaria y Bachillerato. No sólo acuden afectados por la violencia de ETA, sino también por grupos de ultraderecha como el Batallón Vasco Español y los GAL.

El jueves 28 de noviembre le tocó explicar cómo fueron sus visitas a los colegios en una mesa organizada por el Deusto Fórum, en la que también tomaron parte Xabier Etxeberria, profesor de Ética de la Universidad de Deusto y uno de los coordinadores de las citas, y Jesús María Mujika, portavoz de la Fundación Korta, creada en recuerdo del empresario guipuzcoano asesinado en agosto de 2000, y profesor de una ikastola donde se desarrollaron las charlas, que en principio continuarán a lo largo de esta legislatura. Desde perspectivas

diferentes, los tres coincidieron en valorar de forma positiva una iniciativa que nació entre «recelos» de algunos sectores. La viuda de Pedrosa admitió la «intranquilidad» con la que abordó el primer encuentro. Explicó a los jóvenes que «el odio no es buen compañero de viaje», que sólo genera «sufrimiento» y que es necesario «sembrar esperanza».

«Les extrañaba que no sintiera odio, que pudiese perdonar», recordó Hernández, una víctima de ETA que también admite que las madres de algunos etarras pueden estar «sufriendo» al ver cómo sus hijos se han convertido en terroristas. «Conozco gente así», sostuvo la viuda de Pedrosa, quien, en todo caso, también admitió que hay familiares que actúan justo al revés, incitando a los jóvenes a entrar en ETA. Los alumnos le preguntaban si sabía quién había matado a su marido, si los habían detenido... «Son impulsivos», subrayó Hernández.

«Voluntad de paz»

Antes había tomado la palabra Mujika, quien admitió las dudas que generó en algunos profesores de su centro la posibilidad de que las víctimas fuesen a las aulas. «Había algunas voces críticas desde el desconocimiento», explicó el profesor de la ikastola guipuzcoana, quien en ningún momento dudó de los alumnos. Sí de otros. «En el profesorado y los padres falta una verdadera voluntad de paz».

A su juicio, la sociedad civil ha sufrido «una degradación moral que se ha trasladado a las nuevas generaciones». Para Mujika, la presencia de los afectados por la violencia ha sido fundamental. «Hoy tenemos conciencia de la realidad de las víctimas». Unos planteamientos muy similares a los expuestos por Etxeberria.

El profesor de Ética recordó que el proyecto de 'Víctimas educadoras' buscaba superar una «laguna» hasta ese momento existente: el «crudo abandono» al que habían estado sometidos los afectados por el terrorismo. Etxeberria recaló que antes de que una víctima fuese a las aulas se realizaba una preparación, se le explicaba que tenía que tener una función educadora, que tenía que representar a todas las víctimas y que era necesario que hubiese superado el «proceso de duelo».

Mujika leyó una nota escrita por un adolescente después de escuchar en su ikastola a una víctima del terror: «Esta charla puede servir mucho para darse cuenta de que el odio no sirve para nada».

«LAMENTAR EL DAÑO CAUSADO PUEDE SER UN EJERCICIO DE CINISMO»

Etxeberria, Mujika y Hernández también aludieron al papel de la izquierda abertzale a preguntas de los asistentes al foro. «Decir que lamento el daño causado puede ser un paso positivo o un ejercicio de cinismo. Es decir, lamentar el daño causado a la víctima, pero estuvo bien matarla. Mientras no se condene el pasado, la herida no se puede

cerrar», remarcó el profesor de Ética. «No tengo demasiada esperanza de que la izquierda abertzale utilice la palabra condena», admitió Mujika, a quien se le preguntó si ve factible que la Federación de Ikastolas emita algún día un comunicado condenando de forma oficial el terrorismo. «Mientras no lo haga la izquierda abertzale, no será fácil».

DOS VÍCTIMAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA «GLENCREE» OFRECEN SU TESTIMONIO SIN ODIOS EN UN SEMINARIO ORGANIZADO POR BAKEOLA EN BILBAO

El martes 10 de noviembre, Patxi Elola y Axun Lasa, ofrecieron su testimonio en un seminario organizado por Bakeola en Bilbao. Elola pasó de militar en la primera ETA de la dictadura a ser un amenazado en democracia como activista de Gesto por la Paz y concejal del PSE en Zarautz.



Axun Lasa es hermano de Joxean Lasa, miembro de ETA secuestrado, torturado y enterrado en cal viva por los GAL en 1983 junto a José Ignacio Zabala, el principio de la guerra sucia contra ETA. Ambos participaron en el programa «Glencree» y se reunieron entre 207 y 2011 en este valle irlandés a propuesta de la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco en una iniciativa que concluyó con un relato final en el que aseguraban que su dolor «es el mismo».

Patxi Elola, Víctima de ETA «ME ACERQUÉ A LOS QUE ERAN «LOS OTROS»

El socialista Patxi Elola contó el martes 10 de diciembre su historia. Militó en ETA político militar en la dictadura. Después regresó a Zarautz y participó en la creación de Euskadiko Ezkerra. A principios de los 80 ya le consideraban un «traidor». «Yo estaba seguro de que lo que hacía estaba bien, pero era una situación muy dura» y él se pronunciaba públicamente en contra de los atentados.

Llegó la confluencia de su partido con el PSE. «Y si antes era arrepentido y traidor, ahora era español». Empezó «timidamente» a protestar contra los asesinatos y continuos secuestros de la mano de Gesto por la Paz; también contra las muertes de terroristas. Acabó en la primera fila de las concentraciones que durante dos años fueron boicoteadas por vecinos de la izquierda abertzale. En 1999 llegó a concejal. «A los tres meses me quemaron el garaje, la furgoneta, el material...» Elola era y es jardinero de profesión y «político de vocación».

Le hicieron pintadas, amenazas de muerte. Llegó la «socialización del dolor» bendecida por HB y se vio escoltado. Cuando Maixabel Lasa y Txema Urkijo, le llamaron para implicarle en Glencree, se negó. No tenía ninguna gana. Acabó cambiando de opinión. Sintió empatía por el sufrimiento supremo de la pérdida de un ser querido. «Me acerqué a esos que denominábamos los otros. Paseé de no querer saber nada de las víctimas del otro lado a sentarme con ellas». Fue «positivo», afirmó.

Él ha extraído un par de lecciones. Una, que el «acercamiento» en la sociedad vasca será «más fácil» si quienes han sido afectados directamente «se mueven». «Si yo no me muevo, mi familia, mis amigos, mi partido a nivel local no se van a mover, porque son los que me han apoyado siempre al cien por cien».

Otra, que no siempre es bueno «juntarse». Sí «cuando el objetivo está claro». «Tengo mis dudas sobre la proliferación de actos para hablar de convivencia», dijo. «En algunos casos creo que son para tapar parte de la historia o no reconocerla, y hacer publicidad cuando no hay una intención clara de avanzar en este tema».

Elola no tiene «mucha prisa». Asume que hará falta «una generación o más» para desenterrar la cultura violenta. Y pide el «máximo respeto y comprensión» a las víctimas que no quieren participar en estos proyectos.

Asun Lasa / Víctima de los GAL «SIENTO MUCHO NO HABERME REBELADO»

Axun Lasa hizo el martes 10 de diciembre un llamamiento nítido a los «responsables directos» del «terrorismo de ETA y del terrorismo de los aparatos del Estado» («No son excesos policiales, no vamos a engañarnos», matizó) para que pidan «perdón» por sus «atrocidades». Después solicitó una reflexión general («Todos nosotros llevamos nuestra parte de responsabilidad») y empezó consigo misma: «Yo aprovecho esta oportunidad para decirles a todas las víctimas de ETA que de verdad siento mucho el dolor que seguro les produjo mi comportamiento. Reconozco que tomé parte en algunos actos en los que debían de sentirse aún más heridos. Y porque más tarde tampoco tuve valor y valentía para rebelarme y gritar en contra de esos actos, y mucho menos para acercarme a ellas. No lo hice y me entristece reconocerlo».

La hermana de Joxean Lasa, asesinado por los GAL en 1983, afirmó que de la mezcla del dolor de las víctimas de ETA y del suyo salió «una unión muy fuerte». «Cuando escucho a una víctima contar su experiencia loro por ella», dijo tragando con dificultad.

Visiblemente emocionada, se mostró «muy dolorida» con la ciudadanía en general y con los partidos en particular.

Con la sociedad, porque muchos no la reconocen como víctima: Me he sentido y me siento dañada por gran parte de la sociedad, por su incompreensión del dolor que arrastro como persona herida, como hermana de Joxean, secuestrado, torturado y enterrado en cal viva junto a Joxe. Doce largos años sin saber dónde se encontraban y luego no poder acogerlos y enterrarlos.

Tampoco comprende por qué después de más de dos años del cese de ETA, los partidos no han emprendido «un acercamiento responsable y sincero» en favor de un «proyecto de paz» que incluya a «todas las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto». No entiende que nadie se sienta «tan puro» para no escuchar a otro. «Yo tengo mi parte de responsabilidad, tú la tuya... Somos distintos, no somos mejores ni peores».

LA ESCUELA VASCA RESPALDA LA PROPUESTA DE LAKUA PARA EDUCAR EN PAZ Y CONVIVENCIA

El Gobierno aprobó el martes 4 de febrero el plan, que recoge las aportaciones del Consejo Escolar.

El Gobierno vasco ha aprobado la vertiente del Plan de Paz centrada en la educación, y lo ha hecho con la tranquilidad de saber que ha contado con el aval del Consejo Escolar de Euskadi para poner en marcha las propuestas. Para diseñar el programa, que entre otras cuestiones da continuidad al testimonio de las víctimas en las aulas y lo amplía a los damnificados por abusos policiales, Lakua ha optado por el consenso manteniéndose en permanente contacto con los agentes educativos, y ensanchando la autonomía de los centros para que puedan aplicar las iniciativas solo si así lo desean y en la forma en que lo deseen. Ha obtenido su visto bueno, lo que garantiza la puesta en marcha de las propuestas sin sobresaltos. Antes de presentar el borrador en noviembre, el Ejecutivo ya se había reunido con la comunidad educativa para hacerle llegar el documento y, tras esa presentación, volvió a abrir un periodo de consultas de dos meses para recoger las aportaciones de esos agentes en el texto final. El Consejo Escolar, que ya consideró "positivo y bien orientado" el borrador, ha vuelto a mostrar su respaldo a la versión definitiva al comprobar cómo se han incorporado al programa la práctica totalidad de sus observaciones.

El aval del Consejo Escolar, que agrupa a representantes de la enseñanza pública y privada, de la universidad y de los sindicatos de estudiantes, entre otros, contrasta con el enroque de los partidos ante el Plan de Paz o en la Ponencia de Paz. Mientras el consenso no termina de aflorar entre las formaciones, sí ha podido hacerlo a nivel social: ha sido posible entre el Gobierno vasco y los agentes educativos, y también en el homenaje al ertzaina Joseba Goikoetxea, celebrado el viernes 22 de noviembre, que congregó a víctimas de ETA y de los GAL, y a presos de la vía Nancloares. Lakua ya firmó un acuerdo marco con la escuela



vasca en octubre del pasado año, cuando presentó el pacto Gizalegez para prevenir conflictos desde la educación, y se propuso trasladar ese mismo consenso a las iniciativas concretas que se derivaran de ese marco general.

El Gobierno vasco aprobó el martes 4 de febrero las Bases y Proyectos del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 en el ámbito educativo, un plan que además de la presencia de las víctimas en las aulas, recoge la iniciativa de bonos Elkarrekin, que permitirá que las entidades sociales que trabajan en el ámbito de la paz y la convivencia formen a los profesores o asesoren a los centros a cambio de una aportación económica por hora justificada de servicio. Se dispondrá de un fondo de 250.000 euros, y este año se desplegará como experiencia piloto. Fuentes de Lakua explican que aún no se ha implantado, y que se están acometiendo las gestiones pertinentes para aprobar el decreto. El plan también contempla la renovación de la web Eskola Bakegune, con material didáctico de interés para los profesores.

En cuanto a la presencia de las víctimas en las aulas de 4º de ESO y Bachiller, bajo el programa Adi-adian, se recalca la autonomía de los centros educativos. Según las mismas fuentes, ese principio se traduce en que el Gobierno vasco no obligará a ninguna escuela a acogerse al proyecto y, por otra parte, se ofrecerá flexibilidad a los centros que lo abracen, ya que podrán optar por el testimonio audiovisual, el escrito, el presencial o una obra de teatro. Sin embargo, no significa que cada escuela pueda decidir qué víctimas acuden a sus aulas, sino que el grupo de damnificados que podrán

ofrecer su testimonio será fijado por los expertos que desplegarán la iniciativa del Gobierno vasco. Como novedad, Lakua ya avanzó que apostaría por sumar al plan a todas las víctimas reconocidas por el Parlamento Vasco, también los damnificados por abusos policiales de 1960 a 1978. Esa apuesta por la autonomía de los centros fue aplaudida por el Consejo Escolar, que también valoró la apuesta por el consenso, ya que el borrador se puso en conocimiento de la comunidad educativa para recoger sus aportaciones, y partió del acuerdo Gizalegez. Además, el consejo agradeció que el plan no propusiera hacer borrón y cuenta nueva, sino complementar iniciativas ya en marcha, lo que facilitaría la activación de las propuestas en los centros educativos. Sí planteó alguna duda terminológica y pidió aclarar las alusiones que consideraba confusas -el Gobierno vasco dice que ya lo ha hecho en la versión final-, pero ninguna observación comprometía en exceso el contenido del plan de Lakua.

En todo caso, las mayores objeciones se centraron en señalar la complejidad de llevar el programa Elkarrekin no solo a la educación formal e informal, sino también a los ámbitos de la convivencia local y la participación ciudadana, y se echaba en falta una evaluación de las actividades de las entidades sociales para medir sus repercusiones en la escuela. A modo de respuesta, desde el Gobierno de Iñigo Urkullu avanzan que se hará "cierto seguimiento" de las actividades del plan Elkarrekin.

BILDU TILDA DE "ERROR" QUE LAS VÍCTIMAS LLEVEN SUS TESTIMONIOS A LAS AULAS

Considera necesario un «consenso» político previo.

EH Bildu no ve con buenos ojos que las víctimas, tanto del terrorismo como de abusos policiales, lleven su testimonio a las aulas. La coalición abertzale consideró el martes 4 de febrero que este programa es un «error», ya que «todavía no se ha logrado un acuerdo suficiente» entre los partidos ni a nivel social sobre la «violencia política».

EL GOBIERNO VASCO ASEGURA QUE LOS COLEGIOS NO ELIGEN A LAS VÍCTIMAS QUE ACUDEN A SUS AULAS

Jonan Fernández subraya que todos los damnificados, ya sean por el terrorismo o por abusos policiales, llevan «el mismo mensaje educativo».

El Gobierno vasco y no los centros escolares es el que tiene la última palabra a la hora de decidir qué víctimas acuden a dar su testimonio a las aulas. El secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, quiso acabar el lunes 17 de febrero con la polémica que rodeaba esta iniciativa pedagógica desde que desde el Ejecutivo de Vitoria apostara por llevar también a los colegios vascos las experiencias de aquellas personas que sufrieron abusos policiales con una motivación política. Hasta ahora, solo los damnificados por el terrorismo -ETA, los GAL y otros grupos de extrema derecha- participaban en este programa.

El Gobierno vasco ya había anunciado a principio de su mandato su intención de dar continuidad al programa de 'víctimas educadoras' que el PSE puso en marcha en la pasada legislatura, pero ampliándolo y reforzándolo. Entre los cambios que se introdujeron en la iniciativa, ahora rebautizada como 'Adi-adian' figura la de abrir las puertas de los centros también a víctimas de abusos policiales que han sido reconoci-



das institucionalmente. En concreto, son trece los damnificados de distinta índole que, por ahora, dan forma a este programa. Los recelos, sin embargo, no tardaron en salir a la luz. ¿Y si hay colegios que solo piden que vayan víctimas de un signo? ¿Qué mensaje se va a trasladar? Y un temor que han manifestado en reiteradas ocasiones desde del PP y UPyD, el de que la presencia de estas víctimas, permita justificar la barbarie de ETA.

El secretario de Paz y Convivencia compareció junto a la consejera Cristina Uriarte en la comisión de Educación del Parlamento vasco para explicar las iniciativas que recoge el plan de paz en referencia al ámbito educativo. Fernández tuvo que hacer frente a las dudas, como también a las críticas, que rodean el programa de víctimas en las aulas. Sin entrar demasiado al detalle -está previsto que el Ejecutivo haga un balance completo a

final de curso-, Jonan afirmó que es «radicalmente falso» que sean los colegios vascos los que elijan a los damnificados que acuden a sus aulas. «Lo que deciden es si quieren un testimonio directo, escrito, audiovisual o de teatro-fórum», explicó. Es el equipo conjunto creado entre Departamento de Educación y la Secretaría de Paz el que, según añadió

Fernández, selecciona a los damnificados «en función de criterios de disponibilidad, cercanía, repetición, cansancio, etcétera».

El secretario de Paz y Convivencia quiso, asimismo, hacer especial hincapié en el papel que juegan las víctimas en los colegios. Así, remarcó que todos los damnificados «representan un mismo mensaje educativo». «No hay dos o tres -apuntó-, ni víctimas con un tipo de mensaje otras con uno distinto; sólo hay uno y es el que apuesta por la convivencia y se opone a la violencia. Eso es lo que se lleva a las aulas», expresó tajante Jonan Fernández.

Es esta cuestión la que preocupa en las filas socialistas. Isabel Celaá, exconsejera de Educación y una de las impulsoras del programa 'víctimas educadoras' subrayó que «el plan se la juega en la gestión», al tiempo que advirtió que si «centros con una ideología pretenden utilizar a las víctimas de abusos policiales para hacer determinadas justificaciones, habremos fracasado».

La actual consejera de Educación, por su parte, centró su comparecencia en la Cámara de Vitoria en señalar el «alto valor pedagógico» de esta iniciativa. La experiencia con los damnificados está prevista entre alumnos de cuarto de la ESO y Bachiller, y como parte de las asignaturas de «tutoría, ética, filosofía e historia», enumeró. Cristina Uriarte, que recordó el respaldo que la comunidad educativa -a través del Consejo Escolar- dio a los diferentes programas previstos en el plan de paz, destacó el momento «histórico» que vive Euskadi, tras el cese de ETA. «Un momento -apostilló- en el que la educación tiene también su papel para ayudar en el proceso» para favorecer una «cultura de la paz basada en la dignidad humana».

232 VÍCTIMAS DE ABUSOS POLICIALES

La Comisión de valoración que analiza los casos de víctimas de abusos y excesos policiales entre 1960 y 1978 ha recibido desde junio de 2012 un total de 232 solicitudes, 110 de ellas poco antes de que se agotara el plazo fijado por el decreto heredado del Gobierno de Patxi López.

De todos estos expedientes, la comisión formada por el Gobierno y expertos en derechos humanos, ha cerrado 56. Hasta el momento, sólo ocho de estas víctimas han sido resar-

cidas económicamente: fue al finalizar la legislatura socialista, en un acto público encabezado por la entonces consejera Idoia Mendía, que podría repetirse ahora con los casos considerados probados y bajo la tutela de Lehendakaritzia.

Las cifras figuran en la memoria del segundo semestre de 2013 que ha enviado al Parlamento este grupo presidido por la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando. En el texto, de cuatro páginas, se aconseja al Gobierno que en el nuevo decreto que recogerá los casos entre finales de 1978 y 2014 se incorporen también las denuncias de torturas.

BILBAO CELEBRA EL DÍA DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ

Con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, el Ayuntamiento de Bilbao y agentes sociales escenifican bajo el puente de La Salve su decidida apuesta por la convivencia. El alcalde de la villa, Iñaki Azkuna señala que **“tenemos que luchar, sí, pero para lograr la paz”**.



Bajo el puente de La Salve hay un mural que lleva por título *“Giltza bat”* (una llave). En él hay dos mujeres hablando. De la oreja de una de ellas cuelga la herramienta que se utiliza para abrir y cerrar puertas, pero en este caso se quiere simbolizar la libre expresión, el diálogo, la convivencia, la empatía y la comprensión. El jueves 30 de enero se celebró el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que coincide con el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi. Por ello el Ayuntamiento de Bilbao organizó, junto a distintos agentes sociales, un acto junto a la gigantesca pintura para reivindicar la cultura de la paz y la no violencia al que asistieron todos los partidos políticos representados en el Consistorio, a excepción de Bildu, que atribuyó su ausencia *“a motivos de agenda y a la preparación del pleno que se iba a celebrar al día siguiente”*. El encuentro contó con la presencia del alcalde de la villa, Iñaki Azkuna, quien

destacó que personas de su generación *“nunca creímos que se acabaría la violencia”*, ya que como comentó nació en la posguerra, vivió la Segunda Guerra Mundial y luego el fenómeno de ETA, *“el cual nunca pensé que se iba a acabar”*. En este sentido, añadió que, *“la situación ahora ha cambiado a mejor y vemos con cierta esperanza que esto termine definitivamente algún día”*. *“Por qué tenemos que tener tanta violencia, se preguntó Azkuna, al tiempo que repasaba las barbaridades, guerras, aniquilaciones, perversiones humanas”* de las que se hacen eco los medios de comunicación. *“Tenemos que luchar, sí, pero para lograr la paz definitiva en este país de nuestros amores”*, concluyó. El alcalde mencionó la gran labor de Gandhi por la libertad de su pueblo, pero también la del Papa Juan XXIII por su papel en la crisis de los misiles de Cuba, un conflicto que *“casi nos lleva a una guerra mundial”*. En el acto también intervino el Secretario

de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, quien instó a trasladar el diálogo al ámbito de la política para alcanzar *“consensos”* necesarios en Euskadi. El mural, de 990 metros cuadrados, es obra de Verónica y Christina Werckmeister, artistas norteamericanas afincadas en Vitoria que lo completaron junto a otras dos personas en mes y medio. Las dos mujeres realizaron una investigación del conflicto vasco. Se reunieron con víctimas de ETA y los GAL, y se dieron cuenta de que *“las viudas de las víctimas deben seguir adelante y tienen cosas que decir. El diálogo ayuda, el silencio es el enemigo de la paz”*, señala Verónica. Son muchas las personas que pasan a diario frente a la pintura sin conocer el significado que encierra, lo que ha llevado al Ayuntamiento a plantearse la posibilidad de instalar una placa explicativa. El jueves 30 de enero, con motivo del Día de la No Violencia y la Paz, se instaló ante el mural una gran pizarra con el lema *“Yo tengo la llave”* para que los interesados pudieran escribir o dibujar sus mensajes. También se habilitó un espacio para colgar llaves viejas, un gesto reivindicativo lleno de simbolismo que ratificó el compromiso de la ciudadanía a favor de la paz.

LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS POLICIALES DEBUTAN EN LAS AULAS VASCAS

Los primeros alumnos vascos ya han tenido la oportunidad de escuchar el relato de la experiencia de víctimas de abusos policiales. La iniciativa es el resultado de la incorporación al ámbito educativo del Plan de Paz de estos agentes hasta ahora apartados de las aulas, donde solo los damnificados por la violencia terrorista habían tenido ocasión de compartir testimonio con los estudiantes. El Gobierno vasco presentó el martes 4 de febrero las nuevas bases de este proyecto en las que se recogen las aportaciones del Consejo Escolar. Este órgano ha canalizado las sugerencias que a lo largo de dos meses han hecho llegar hasta Lakua los diferentes agentes educativos. Como resultado, el plan del Ejecutivo autonómico ha recogido la totalidad de estas aportaciones, según admitió la consejera de Educación, Cristina Uriarte. La titular del área hizo especial hincapié en el interés del Gabinete Urkullu de aprovechar el trabajo realizado hasta ahora en esta

materia para reforzar un camino iniciado hace dos legislaturas. Pero lo cierto es que la incorporación de las víctimas de abusos policiales *“reconocidas institucionalmente”* abre un nuevo horizonte para los alumnos que ya han tenido la oportunidad de escuchar sus primeros testimonios. De esta forma se cumplen los compromisos adquiridos en noviembre por la consejera y el principal responsable de la Secretaría de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, donde se enmarca esta iniciativa. Estos meses han servido para que los responsables del área hayan recorrido los centros donde se ha demandado la puesta en práctica del Plan de Paz. La iniciativa del Gobierno vasco incluye una guía didáctica basada en cinco ejes que se ha repartido entre las ikastolas para disipar las dudas que el profesorado pudiera tener al respecto y fijar las bases sobre cómo actuar antes, durante y después de estas intervenciones en las aulas.

COVITE ACUSA A ETA DE “GENOCIDIO” ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL DE LA HAYA

Insta a investigar a ETA y a Batasuna por crímenes contra Lesa Humanidad.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) presentó el lunes 17 de febrero una denuncia contra ETA ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, acusándola de genocidio y solicitó que investigue a tres dirigentes de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi, y a ocho destacados miembros de ETA por crímenes de lesa humanidad. La delegación la conformaron la presidenta de la asociación, Consuelo Ordóñez; Josu Puelles, hermano del policía Eduardo Puelles, asesinado por ETA en 2009; y José Joaquín Martínez y Toñi Santiago, padres de la niña Silvia Martínez, muerta a manos de ETA en 2002, de apenas seis años. Covite presentó un extenso informe jurídico ante la Unidad de Información y Evidencias de la Oficina del Fiscal del alto tribunal. En medio centenar de folios, esta asociación de víctimas estima evidenciado que se han cometido graves crímenes de trascendencia internacional recogidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma, por lo que se pide a la Fiscalía que inicie de oficio una investigación.

Aclara que estos crímenes *“no se produjeron en un contexto de conflicto armado”*, como sostiene la izquierda abertzale. *“No están, por tanto, sujetos a los estándares internacionales de resoluciones de conflictos; ni tampoco se decretó el estado de guerra, de excepción o de sitio”*. En un exhaustivo informe, Covite trata de explicar qué es ETA y cuál ha sido su recorrido histórico de asesinatos. Y asegura en su denuncia que es responsable del asesinato de 24 niños, *“la mayoría por medio de explosivos en sus hogares”*, más de 11.000 asesinatos (848 consumados y una estimación de 10.260 en grado de tentativa), delitos de persecución y traslado forzoso de más de 200.000 personas (el 10% de la población), *secuestros y torturas*. Para llevar a cabo esta recopilación de datos, Covite se ha basado en sentencias judiciales.

Según esta asociación de víctimas, *“ETA ha seguido una línea de conducta que responde a un ataque sistemático y gene-*



ralizado contra la población civil. Una planificación de los crímenes que se definió por la rama política de ETA -la izquierda abertzale- como la *“socialización del sufrimiento”*. El informe argumenta, además, que ETA ha utilizado una estrategia de *“desdoblamiento”* orgánico estructural. En este sentido, adjuntaron una lista de *“altos responsables”* que, en su opinión deben ser enjuiciados por crímenes contra la humanidad. Incluye los nombres de Josu Ternera, Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Fernando Barrena, José Luis Eciolaza *“Dienteputo”* Tomás Elorriaga, Juan Cruz Maiztegui, Eusebio Arzallus, Rafael Santiago Azcolain, Iratxe Sorzabal y David Plá Martín.

El desglose de la denuncia presentada ante el Tribunal Penal Internacional incluye datos como la cifra media que estiman que cada año eran víctimas de la persecución etarra: 40.000 personas por año. Además, alrededor del 10% de la población de Euskadi *“fue obligada por el clima*



de terror a abandonar sus hogares y a huir fuera del País Vasco”

Las acusaciones de las víctimas hablan de *“genocidio”* etarra. *“Estos actos contra los Derechos Humanos también pudieran constituir un delito de genocidio al haber sido perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o racial”*. *“Los crímenes se cometían teniendo como objetivo principal a ciudadanos españoles residentes en Euskadi,*

que eran considerados miembros del grupo nacional opuesto a sus intereses, y a los que destruir o expulsar. Los miembros de este grupo nacional eran considerados españoles y maketos., término despectivo para referirse a inmigrantes de otra región de habla no euskera”. Covite sostiene asimismo, que ante estos crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA, *“España no tipifica ni enjuicia todos estos actos contra los Derechos Humanos como graves crímenes imprescriptibles: tentativas masivas y sistemáticas de asesinatos, violencia de persecución y el traslado forzoso de población”*. Y, entre otras circunstancias, *“el Estado ha evidenciado una falta de disposición para enjuiciar a los perpetradores: citándoles y reuniéndose con altos responsables sin ejecutar órdenes de busca y captura internacionales en vigor; no ha investigado ni enjuiciado -incumpliendo mandatos judiciales- la comisión de crímenes de lesa humanidad; no ha investigado ni perseguido individualmente a los dirigentes, altos responsables o ideólogos de las organizaciones responsables de estos crímenes del artículo 7 contra los Derechos Humanos; ha incumplido estándares internacionales de debido proceso, con retrasos y obstrucciones, no permitiendo participar a las víctimas. Lo que ha derivado en un patrón de impunidad que afecta a cerca de 400 casos y que ha beneficiado especialmente a los más altos responsables e ideólogos”*, concluye el texto de la denuncia.

El gesto de Covite no tardó en despertar las críticas de Sortu. Su portavoz Amaia Izko acusó al colectivo de ser una *“auténtica terminal política de los sectores que apuestan por la venganza”*.

EL CONGRESO PIDE DEFENDER ANTE LA HAYA QUE LOS CRÍMENES DE ETA NO PRESCRIBAN

El congreso pide que el Gobierno reclame a La Haya que incluya el terrorismo como crimen de Lesa humanidad.

El Pleno del Congreso aprobó el jueves 27 de febrero al término del Debate del Estado de la Nación, exigir al Gobierno que "impulse las iniciativas necesarias para lograr una definición consensuada de terrorismo en el ámbito internacional" y "promover la inclusión del crimen de terrorismo en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional". Una resolución con la que la Cámara Baja ordena al Ejecutivo español que haga lo posible para que el Tribunal de La Haya considere crímenes de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles, a los cometidos por ETA. La aprobación de esta propuesta, a iniciativa de UPyD pactada con el PP y apoyada por los socialistas, también deja claro que hay que seguir avanzando en la atención y protección de las víctimas y que sólo la derrota de ETA y su estrategia política permitirá que las víctimas se sientan «apoyadas y respetadas». La resolución, que salió adelante con 289 votos a favor, 22 en contra y 23 abstenciones, hace también referencia al futuro



memorial para las víctimas, previsto en la ley, que «permitirá honrar solemnemente» la memoria de todas ellas «para las generaciones venideras».

La iniciativa parlamentaria defiende que «la generosidad y altísimo sacrificio» de las víctimas «deben dictar el relato de la verdad histórica de España». La propuesta insta a construir ese relato en el que las víctimas «se sientan apoyadas y respetadas», sin que quepa justificación alguna del terrorismo. Se apunta que una de las herramientas sea el impulso del memorial para las víctimas del terrorismo, cuya creación y posterior gestión es objeto de polémica entre los gobiernos central y el vasco.

El Congreso solicita también al Ejecutivo de Rajoy que «continúe trabajando de forma prioritaria» en las políticas de apoyo y de reconocimiento, bajo los principios de memoria, dignidad y justicia que inspiran la ley de reconocimiento de los damnificados por el terrorismo. Por otra parte, el pleno de la Cámara baja sacó adelante una propuesta del grupo mixto presentada por UPN en la que insta al Gobierno y a las formaciones políticas a trabajar conjuntamente en la consecución del final del terrorismo.

LA AUDIENCIA NACIONAL PIDE JUZGAR A ETA POR GENOCIDIO

Admite una querrela dirigida contra cinco exdirigentes de la organización armada.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) emitió el miércoles 19 de febrero una providencia por la que declara competente al Juzgado Central de Instrucción número 3, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, para instruir la querrela presentada por Luis María Uriarte, hijo de una víctima de ETA, contra cinco exdirigentes de la organización armada entre 1977 y 1983 por un presunto delito de genocidio. En concreto, la querrela va dirigida contra Juan Lorenzo Lasa Mitxelena Txikiardi, Eugenio Etxebeste Antxon, José Luis Ansola Larrañaga Peio el Viejo, Francisco Mujika Garmendia Pakito y Josu Urrutikoetxea Josu Ternera. Con esta decisión, la sección cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por Ángela Murillo -magistrada que fue recusada por la defensa de Arnaldo Otegi por manifiesta animadversión a la izquierda abertzale- enmienda la plana al magistrado Gómez Bermúdez, que en octubre del pasado año, y en sintonía con la Fiscalía, rechazó la querrela al entender que el delito de genocidio cometido en el Estado español no está contemplado entre las competencias de la Audiencia Nacional y, en todo caso, derivó la instrucción a "los órganos judiciales territoriales en los que se hayan cometido supuestamente los hechos denunciados". Ahora, sin embargo, la magistrada Murillo y sus compañeros de la sección cuarta de lo Penal, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, argumentan que la Audiencia



Nacional sí es competente para investigar estos hechos "al tratarse de un delito perpetrado por una organización terrorista".

La primera medida adopta por el Gómez Bermúdez ha sido solicitar a la Policía, Guardia Civil y Ertzaintza que le remita un informe pericial sobre los fines perseguidos por ETA desde su nacimiento hasta la actualidad y sobre los integrantes de las diferentes cúpulas dirigentes que ha tenido la organización armada a lo largo de sus 55 años de existencia.

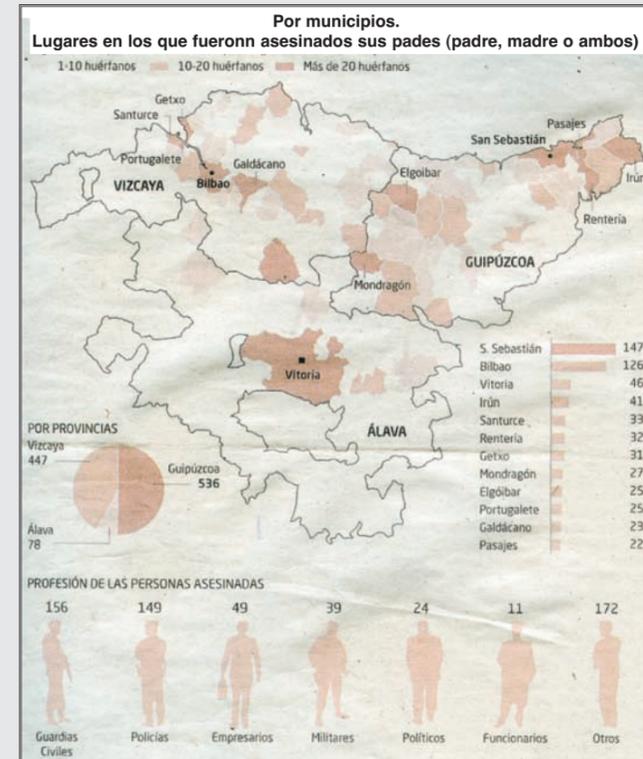
Una vez que tenga en su poder estos informes, será cuando Gómez Bermúdez decidirá si pide otras diligencias y o si abre formalmente la investigación de los hechos denunciados. La decisión adoptada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional llega dos años después del anuncio de ETA de abandonar definitivamente el uso de las armas. Además, de los cinco exdirigentes de ETA a los que se pretende imputar, tres de ellos se encuentran hace años en libertad por haber cumplido sus penas. Ansola Larrañaga Peio el Viejo, que en la actualidad tiene 78 años, fue puesto en libertad en 1999. Antxon Etxebeste, de 63 años, fue extraditado de la República Dominicana en 1997 y está en libertad desde 2004. Lasa Mitxelena Txikiardi, de 59 años, quedó en libertad en diciembre del pasado año al ser derogada la doctrina Parot tras haber cumplido 28 años de prisión. Por lo que respecta a los otros dos contra quienes va dirigida la querrela, Francisco Mujika Garmendia se encuentra en prisión y Josu Urrutikoetxea está huido.

EL COVITE ELABORA UN MAPA CON LOS CRÍMENES TERRORISTAS COMETIDOS EN EUSKADI

Covite elabora un mapa en el que se detallan los 600 asesinatos terroristas cometidos en Euskadi desde 1960 y cuantifica los hijos que perdieron a sus padres: 1.035.

El colectivo de víctimas del terrorismo de Euskadi, Covite, dio a conocer el viernes 24 de enero el 'mapa del terror', una herramienta bibliográfica inédita en la que se recogen y geolocalizan de manera detallada los 600 asesinatos que tanto ETA como los GAL, el Batallón Vasco Español y otros grupos de extrema derecha cometieron en el País Vasco entre 1960 y 2009. En este último año se produjo el último atentado mortal en Euskadi. ETA acabó con la vida del inspector de Policía Eduardo Puelles en el municipio vizcaíno de Arrigorriaga. La presentación de este novedoso proyecto, que corrió a cargo de Consuelo Ordóñez y Maite Pagazaurtundua, máximas representantes del colectivo de afectados.

Los primeros trazos del 'mapa del terror' (www.mapadelterror.com) salieron a la luz a principios de diciembre, durante el último congreso que Covite celebró en San Sebastián bajo el título 'La verdad que cura'. Entre los datos que entonces se hicieron públicos figuraba, por ejemplo, la trágica cifra de 1.035 huérfanos que el terrorismo ha dejado tras de sí en Euskadi. Este trabajo, disponible en cuatro idiomas -castellano, euskera, inglés y francés-, ofrece, sin embargo, un amplio abanico de infor-



mación. Así, los asesinatos han sido contextualizados con una ficha individual de cada víctima, que incluye su fotografía, localidad de origen, edad, número de hijos -en caso de que los tuviera-, fecha y lugar del atentado, banda que perpetró el crimen y un breve relato de las circunstancias del mismo. En algunos de los casos también se han incluido fotos del día del asesinato, más de un centenar de noticias de periódicos y un total de catorce vídeos, de entre tres y cinco minutos, en los que familiares de los damnificados narran lo sucedido. La herramienta digital permite, además, realizar búsquedas concretas. Hasta el punto de que es posible discriminar asesinatos en función de la profesión de la víctima, la localidad en la que se produjo el crimen, el grupo armado e incluso el arma utilizada. A modo de ejemplo, el terrorismo acabó en Euskadi con la

vida de 49 empresarios, 156 guardias civiles y 24 políticos, entre otras víctimas. La mayoría eran naturales del País Vasco y de Castilla y León, y tenían entre 30 y 39 años. De los 600 asesinados, 581 eran hombres y 19 mujeres, y más de la mitad de los crímenes se cometieron en la provincia de Gipuzkoa. En cuanto a las armas empleadas: en 345 atentados se utilizó pistola; en 131, subfusil; en 26, coche bomba; en otras 26, bomba lapa; en 67, otro tipo de armas y, en un caso, carta bomba. En éste murió el cartero José Antonio Cardosa, al que le explotó un paquete bomba cuando realizaba su ronda habitual. El destinatario era, al parecer, Ildelfonso Salazar, entonces militante de HB.

El 'mapa del terror' de Covite incluye, asimismo, un calendario en el que se muestra la frecuencia de atentados de los diferentes grupos terroristas. En él aparecen señalados en rojo los días en los que, entre los años 1960 y 2009, se produjeron atentados mortales. El 4 de octubre es una de las fechas en las que el terrorismo más golpeó en Euskadi, con ocho víctimas. Cabe señalar que tanto el 25 de diciembre -Navidad- y el 1 de enero -Año Nuevo- no hubo atentados con víctimas mortales, según se recoge en la iniciativa multimedia. No así en jornadas tan señaladas como Nochebuena y Nochevieja, con dos fallecidos en ataques terroristas en cada una de ellas. La presentación de esta herramienta, en cuya elaboración el colectivo de víctimas ha invertido alrededor de ocho meses, pretende evitar que el final del terrorismo traiga consigo la «desmemoria». Al acto, celebrado en Vitoria, acudió una nutrida representación de la Diputación alavesa, encabezada por su diputado general, Javier De Andrés, y el presidente de las Juntas Generales de dicho territorio histórico, Juan Antonio Zárate, así como el asesor de Víctimas del Gobierno vasco, Txema Urkijo; el subdelegado del Gobierno en Álava, Antón Sáenz de Santamaría, así como el coordinador de Lokarri, Paul Ríos.

46 AÑOS POR INTENTAR MATAR CINCO VECES A ATUTXA

La Audiencia Nacional ha condenado a 46 años de cárcel al etarra del "comando Bizkaia" Gorka Martínez Ahedo por intentar asesinar hasta en cinco ocasiones en 1994 al entonces consejero de Interior, Juan María Atutxa, así como al sargento José Carollo. El alto tribunal le atribuye dos delitos de intento de asesinato. deberá abonar al sargento 180.000 euros por sus heridas.



LAS VÍCTIMAS, ANTE EL CAOS DE LA JUSTICIA

En España es imposible saber cuántos atentados terroristas permanecen sin resolver. Una oficina de la Audiencia Nacional recopila desde hace tres años centenares de sumarios para crear una base de datos fiable e informar a los damnificados.



Las preguntas son claras y directas. Las respuestas, no tanto.

¿Cuántos crímenes terroristas permanecen aún sin resolver? ¿Qué cifra cuenta con una sentencia condenatoria? ¿Cuántos casos han prescrito o han sido sobreseídos? Tras décadas de violencia, más de un millar de asesinados y miles de heridos, las víctimas no disponen de una base de datos oficial y accesible en la que se recojan al detalle los sumarios de cada atentado. O, lo que es peor, en algunos casos ni siquiera están localizados los expedientes. La Oficina de Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional trabaja desde hace tres años en la recopilación de todos los archivos. Son cinco mujeres con un objetivo: poner orden al caos de la justicia.

La oficina nació en 2006 de la mano del Ministerio de Justicia, aunque depende directamente de la presidencia de la Audiencia Nacional. En el origen de largo están los atentados del 11-M de dos años antes. El alto tribunal se vio colapsado por cientos de víctimas que requerían información sobre el proceso. Pero no fue hasta 2010 cuando este organismo se sumergió en la ardua tarea de localizar e investigar los sumarios de los atentados terroristas para crear una «macrobase de datos digitalizada» que sea útil para los afectados. «Introducir el nombre de una víctima y que salga todo lo referente a su caso o escribir los datos de un terrorista y que aparezcan todas sus condenas es nuestro sueño», asegura la coordinadora de esta oficina, Carmen Alba.

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, se reunió hace tres años con la entonces máxima representante de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, con la portavoz de Covite, Cristina Cuesta, y con Carmen Ladrón de Guevara, vicepresidenta de la asociación Dignidad y Justicia. Ellas le instaron a arrojar luz sobre 349 asesinatos de ETA -todos posteriores a 1977- que, presuntamente, estaban pendientes de resolución. Esos eran, al menos, sus propios cálculos. El presidente del tribunal se comprometió entonces a estudiar individualmente cada caso, para lo que solicitó la colaboración de la Fiscalía. La búsqueda de esos expedientes «está completamente finalizada», según revelan desde la oficina. La única causa que quedaría

COVITE DENUNCIA ERRORES EN SUMARIOS DE ATENTADOS

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en Euskadi, Covite denunció el jueves 13 de febrero «graves irregularidades» en la tutela judicial de casos de asesinato en los que «se ha omitido el trámite de

ofrecimiento de acciones a las víctimas de atentados terroristas». Una omisión que, según apuntaron, «vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y conlleva la nulidad de las actuaciones judiciales».

por localizar sería la relativa a Jeanine Pueyo, una ciudadana francesa presuntamente relacionada con grupos de extrema derecha, cuyo asesinato reivindicaron los Comandos Independientes Especiales de Apoyo a ETA Militar (KIBAETAM), si bien la información sobre este sumario ha sido requerida al país galo. Es probable que dicho atentado no forme parte de la jurisdicción española. Se trata de una ciudadana francesa, el atentado fue cometido en el país vecino y en

el año en el que se produjo el crimen no existía el principio de Justicia universal. Data de 1985.

- ¿Cómo han encarado la recopilación de los sumarios judiciales?

- Es un trabajo muy complejo. Las causas no están ordenadas por el nombre de la víctima ni tampoco por el del terrorista. Cada una tiene un número y tienes que mirar carpetilla a carpetilla. Hablamos de años en los que había multitud de atentados y en los que los medios no eran los que existen hoy día. Tampoco las víctimas estaban tan arropadas como ahora. En los años de plomo, por ejemplo, la gente enterraba a sus muertos a escondidas y las víctimas no acudían a los juicios. En las salas estaba el entorno de ETA apoyando a los terroristas, mientras que las víctimas ni siquiera se enteraban de las sentencias. Estaban muy solas y muy asustadas.

Así se expresa Carmen Alba, que está al frente de la oficina de la Audiencia Nacional desde hace un año. Extremeña, si en algo se defiende con soltura es entre documentos judiciales. Licenciada en Derecho, su padre era magistrado. «He vivido toda mi vida entre sumarios», apunta. A su lado cuenta con cuatro compañeras -una fue nombrada por el Gobierno vasco-, entre las que figuran una psicóloga y una asistente social.

Demanda «en aumento»

Del listado de 349 casos con el que inicialmente trabajaron, el 92% se hallaron en los archivos de la Audiencia Nacional, competente en materia de terrorismo desde su creación en 1977, mientras que 24 sumarios se encontraban en juzgados de Euskadi y dos en Navarra. Media docena de causas fueron expurgadas (destruidas), en su mayoría en el País Vasco, sin que, al parecer, se conozcan los motivos que llevaron a que ello sucediera. La decisión de destruir un sumario corresponde a la junta de expurgo de cada jurisdicción, que es la que insta al juez a dar la orden para que se materialice. Un centenar de casos de los 349 -en concreto, 111- disponen de sentencia firme. Aunque no siempre se ha condenado a todos los autores materiales de un atentado, por lo que para las víctimas esos crímenes en cuestión no estarían cerrados. Un total de 215 están sobreseídos, 11 con carácter definitivo. Es decir, que no se podrán reabrir. Ocho permanecen abiertos a la espera de diligencias.

Desde que la oficina se volcara hace tres años en localizar los más de trescientos casos judiciales a los que hicieron mención Pagazaurtundua, Cuesta y Ladrón de Guevara, sólo les consta la reapertura de dos de estos casos. Se trata del asesinato del empresario Pabxí Arratibel en 1997, mediador en el secuestro de Emiliano Revilla, y el del brigada del Ejército de Tierra Luis Conde, muerto en un atentado de ETA en 2008. Fuera del listado de 349 expedientes, la Audiencia Nacional ha recuperado más de cien causas por accio-

nes terroristas en los últimos dos años, según subrayan desde el órgano de asistencia a los damnificados. Volcada en un trabajo que la «ilusiona», Carmen Alba reconoce que queda mucho por hacer. En los siete años que lleva de andadura, la oficina ha recibido 2.500 peticiones por parte de víctimas para conocer el estado procesal de sus causas o el desarchivo de los sumarios para poder examinarlos con magistrados o fiscales. Lo que hace una media de 350 solicitudes por ejercicio. «Y la demanda va en aumento», subraya su coordinadora.



Pese a haber localizado ya los 349 casos planteados por las asociaciones de víctimas, todos ellos posteriores a 1977, el equipo de la oficina ha decidido continuar con la labor iniciada y «de oficio» ha empezado a buscar e investigar el resto de casos. También los anteriores a la Ley de Amnistía. «Hay personas que nos piden los sumarios de aquellos años. Saben que a nivel judicial no se podrá hacer nada, pero quieren saber qué ocurrió, si hubo una investigación o si se detuvo a alguien y, por lo menos, estuvo un año en prisión», explica Alba. Esta búsqueda les ha llevado a los archivos militares, tanto de Burgos como de El Ferrol. «Son carpetillas con las hojas cosidas, escritas a mano...», describe. -Hay víctimas que consideran que el hecho de que décadas después no exista un archivo digitalizado con todos los casos se debe a que nunca se creyó que los afectados se interesarían algún día por los sumarios-. No creo que fuera algo deliberado. No sólo ocurre con el terrorismo, sino también con delitos comunes. Los medios eran otros.

El objetivo que persigue la oficina es tener digitalizados todos los procedimientos por atentados terroristas, así como crear una macro base con los datos de las víctimas, relacionándolas con su atentado y con el terrorista o terroristas en cuestión, de manera que se pueda hacer llegar la información de una forma «mucho más ágil y en tiempo récord». «Eso es por lo que estamos luchando», remarca Carmen

Alba. En la actualidad, y desde enero, existe una oficina electrónica en la que los afectados sólo pueden ver cuál es el número de procedimiento y conocer el estado de las causas que han sido localizadas. Su enlace está disponible en las páginas web del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial, así como en las de algunos colectivos de damnificados.

Una de las cuestiones que más llama la atención, y que se podrá solventar cuando la base de datos sea una realidad, es

que de los más de mil casos de atentados terroristas -857 víctimas mortales corresponden a ETA- se desconozca cuál es el número de crímenes que siguen pendientes de resolver décadas después. No existe una cifra oficial, ni siquiera en la Audiencia Nacional. Tampoco se conoce cuántos casos han prescrito. Colectivos de víctimas estiman que podrían superar el centenar. Mientras, los damnificados claman justicia.

El trabajo de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo no acaba ahí. Entre sus cometidos figura, asimismo, el de informar a los afectados cuándo un preso sale de permiso o es puesto en libertad. «Con las excarcelaciones que se han producido a raíz de la sentencia contra la 'doctrina Parot', ojalá hubiésemos podido introducir el nombre, por ejemplo, de Inés del Río y que me saliese la lista de todas sus víctimas», expresa Alba. La labor de telefonar a los afectados en estos casos recae en una psicóloga, aunque no siempre es posible localizar a los damnificados. «Lo primero que hay que preguntarles es si quieren conocer una información sobre el terrorista en cuestión. Hay personas que dicen que no porque saber eso les supone un sufrimiento añadido», revela. El pasado año, la oficina realizó más de 200 llamadas para informar sobre excarcelaciones y casi el centenar por permisos de presos relacionados con los casos que afectan a las víctimas a las que se informa.

“LO SENTIMOS, HA PRESCRITO”

Carmen Ibarlucea, viuda de Aureliano Calvo, policía nacional que trabajaba como taxista en San Sebastián, se desplazó el pasado año hasta la Audiencia Nacional para conocer el estado del caso de su marido, asesinado por ETA en 1979. En más de treinta años no había tenido noticias sobre las investigaciones policiales o judiciales. La respuesta fue directa y clara: «lo sentimos, ha prescrito».

Pese a que los damnificados han mostrado sus discrepancias en torno a materias como, por ejemplo, la política penitenciaria o las excarcelaciones relacionadas con la «doctrina Parot», el deseo de justicia es algo que les sin duda les une. Pero no todos han visto cumplida esta máxima. No existe una cifra oficial del número de casos pendientes de resolver, aunque lo que parece seguro es que la lista será abultada. Entre esos casos figura, por ejemplo, el de José Luis Luengos, tiroteado por la banda terrorista en Rentería hace ya 21 años. Empleado de una filial telefónica, era ajeno a la política. ETA emitió un comunicado en el que intentó justificar su asesinato atribuyendo a la víctima ser «un colaborador» de la Guardia Civil. Su novia replicó que dicha afirmación era una «mentira».

El sumario de Luengos se suma a una larga lista de expedientes que llevan el sello «sin resolver». En esta última figura el del empresario Isidro Usabiaga, que en julio de 1997 fue asesinado

cuando regresaba a casa de madrugada durante las fiestas de Ordizia. Su atentado se produjo tres meses después de que José María Aldaya fuera liberado de su largo cautiverio a manos de la banda terrorista. El expediente de Usabiaga cuenta con una sentencia, la que condenó en 2003 a Carlos Almorza Arrieta, «Pedrito de Andoain», por amenazar a la víctima para que cediera al chantaje económico de la banda.

La misma «suerte» del desconocimiento corren los familiares del concejal del Partido Popular de Durango Jesús Mari Pedrosa, asesinado en el año 2000. Cuatro etarras fallecieron dos meses después en Bilbao al estallar los explosivos que llevaban en su coche cuando se dirigían a cometer un atentado. Una de las pistolas que llevaban aquel día fue utilizada por el etarra que acabó con la vida de Pedrosa, así lo confirmaron los informes de balística. Pese a ello el caso se considera como no resuelto.

La viuda del guardia civil Juan Carlos Bieiro, asesinado en 2002 en la localidad navarra de Leiza, escribió una carta en el cuarto aniversario del atentado. En ella, María José Rama pedía «un último esfuerzo por agotar todas las vías de investigación para conseguir identificar, detener y juzgar a los asesinos. Solamente así -añadía- podremos descansar en parte». Pese a sus deseos, ella es una de las víctimas que deberá seguir esperando para conocer el desenlace policial y judicial de su caso.

JONAN FERNÁNDEZ PIDE A SORTU UN GESTO "ESPECIAL" HACIA LAS VÍCTIMAS PARA AVANZAR EN EL PROCESO DE PAZ

El secretario de Paz exige el desarme de ETA y avances sobre los presos.

El secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, espera de la izquierda abertzale un guiño, un gesto, "algo especial" que implique el reconocimiento a las víctimas causadas por ETA. Fernández realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a Euskadi Irratia a finales del pasado mes de enero en la que, además, abogó por un desarme de ETA "cuanto antes" y "avances" en la política penitenciaria del Gobierno español.

Fernández reconoció que en las últimas décadas han ocurrido muchos episodios graves que merecen una autocrítica, pero se centró especialmente en el hecho de que "en la memoria y la sensibilidad de la sociedad están muy presentes los 850 muertos que ha dejado ETA, lo que merece y pide una valoración autocrítica y específica, que debe tener credibilidad". A su juicio, estas heridas están muy abiertas en algunos casos y la medida para curar el pasado es mediante "guiños, gestos y pasos". En este sentido se dirigió específicamente a la izquierda abertzale. "Todos debemos hacer guiños y gestos respecto al pasado, pero, a día de hoy se espera especialmente que lleguen por parte de la izquierda abertzale. Si lo que se ha hecho en el pasado está mal, hay que decir que ha estado mal", señaló.

El secretario de Paz recordó, asimismo, que el cambio de estrategia que reflejaban los estatutos de Sortu fue suficiente para que la formación de la izquierda abertzale haga política con normalidad, pero reclamó algo más. "Si queremos entrar en una nueva fase de convivencia, de normalizar nuestra convivencia entre los distintos



sectores, debemos hacer algo sobre el pasado, y eso es lo que nos falta", señaló. En la entrevista, Fernández exigió asimismo el desarme "cuanto antes" de ETA, al tiempo que reclamó un cambio en la política penitenciaria del Gobierno español. A su juicio, en la situación actual se deben dar pasos cuanto antes porque, "aunque los que ya se han dado están bien, el camino no se ha acabado". En este sentido, consideró como un elemento clave que ETA proceda a su desarme cuanto antes, lo que sería, a su juicio, un paso que daría credibilidad al proceso. "En la

actualidad las palabras no son suficientes y se necesitan actos y compromisos. ETA dijo que daba por terminada su actividad violenta y, por lo tanto, ¿cuál es el horizonte de eso? El desarme, y cuanto antes. Nosotros exigimos a ETA que active cuanto antes la vía del desarme", afirmó. Ese cuanto antes, para Fernández, es cuanto antes. "Decir cuanto antes, significa cuanto antes, los próximos meses o en las próximas semanas si se quiere", apostilló.

Jonan Fernández se refirió también a la política penitenciaria del Gobierno español y en este sentido reclamó avances por parte del Ejecutivo de Rajoy. Así, recordó que en el Plan de Paz y Convivencia elaborado por el Gobierno vasco y que se presentó a los partidos políticos y agentes sociales y sindicales se señala de forma explícita que es posible dar pasos en materia penitenciaria sin necesidad de modificar la política, sino acogiendo a lo que recoge la actual legalidad. Como ejemplo Jonan se refirió a varios pasos que puede dar el Ejecutivo del PP. "Pueden acercar a presos a cárceles del País Vasco o sus alrededores, dar respuesta a la situación en que la se encuentran los presos enfermos o aprovechar los habituales beneficios penitenciarios", señaló.

EL GOBIERNO VASCO PRESENTA SU PLAN DE PAZ A LA AUDIENCIA NACIONAL

El Escorial accede a celebrar un curso de verano sobre pacificación y convivencia.

El Gobierno vasco se ha tomado en serio la consolidación de la convivencia. Consciente de que debía trabajar "día a día" y también en Madrid su Plan de Paz para explicarlo y aplacar temores en la capital estatal, y también para recabar ideas sobre política penitenciaria o memoria, decidió liberar a una persona para que se dedicara exclusivamente a esa tarea. El cometido lo asumió el periodista Carlos Fonseca, muy conocido en los círculos de Madrid donde debía exponer esos retos. Su trabajo lo ha llevado a entrevistarse catorce veces con magistrados de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial; con diplomáticos de Estados Unidos, Irlanda, México, Colombia, Sudáfrica, Alemania, Noruega y Francia; con medios de comunicación y con asociaciones como Amnistía Internacional. En varios de esos encuentros ha estado presente el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández.

Lakua también ha intentado promover un curso de verano sobre paz y convivencia en El Escorial que ha sido provisionalmente aceptado por la dirección de la Universidad Complutense de Madrid, aunque el Gobierno vasco deberá trabajar ahora en los contenidos



y la identidad de los ponentes para remitir un planteamiento más detallado y obtener el visto bueno definitivo en el plazo aproximado de un mes. Se celebraría este mismo verano. El curso duraría tres días y llevaría por título El fin de ETA y la recuperación de la convivencia en el País Vasco:

La primera jornada se centraría en constatar la apertura de un nuevo tiempo sin violencia, la segunda abordaría el papel de las víctimas, y la tercera tocaría el debate de la política penitenciaria y la justicia tras el cese definitivo de ETA. Desde el Gobierno vasco no quisieron adelantar aún la identidad de los ponentes de las conferencias. Lo que han avanzado es que su ronda de contactos en Madrid ha resultado satisfactoria y que, al margen de las diversas opiniones personales de sus interlocutores sobre el Plan de Paz, no ha habido portazos ni descortesías.

Jonan Fernández considera clave mantener la interlocución entre Madrid y Euskadi en materia de paz, y también ha buscado amplios consensos en Euskadi, aunque de momento no los ha conseguido a pesar de que reforzara las alusiones al suelo ético en su Plan de Paz para atraerse a PSE y PP. También prepara un seminario europeo para abordar la cuestión.

LOS EXPERTOS CONSULTADOS POR URKULLU SITÚAN SU PLAN DE PAZ AL NIVEL DE SUDÁFRICA E IRLANDA

Once profesores de varias universidades de EE UU, algunos exasesores de Ibarretxe, avalan el texto elaborado por el equipo de Jonan Fernández.

Los once académicos de diferentes universidades americanas a los que el Gobierno vasco pidió una evaluación sobre el 'Plan de Paz y Convivencia' redactado por el equipo de Jonan Fernández, dependiente orgánicamente de Lehendakaritza, consideran que este documento se sitúa al «nivel de otros procesos de éxito» como los de Sudáfrica o Irlanda del Norte y avalan la mayoría de sus recomendaciones, como la investigación las denuncias de torturas, la necesidad de que se estudien los casos de todo tipo de víctimas sin excepciones o el acercamiento de presos. Las conclusiones de este informe fueron presentadas el jueves 9 de enero por el propio Fernández -secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco-, quien destacó que sus autores son «un grupo de académicos de gran prestigio internacional en materia de resolución de conflictos y procesos de paz». Uno de los rostros más conoci-



dos es el de Andrea Bartoli, profesor en la Seton Hall University, de Nueva Jersey. Experto en resolución de conflictos, durante años fue asesor en su etapa como lehendakari de Juan José Ibarretxe, con quien sigue colaborando en

la actualidad. Bartoli ha coordinado el informe junto con la doctora Borislava Manojlovic, también de la Seton Hall. Estos profesores ya entregaron una informe preliminar a Iñigo Urkullu durante la visita que el lehendakari realizó a Estados Unidos el pasado mes de octubre.

El documento íntegro fue presentado por Fernández y remitido a los grupos parlamentarios. Y la conclusión de los expertos es que el plan del Ejecutivo es una herramienta importante para consolidar la paz abierta en Euskadi tras el cese de la violencia por parte de ETA.

Los halagos son continuos para un plan de paz, cuya aportación más destacada, según los profesores de Estados Unidos, es su «énfasis en reconciliar diversas 'tradiciones políticas' a través de un proceso abierto discursivo». Una virtud que contrasta con las críticas abiertas que ha suscitado el plan en Euskadi, donde es rechazado tanto por EH Bildu, como por el PSE y el PP, aunque por motivos opuestos.

"Escribir una nueva página"

Aun así, los profesores creen que ofrece a la sociedad vasca la oportunidad de «escribir una nueva página de su historia» a través de la colaboración entre las cuatro «tradiciones políticas», con un carácter «inclusivo» que lo sitúa a la par «de otros procesos que tuvieron éxito, como los de Sudáfrica e Irlanda del Norte».

El informe de los expertos internacionales destaca también que el plan proporciona un «sólido telón de fondo al proceso de reconciliación» y refrenda la necesidad de que se estudien los casos de todo tipo de víctimas sin excepciones. Los académicos consideran que las 18 iniciativas que propone el plan son «bastante exhaustivas, complementarias y estructuradas», apuestan por investigar las denuncias de torturas y recomiendan la integración en el plan de un mecanismo para controlar el riesgo de la reaparición de la violencia.

Jonan Fernández destacó que el análisis de los profesores a los que había recurrido el Gobierno es «un espaldarazo importante y de prestigio» al plan y a la filosofía en que se sustenta: «La de poner a esta sociedad en una clave de convivencia normalizada e integrada». La siguiente iniciativa que quiere impulsar el Ejecutivo para seguir recabando aportaciones internacionales es la celebración de un seminario multidisciplinar europeo con expertos en distintas materias.

EUSKADI Y BELFAST EXPLORAN VÍAS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PAZ

Una delegación del Gobierno vasco encabezada por el Secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, y la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, se desplazó a mediados del pasado mes de enero a Belfast para reunirse con instituciones de Irlanda del Norte y conocer sus planes en materia de paz dentro del Programa Peace que desarrolla la Unión Europea en la zona. El Gobierno vasco, por su parte, dará a conocer



sus propuestas. El Jueves 16 de enero, Jonan fue recibido por el alcalde de Belfast Mairtin Ó Muilleoir, quien acogió con gran interés el Plan de Paz. Además, mostró su disposición a colaborar con Euskadi.

EL BOSQUE DE LA CONCORDIA, UNA INICIATIVA PARA LA RECONCILIACIÓN

La entrada al seminario acoge desde el jueves 23 de enero el Bosque de la Concordia, una iniciativa que busca el entendimiento y la reconciliación.

La reconciliación y la paz crecerán fuertes en la entrada del seminario de Derio. El bosque de la Concordia - Adiskidetasun Basoa nació el jueves 23 de enero con el objetivo de servir de paraguas al entendimiento. De la mano del obispo de Bilbao, Mario Iñesta, de la presidenta de las Juntas Generales, Ana Madariaga, y de 52 empresas e instituciones, se materializó un ambicioso proyecto en el que los valores del Árbol de Gernika -se plantó un retoño del histórico emblema- buscarán perdurar.

Para el prelado, el medio centenar de robles y hayas son mucho más que una masa arbórea de especies autóctonas. En un discurso centrado en la paz y la convivencia, hizo hincapié en lo que esta iniciativa evoca. La sociedad, al igual que un



árbol "es sólida y rica, lo que fortalece el tronco y permite mirar hacia el futuro". El bosque, con "un hábitat muy variado", puede ser "un lugar de concordia y encuentro" que cobije "la superación de las dificultades, la paz, el abrazo y la construcción juntos de una sociedad reconciliada". "Tenemos el deber de dejar eso a las futuras generaciones", apuntó antes de aclarar que la cruz cristiana "viene de un tronco donde el pecado y la división son vencidos".

La presidenta de las Juntas Generales, Ana Madariaga, insistió en la importancia de donar un retoño del Árbol de Gernika,

"símbolo de las libertades vascas". En nombre de la institución foral, confió en que las profundas raíces de este bosque cobijen esa sociedad plural que mira con esperanza hacia adelante. Descendiente del roble que preside la Casa de Juntas, el máximo exponente vasco también está presente en Venezuela, Colombia, México, Argentina, Estados Unidos y numerosos lugares del Estado.

Durante el acto, los representantes de las empresas e instituciones que donaron cada ejemplar se afanaron en cubrirlos con tierra. Bajo una intensa lluvia, participaron Juan Mari Atutxa, en nombre de la Fundación Sabino Arana, Aitor Larrazabal, que plantó el árbol del Athletic, Irene Pardo, diputada de Agricultura, y Miguel Madariaga, Presidente de la Fundación Euskadi. La iniciativa, que surgió de la dirección del seminario, pretende ampliarse año a año. "Un bosque no puede hacerse de un día para otro", puntualizó su responsable, Iñaki Santamaría.

ESTRASBURGO CALIFICA DE "EJEMPLO A SEGUIR" EL DESMONTAJE DE LA DOCTRINA PAROT POR ESPAÑA

"Es imposible ejecutar más rápido que como lo hizo España", señala el presidente del tribunal, que subraya que la presa de ETA Inés del Río fue excarcelada al día siguiente del fallo del TEDH.

El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el magistrado luxemburgués Dean Spielmann, aseguró el jueves 30 de enero que la ejecución de la sentencia Del Río contra España, sobre la doctrina Parot, "es un ejemplo a seguir".

Durante la rueda de prensa anual de presentación de las estadísticas del año anterior, Spielmann aseguró que la ejecución de esa sentencia fue "más que notable: al día siguiente, estaba ejecutada a pesar de las críticas".

"Es imposible ejecutar más rápido que como lo ha hecho España", señaló el presidente del Tribunal de Estrasburgo, sobre la sentencia de la Gran Sala que se hizo pública el pasado 21 de octubre.

Aparte de la etarra Inés del Río Prada, otros 71 terroristas han salido de prisión tras la sentencia de la Corte europea, a los que hay que sumar otros excarcelados por delitos graves, entre ellos varios violadores.

Estrasburgo dictó otras doce sentencias relativas a España en



Dean Spielmann.

2013. Entre ellas, 7 fueron de violación (la demanda del ex teniente de alcalde de Marbella Pedro Román fue una de ellas) y en 4 casos se dio la razón a España (como en la demanda de ANV por su ilegalización).

Como es habitual, la mayoría de las condenas a España se producen por incumplir el artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo al derecho a un juicio justo. En total, el Tribunal de Estrasburgo dictó 916 sentencias sobre demandas contra 43 de los 47 estados miembros del Consejo de Europa.

La Corte europea recibió en 2013 un total de 784 demandas contra España, 90 más que en el ejercicio anterior. Contra Francia, Alemania e Italia fueron recibidas 1538, 1528 y 3.184, respectivamente. Las más numerosas fueron contra Ucrania y Rusia con 13.152 y 12.330, respectivamente.

Spielmann se mostró muy satisfecho por la importante reducción de demandas pendientes de examen que, a 31 de diciembre de 2013, eran 99.900, mientras que en septiembre de 2011 ascendían a 160.000.

"Descender por debajo de la barrera simbólica de los 100.000 casos pendientes es un motivo de gran satisfacción y un estímulo para continuar", dijo el presidente del Tribunal.

EL GOBIERNO CENTRAL ASUME EN SOLITARIO LA CREACIÓN DEL MEMORIAL POR LAS VÍCTIMAS

Trabaja en el diseño de un «modelo» propio de centro ante la incomunicación con el Ejecutivo vasco en materia de paz.

El Gobierno central ha optado por dar forma por su cuenta al centro de la memoria en homenaje a las víctimas del terrorismo. El proyecto, que empezó a forjarse en la pasada legislatura, se paralizó a raíz de las elecciones autonómicas en Euskadi y la posterior vuelta del PNV a Ajuria Enea.

Los celos que en el PP despierta la visión jeltzale sobre el final del terrorismo ha hecho que el Gobierno central haya tomado esta decisión. A día de hoy, la incomunicación sobre esta materia es total, según confirman fuentes de los dos gobiernos. Hasta el punto de que en Madrid aseguran seguir «trabajando» en el diseño del memorial, pero en solitario.

El principal temor mostrado desde el Ministerio del Interior a la hora de abordar la creación de manera conjunta de este centro residió inicialmente en su desconfianza hacia el nombramiento de Jonan Fernández como secretario de Paz y Convivencia. Pero, superado ello, ahora es el miedo a que el Gobierno vasco quisiera «empezar de cero» después del trabajo desempeñado con el gabinete de Patxi López, hasta el punto de desdibujar su propósito. Algo que, por otro lado, Lakua ha negado en reiteradas ocasiones.

La última vez que la comisión bilateral de ambos gobiernos se reunió fue en mayo de 2012. Las dos administraciones acordaron constituir un Real Patronato, adscrito a Interior, que será el encargado de dirigirlo. La presidencia de honor la ostentará el Rey, la presidencia recaerá en el máximo representante del Ejecutivo central y la vicepresidencia, en el lehendakari. Ahora bien, la citada comisión, cuya presidencia asumió Mari Mar Blanco, lleva más de año y medio sin citarse. Y no hay visos de que vaya a hacerlo. Los servicios jurídicos del Gobierno de Rajoy tampoco vinculan el protocolo que firmaron con el Ejecutivo del PSE con el gabinete de Iñigo Urkullu.

El pasado mes de abril la secretaria de Paz y Convivencia solicitó por escrito a la Dirección de Atención a Víctimas de



Madrid la convocatoria del órgano mixto con el fin de impulsar el memorial. Fuentes cercanas al Ministerio del Interior aseguraron entonces que el Gobierno central se pondría en contacto «de inmediato» con Lakua para cerrar una reunión a dos bandas, destinada a arrojar luz de una vez por todas sobre ese centro. En el Ejecutivo de Vitoria aseguran que aún están pendientes de obtener la respuesta, al tiempo que mantienen su «voluntad de colaborar» en esta materia.

La creación del centro por las víctimas del terrorismo se recoge en el plan de paz del Gobierno vasco. Ahora bien, establece que dicho memorial formará parte de la red de espacios que coordine y dinamice el Instituto de la Memoria. Una idea con la que no están de acuerdo desde el gabinete de Rajoy, que lo conciben como un proyecto con entidad propia.

En verano, ambos ejecutivos parecieron darse una tregua y abrir una «etapa de diálogo». Interior rompió el hielo al recibir a Jonan Fernández y la directora vasca de Víctimas, Mónica Hernando. Pero nada más lejos de la realidad. Los últimos acontecimientos tampoco han ayudado. La decisión del PNV de ir con Sortu a la manifestación por los presos el sábado 11 de enero y las críticas que Iñigo Urkullu dedicó al ministro del Interior, Jorge

Fernández Díaz, a raíz de la operación de la Guardia Civil contra el frente de 'makos' de ETA -llegó a afirmar que no es la persona «adecuada» para «este tiempo»- han enfriado aún más las relaciones entre ambos ejecutivos.

En el Gobierno central, pese a que no cierran la puerta a la participación de «otras administraciones», recuerdan que la puesta en marcha de este memorial «nacional» es un «proyecto estatal» que viene recogido en la ley de reconocimiento a las víctimas que aprobó el Congreso. «No tiene nada que ver con el Instituto vasco de la Memoria ni con el plan de paz, ni se enmarca en ninguno de ambos», advierten desde el Ejecutivo central. Así, declaran que siguen «trabajando en la recopilación de materiales» que den forma al «futuro contenido» del proyecto. «Propondremos un modelo», señalan. Quienes deseen sumarse a esta iniciativa deberán «coincidir con nuestro criterio», añaden.

La estructura no está cerrada, como tampoco el lugar en el que se ubicará el centro. Desde Interior reconocen que «se barajan todavía varias opciones». Lo que está claro, o al menos así lo fija la ley de víctimas, es que estará localizado en Euskadi. La idea que ha cobrado mayor fuerza es la de ubicarlo en el palacio Zulueta de Vitoria. Se da la circunstancia de que el edificio es de titularidad municipal, por lo que no se descartaría que el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Vitoria, ambos gobernados por el PP, realizaran una permuta, que evitase con ello un importante desembolso económico en plena crisis. Pero también figuran sobre la mesa otros enclaves, como son la Fábrica Azucarera Alavesa y el centro cultural Krea, ambos situados a las afueras de Vitoria, pero libres para albergar un memorial de estas características.

Hace ya tres años que el centro de la memoria empezó a gestarse y, más allá de diferencias políticas, lo cierto es que sigue sin convertirse en una realidad. Por ahora no existe plazo alguno para la materialización del proyecto. Al menos, así lo reconocen desde el Gobierno central. La única fecha que se marcan desde Madrid es que el memorial, o sus planes como tal, pueda ver la luz a lo largo de este ejercicio.

INTERIOR FORMA A 41 VÍCTIMAS DEL TERRORISMO PARA FAVORECER SU REINSERCIÓN LABORAL

Impulsa un taller anual en el que damnificados por ETA y el 11-M se titulan como auxiliares de archivo, con prácticas remuneradas.

La onda expansiva de un atentado no se circunscribe a la lesión física, sino que sus efectos se dejan sentir en diferentes ámbitos de la vida: a nivel psicológico, social e, incluso, laboral. Con el objetivo de paliar estas consecuencias y de ayudar a las víctimas del terrorismo a seguir adelante con sus vidas, con especial hincapié en el ámbito profesional, el Ministerio

del Interior ha impulsado dos talleres de empleo -el tercero comenzó el pasado mes de enero-, en el que damnificados, en su mayoría por ETA y el 11-M, reciben formación como auxiliares de archivo. Hasta ahora han sido 41 los afectados que han participado en esta iniciativa pública, mientras que otra veintena hará lo propio a lo largo de 2014.

Cada curso tiene un año de duración (de diciembre a diciembre) y está destinado, prácticamente al 50%, a desempleados de larga duración y a víctimas del terrorismo. A modo de ejemplo, en la última edición, que finalizó el pasado día 23, tomaron parte 36 personas, de las que 18 eran damnificados. En 2012, de 48 alumnos, 23 eran víctimas.

Dos son los ministerios que dan forma a esta herramienta. La parte financiera corresponde al de Empleo. El coste anual de cada taller es de 750.000 euros. La parte formativa recae en manos de Interior. La selección de los participantes se realiza de oficio. Es el propio Gobierno central, a través del listado de desempleo y de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo -en colaboración con distintas asociaciones-, quien ofrece a los ciudadanos la posibilidad de acceder a este curso. De ellos es la decisión última.

«Se valoran las circunstancias familiares, si están en riesgo de exclusión social... Cuando hablamos de víctimas del terrorismo hay que tener en cuenta que se trata de personas a quienes de golpe un día les interrumpen su vida», explica Rafael Rojas, subdirector de Asociaciones, Documentación y



Publicaciones del Ministerio del Interior, y uno de los responsables de este proyecto. Rojas sólo tiene buenas palabras para referirse a estos talleres. «Hay un cambio radical en las víctimas. Al principio llegan tristes, inseguras... Pero acaban llenas de motivación y de ilusión», asegura. «En su caso, no sólo es importante en el plano profesional, sino también en el personal». Según revela, una joven que sobrevivió al atentado del 11-M volvió a coger por primera vez el metro -no se había subido a ningún tipo de tren desde entonces- el día que acudió a firmar el contrato para empezar el curso.

El taller se divide en dos partes: teórica y práctica. Durante los dos primeros meses, los participantes reciben formación, hasta ahora en un aula cedida por el Ministerio de Defensa, en materias como igualdad de género, prevención en riesgos laborales, informática, medio ambiente o nuevas tecnologías. Durante todo el proceso tienen a su entera disposición a tres profesores. Es a posteriori cuando comienza el trabajo puro y duro. Como auxiliares de archivo -titulación que reciben al final del curso-, organizan censos y digitalizan ficheros, entre otras labores. El objetivo es potenciar el papel de los archivos como instrumentos al servicio de los ciudadanos al permitir la recuperación, el tratamiento y la conservación del patrimonio documental del Ministerio del Interior. Se trata, además, de unas prácticas remuneradas. Cada alumno recibe algo más de 900 euros al mes, un sueldo superior al salario mínimo interprofesional, que no llega a los

700.

Las víctimas realizan esta función en diferentes edificios institucionales. Desde el archivo general de Interior hasta las oficinas de la Dirección General de la Policía, de la Guardia Civil e incluso de Instituciones Penitenciarias. El horario: de 7.30 a 15.00 horas. «Son como un reloj», apunta Rafael Rojas, quien destaca la actitud y el «buen hacer» de los alumnos. Se da la circunstancia de que la mayoría de los damnificados por el terrorismo, tanto afectados directos como familiares, que han participado en estos

talleres residen en Madrid. Resulta cuanto menos complicado que una persona se desplace durante todo un año a la capital del Estado, con el gasto que eso supone, para realizar este curso. El objetivo del Gobierno central es ampliar esta iniciativa, o por lo menos intentarlo, a afectados de otras comunidades, en colaboración con las asociaciones de víctimas.

Las edades de los participantes oscilan entre los 30 y los 65 años. En estos últimos casos, más que la reinserción laboral, el objetivo es que los afectados tengan un aliciente o una motivación para seguir adelante con sus vidas después de que un atentado les arrebatara todas las ilusiones. «Hemos conocido a gente que apenas salía de su casa», revela Rojas. En cuanto a la nacionalidad, la mayoría son españoles, aunque también han realizado estos talleres personas naturales de Ecuador y Rumania. Varias son víctimas o allegados de damnificados del 11M, la masacre causada por el terrorismo yihadista en los trenes de cercanías de Madrid.

Además de formarse como auxiliares de archivo en horario de mañana, los participantes tienen también la posibilidad de recibir clases por las tardes, ya sean de matemáticas, Historia o cualquier otra asignatura, con el fin de obtener el título de la ESO. Algunas de las personas que realizaron estos talleres no habían superado la enseñanza obligatoria por diferentes motivos. Según aseguran desde el Gobierno, se ha preparado a más de una víctima que, a posteriori, se examinó para obtener el título. «Es algo que tam-

bién les ayudará a la hora de buscar trabajo», subraya el subdirector de Asociaciones, Documentación y Publicaciones del Ministerio del Interior.

Visitas en grupo

El taller se completa con una serie de excursiones culturales, cuyo objetivo -apunta Rojas- es «que los alumnos se relacionen con la gente y fomenten el espíritu de equipo». A lo largo del pasado año, los alumnos visitaron el museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen. Asimismo, se desplazaron a archivos documentales repartidos por diferentes comunidades autónomas: el de Indias (Sevilla), el de Nobleza (Toledo) y el de Simancas (Valladolid). Como última actividad en grupo, y a modo de recuerdo de despedida, todos los participantes visitaron el Congreso. El grupo se fotografió en el hemiciclo.

Pero como todo taller, éste también tiene su inicio y su fin. Tras



es posible», asegura Rojas. El índice de empleabilidad de las personas que realizaron el curso el año pasado fue del 25%, revela el Ejecutivo central. El de 2013 aún está por ver. De momento, dos de las personas que acaban de 'licenciarse' permanecerán contratadas durante un año más en el Ministerio del Interior como «apoyo» al equipo responsable de los archivos. Una de ellas es víctima del terrorismo.

MANJÓN CRITICA AL MINISTERIO DEL INTERIOR POR EL REPARTO DE SUBVENCIONES A LAS VÍCTIMAS

Las víctimas del 11-M critican que se adjudiquen en función del número de socios.

La presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón, reprochó el viernes 7 de marzo el «injusto» reparto que se realiza actualmente de las subvenciones a las asociaciones de víctimas del terrorismo, después de que el Ministerio del Interior decidiera adjudicarlas según el número de socios, lo que ha provocado que su organización reciba ahora hasta un 60% menos de fondos y otras no reciban absolutamente nada. Así lo manifestó en la presentación de la exposición «Trazos y puntadas para el recuerdo». Una ventana de paz en Madrid, 10 años después, con motivo del décimo aniversario de los atentados que tuvieron lugar en Madrid el 11 de marzo de 2004. Según Pilar, a pesar de seguir este criterio, Interior no les ha pedido los libros de socios para comprobar que no haya «duplicidades y hasta triplicidades», como a su juicio ocurre en estos momentos. «Si no nos piden los socios, es injusto, porque puede haber duplicidades con otras asociaciones. Éticamente no está bien», criticó. «Le pedimos al Ministerio del Interior que solicite, si tiene que hacerlo, una copia del libro de socios y que sea el Ministerio el que evalúe los socios», reclamó, para añadir que también es necesario unificar el criterio para definir a las víctimas del terrorismo para así evitar problemas. Preguntada sobre si también han notado que la atención de los políticos hacia las víctimas ha bajado en estos diez años, Manjón señaló que «mucha relación con los políticos no ha habido ni ahora ni antes». «Cuando intentaron encasillarnos, se marcó una equidistancia que se ha convertido en olvido», lamentó la presidenta de la Asociación 11-M Afectados del terrorismo. En este sentido, precisó que diez años después de



los atentados no han visto la «alfombra roja» que días después de que estos tuvieron lugar parecía que se les iba a poner. «Ni la hemos pisado». Manjón también censuró que este décimo aniversario -término que rechaza porque sugiere que «hay algo que celebrar»- coincida precisamente con la inminente salida de prisión de algunos de los «asesinos» condenados por los atentados, como es el caso de Rafa Zouhier, castigado con diez años de cárcel. A este respecto, anunció que su asociación solicitó a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional la extradición de Zouhier a Marruecos ya que la legislación habla de este supuesto para perso-

nas «con delitos graves o que pudieran provocar alarma social». «Y cumple ambos requisitos», apostilló. Paralelamente, Manjón criticó que el acto en el que por primera vez desde 2007 se unirán todas las víctimas sea católico, pues a su juicio habría sido más apropiado hacer uno de carácter civil, ya que no todas las víctimas profesaban esta religión. «Nuestra asociación es tanto suprapartidista como aconfesional. Pero, en pro de la unidad de las víctimas, allí estaremos», aclaró. Recordó que como todos los años su asociación volverá a los cuatro lugares de Madrid en los que tuvieron lugar los atentados, empezando por la estación de Atocha, donde participarán en el tradicional homenaje organizado por la Asociación de Actores y los sindicatos.

Entre los eventos previstos destacó la entrega de medallas a los familiares de los asesinados y de encomiendas a los heridos en un acto que tendrá lugar el lunes 10 de marzo en el Teatro Real.

Más de veinte víctimas europeas acudirán a los actos que se celebrarán en Madrid el 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

EL GOBIERNO DE NAVARRA EDITA EL LIBRO "RELATOS DE PLOMO, HISTORIAS DEL TERRORISMO EN NAVARRA"

El libro recorre los puntos rojos y el drama que dejó el terrorismo en esta comunidad.

Veintinueve puntos rojos y once puntos grises salpican el libro. Los rojos simbolizan a las víctimas mortales que ETA dejó en Navarra entre 1960 y 1986. Los puntos grises, a los navarros que murieron fuera de la comunidad foral. Pero el recuento no es frío en Relatos de plomo. Historias del terrorismo en Navarra (1960-1986), que se presentó el viernes 13 de diciembre en el Palacio Baluarte de Pamplona. Sus autores, dirigidos por el reconocido periodista y profesor de la Universidad de Navarra Javier Marrodán, quieren "hacer justicia", "saldar una deuda con las víctimas del terrorismo y ofrecerles la compañía y el calor que tantas veces no han tenido".

Estos "relatos de plomo" de pluma precisa e imágenes desoladoras en blanco y negro, que han contado con el respaldo editorial del Gobierno de Navarra -Yolanda Barcina, firma el prólogo-, son fruto de un intenso trabajo de consulta de archivos oficiales, documentos policiales y judiciales, colecciones fotográficas y hemeroteca y de un afán especial por contactar con muchas víctimas que en aquellos años atropellados y de soledad quedaron relegadas al anonimato y nunca se tomaron la justicia por su mano en medio de una sociedad en general silente. El equipo que completan los periodistas María Jiménez Ramos, Rocío García de Leániz Moncada y Gonzalo Araluce Martín ha hablado con la gran mayoría de ellas. Compuesto el puzle, junto a la cronología de los hechos hablan 25 víctimas, que hoy ven cómo quienes defendieron el asesinato de sus familiares no reniegan de ello.

El proyecto surgió con el propósito de levantar acta de "tantos años de asesinatos, chantajes, amenazas, miedo", de un pasado monstruoso, de familias rotas y del sadismo practicado por una parte de la sociedad navarra (y vasca). 589 páginas de memoria frente a una ETA que, en su último comunicado de septiembre, anunciaba que no está dispuesta a escuchar "el relato de los



opresores".

Quizá la historia más deleznable es la que lleva el apellido de la familia Ulyar, ejemplo más claro de un movimiento que acabó por representar la "banalización del mal" que teorizó Hannah Arendt y que se prolonga hasta nuestros días. Marrodán, que conoce bien la historia (sacudió conciencias con el libro Regreso a Etxarri-Aranatz en 2004), lo cuenta así:

"El 14 de septiembre de 2013 doce personas pertrechadas con varios botes de pintura, dos rodillos y unos guantes de látex se reunieron a las nueve de la mañana en la calle Maiza de Etxarri-Aranatz para borrar las pintadas a favor de ETA que ensuciaban la casa de la familia Ulyar. Era una cita con la Historia y quizá también con la Justicia. El 27 de enero de 1979 Jesús Ulyar Liciaga -que había sido alcalde del pueblo entre 1969 y 1975- cayó asesinado junto a esa misma pared en presencia de su hijo de trece años. Los terroristas le atribuyeron actitudes "fascistas y antivascas" en el comunicado que después arrojaron sobre su tumba como un insulto póstumo. Los autores del crimen fueron detenidos a los diez meses y el ayuntamiento los nombró hijos predilectos. Cuando a la vuelta de los años salieron de la cárcel, el pueblo los recibió con homenajes y les cedió el honor de inaugurar las fiestas patronales desde el balcón de la casa consistorial", recuerda.

Pero hubo más. El recorrido a las casi

tres décadas empieza con la primera marca de ETA en Navarra, Iratxe, surgida de aquellos estudiantes de las juventudes nacionalistas enfadados con la tibia oposición del PNV a la dictadura franquista. Daba comienzo la "Resistencia Vasca", también en Navarra, con un atentado en el segundo Ensanche de la capital en la madrugada del 22 de diciembre de 1964.

"La lucha por la libertad de Navarra no es sino la lucha de todo el Pueblo Vasco por su libertad", escribió Iratxe cuando poco después se integró en ETA. El primer atentado con heridos llegaría el 28 de junio de 1972, a las 17.15 horas, con una bomba colocada en el automóvil del secretario del Gobierno Civil, en el centro de Pamplona. El 16 de enero de 1973, el primer secuestro: Felipe Huarte Beaumont, hijo de Félix Huarte, empresario clave en el desarrollo industrial navarro.

Los puntos rojos, las muertes, no llegarían hasta una vez enterrado Franco. El 26 de noviembre de 1977, sábado, hacia las 20.00 horas, dos terroristas asesinaron junto a la plaza de toros de Pamplona a Joaquín Imaz Martínez, comandante de la Policía Armada. Poco antes Imaz había estado jugando a cartas con varios amigos. "Uno de ellos le notó preocupado, y quiso saber la razón de su inquietud. 'Creo que esta vez lo de las amenazas va en serio', le respondió Joaquín Imaz. Sólo unos minutos después estaba muerto. La escena de un cadáver traspasado a tiros en mitad de la calle era inédita".

La ciudad se volvió insegura. La centralita de la Policía recibía cada vez más avisos en la España que ensayaba la democracia y masticaba la amnistía. En menos de tres años la banda terrorista mataría al inspector José Manuel Baena en un tiroteo (11 de enero de 1978), al artífice Francisco Berlanga cuando intentaba desactivar una bomba (2 de enero de 1979), a Jesús Ulyar Liciaga (27 de enero de 1979), al policía Carlos Sanz Biurrun (8 de octubre de 1979) cuando se dirigía a su casa a comer, y seis meses antes a quien le ponía los cafés en la cafetería Moicano, el primer civil asesinado por ETA en Navarra, Pedro Fernández

Serrano. Poco después segaría la vida de Ángel Postigo (15 de junio de 1980), un joven que ingresó en la Policía tras ver horrorizado el cadáver de Imaz cuando se dirigía al cine acompañado de su mujer. Entre 1980 y 1982 ETA mató cada dos días, pese a la contestación de una sociedad en cuyo nombre derramaba sangre. El 2 de septiembre de 1980 se celebró en Pamplona la primera gran manifestación contra la banda, con alrededor de 50.000 participantes. Una semana antes, José Javier Uranga, director de Diario de Navarra, había sobrevivido milagrosamente a 25 balazos en el aparcamiento del periódico. Otras seis personas habían muerto desde enero, como Sebastián Arroyo, tiroteado cuando salía de trabajar en Igartex.

La etapa 1983-1986 cierra el libro, con una fecha señalada: el 25 de marzo de 1986, cuando varios guardias civiles detuvieron a la responsable del comando Nafarroa, Mercedes Galdós Arsuaga. Ella misma contó su trayectoria. "El comando del que formaba parte había llevado a cabo 34 atentados en



Navarra, incluidos diez asesinatos. Disponían de «un llamativo arsenal y de una extensa red de pisos que les permitía esconderse con ciertas garantías después de cada atentado». Mataron a un chico de 14 años (Alfredo Aguirre), amputaron las dos piernas y un brazo a un policía (José María Izquierdo), dejaron ciego a otro (José Sevilla)... ETA puso además en marcha varios comandos legales que también asesinaron a Jesús Blanco Cereceda (27 de junio de 1983) o a Diego Torrente Reverte (6 de junio de 1984). "Algunos de los crímenes nunca fueron juzgados y otros se resolvieron con

abultadas condenas, pero ni siquiera la suma de todas las sentencias impidió que Mercedes Galdós saliera de la cárcel el 30 de septiembre de 2005". Matilde Atarés, una de las hijas del general retirado de la Guardia Civil Juan Atarés Peña, asesinado el 24 de diciembre de 1985, escribió entonces: "Me sentiría avergonzada de ser española, de no ser porque sé que mi padre murió por los valores en los que creía, como son España, la libertad y la democracia, y que renegar de cualquiera de ellos sería renegar de los motivos por los que mi padre dio la vida".

PRESENTAN UN LIBRO EN SAN SEBASTIÁN QUE RECOGE 75 IMÁGENES DE LUGARES EN LOS QUE ETA COMETIÓ UN ATENTADO

El viernes 29 de noviembre, el fotógrafo profesional Eduardo Nave presentó en San Sebastián el libro "A la hora en el lugar", que contiene 75 fotografías que recogen algunos de aquellos lugares en los que ETA cometió un atentado mortal, tanto en España como en Francia, desde la década de los sesenta hasta la actualidad.

Son lugares cotidianos, de paso -todas las fotografías son todas exteriores-

Escenarios, en su mayoría, donde hoy no queda nada, "salvo el olvido", señala el autor, que tenía 16 años cuando ETA acabó de un tiro en la nuca con la vida del padre de uno de sus compañeros de instituto. Era 1992 y la víctima fue el catedrático Manuel Broseta, secretario de Estado para las Comunidades Autónomas entre 1980 y 1982 con UCD y por entonces miembro del Consejo de Estado. El asesinato se produjo pasadas las diez y cuarto de la mañana en la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia, frente a la Facultad de Derecho, donde la víctima acababa de impartir una clase. "Al día siguiente fui a su casa para dar el pésame y recuerdo que pasé por el sitio del atentado casi a la misma hora", relata. De aquella experiencia personal nació la idea de dar forma al libro "A la hora, en el lugar".

"La gente tiene mucha facilidad para olvidar, sobre todo cuando es algo que no le toca de cerca. Por ejemplo, en Madrid todo el mundo recuerda dónde estaba o lo que hacía cuando ocurrieron



algunos atentados, aunque luego no sabe localizar el sitio en el que se produjeron. Yo creo que siempre hay que tratar de recordar porque es una forma de evitar que algo vuelva a suceder. Eso, los alemanes con la Segunda Guerra Mundial lo han hecho bien", considera.

Eduardo ha querido plasmar sus fotografías en el libro de manera cronológica: de enero a diciembre. Así el autor ha seleccionado 75 atentados que tuvieron lugar

en los diferentes meses del año. Solo noviembre se descubre con una página en blanco. Refleja el día 10. El único en el que no se registró un atentado mortal de ETA y que se ha bautizado como el Día de la memoria.

El brutal atentado de la plaza de la República Dominicana,



Plaza de los Gudarís de Ordizia donde fue asesinada Yoyes.

de Madrid, en el que fallecieron doce guardias civiles, el exconcejal socialista Isaías Carrasco, el empresario Patxi Arratibel, la bomba de la T-4 de Barajas o el asesinato en Mallorca de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada García -últimas víctimas de ETA en España- son algunos de los atentados que Eduardo Nave recopila en su libro. Como también, el de la exmilitante etarra Dolores González Catarain, "Yoyes", asesinada por la banda terrorista en Ordizia por abandonar la disciplina de la organización.

“SI ALGÚN DÍA QUIEREN ATENTAR CONTRA MÍ SERÁ EN ESTE PUTO SEMÁFORO”

El asesinato del sargento mayor Joseba Goikoetxea, del que se el pasado mes de noviembre se cumplieron 20 años, marcó un punto de inflexión en el pulso entre la Policía vasca y la banda terrorista.

Si algún día quieren atacar contra mí, será en este puto semáforo”. Hacía tiempo que Joseba Goikoetxea, de 42 años, sargento mayor y principal mando operativo de la Ertzaintza, no ocultaba a sus compañeros lo poco que le gustaba la intersección que une la calle Tívoli con el Campo Volantín, cerca del Ayuntamiento de Bilbao. Todos los días se veía obligado a detenerse en ese semáforo, que impone a los conductores una parada de 90 interminables segundos junto a una parada de autobús. Prácticamente no había otra forma de salir de las inmediaciones de Ciudad Jardín, donde vivía con su mujer y sus tres hijos, para dirigirse hacia el centro de la villa. Trataba de tranquilizar a Rosa Rodero, su esposa. Le decía que era imposible que ETA atentase directamente contra la Policía vasca. Lo mismo creían el Gobierno vasco y el PNV. Pero Joseba, alma mater de la Unidad Antiterrorista, sabía lo peligroso que era ese “puto semáforo”; las facilidades que ofrecía para que la banda y su entorno cumplieren las amenazas con las que llevaban ya años atemorizando a su familia y, por extensión, al PNV, partido del que era destacado militante. Desgraciadamente, no le falló su intuición de policía. Sus peores presagios se hicieron realidad el 22 de noviembre de 1993, hoy hace 20 años. Goikoetxea salió de casa a las 7.55 horas en compañía de su hijo José, de 16 años. Ambos se despidieron de Rosa y subieron a un ‘Opel Vectra’. Joseba llevaba a su hijo a la parada del autobús que debía conducirle al colegio. No había mucho tráfico y no tardaron en llegar a la calle Tívoli. El semáforo estaba en rojo. Dos coches esperaban a que se pusiese en verde. El ertzaina se detuvo detrás de ellos. Tres miembros del ‘comando Bizkaia’ le aguardaban. Con la ayuda de un colaborador, los etarras habían pasado un mes vigilando los movimientos del mando de la Ertzaintza. La parada les permitía pasar desapercibidos mientras reunían información para



perpetrar un atentado que supuso un macabro salto cualitativo de ETA y que colocó directamente a la Policía vasca y al PNV en la diana de la banda por ser “un elemento represivo de primer orden contra las reivindicaciones de nuestro pueblo”. Quién sabe cuántas veces pasó Joseba al lado de los terroristas durante todos aquellos días en los que, según sus allegados, es posible que “bajase un poco la guardia”. El sargento mayor llevaba varios meses sin ejercer de policía -quizá por ello relajó algo las medidas de autoprotección tras haber sido condenado por participar en las escuchas ilegales al exlehendakari Carlos Garaikoetxea. Los tres liberados del ‘comando Bizkaia’ sabían que el ertzaina pasaría por allí, al volante de su automóvil, a primera hora de aquel lunes. Le esperaban en un ‘Citroën AX’ robado cuatro días antes en Bilbao. Cuando le vieron aparecer, Ángel Irazabalbeitia y Lourdes Txurruka recorrieron los pocos metros que les separaban del ‘Opel Vectra’, mientras José Luis Martín Carmona aguardaba en el coche para facilitar la huida. Txurruka debía proporcionar cobertura e Irazabalbeitia, ejecutar el asesinato. Se acercó por detrás, hasta la ventanilla del conductor. Y realizó dos disparos a bocajarro. A sangre fría. Con una ‘Sig Sauer’ de 9 milímetros. Una de las balas alcanzó de lleno a Goikoetxea en la nuca y quedó alojada entre el cuello y la mandíbula. El segundo proyectil le hirió en la zona lumbar. Su hijo resultó ileso, pero quedó traumatizado durante años. Su mujer, Rosa, que salió de casa 20 minutos después para ir al trabajo, se encontró de golpe con el turismo de su marido dentro de un cordón policial. Al instante supo lo que había ocurrido. La conmoción en la Ertzaintza y en el PNV fue

mayúscula. Joseba murió el 26 de noviembre después de cuatro días en coma profundo. El sargento mayor “quería tanto a su mujer y a sus niños” que, pese a la extrema gravedad de sus heridas, aguantó con vida el tiempo suficiente para que el Gobierno central acelerase el indulto que varios amigos habían pedido para él varios meses antes por el caso de las escuchas ilegales. Este trámite permitió condecorarle con las máximas distinciones policiales y a su familia, recibir una pensión en mejores condiciones.

El asesinato fue perpetrado tras una meticulosa planificación. Lo que más tiempo llevó a la banda y a su entorno fue “allanar el terreno” para que sus simpatizantes y parte de la sociedad pudiese “asumir” y “contextualizar” una acción directa contra un miembro de la Policía vasca y un militante del PNV, algo impensable entonces. A principios de la década de los noventa, ETA dio la orden de comenzar una campaña de desgaste y desprestigio contra algunos integrantes de la Ertzaintza, que con Juan María Atutxa como consejero de Interior asestó duros golpes a la organización. El objetivo, además de dividir al Cuerpo, era llegar a una siguiente fase en la que poder actuar contra determinados agentes sin que le costase tensiones internas.

Preso en Carabanchel

Esta estrategia aparecía reflejada con precisión en los documentos incautados al dirigente etarra José Javier Zabaleta Elosegui, ‘Baldo’, cuando fue detenido en 1991. El ‘comando Bizkaia’ siguió al pie de la letra la línea marcada por sus cabecillas cuando asesinó a Goikoetxea, que también fue sometido a una intensa campaña de desprestigio a través de publicaciones próximas a la izquierda abertzale. “El diario ‘Egin’ apuntaba y, al cabo de un tiempo, ETA ejecutaba”, recuerda Daniel Etxeberria, alias ‘Pampero’, compañero del mando asesinado en la unidad de Berroci y objetivo de la banda durante años. En su particular lista del horror, ETA había matado antes a cuatro ertzainas. También acabó con la vida de Genaro García Andoain, alto cargo de Interior, durante un tiroteo en 1986 en una operación para liberar al industrial vitoriano Lucio

Aguinagalde en la que participó el propio Goikoetxea. La banda, que ya acumulaba varios cientos de asesinatos en su macabro historial, justificó esas muertes como una especie de daños ‘colaterales’ en la medida en que no fueron consecuencia de atentados directos contra los policías vascos. Sólo el del superintendente Carlos Díaz Arcocha, en 1985, fue planificado expresamente porque los terroristas no le perdonaban su pasado como teniente coronel del Ejército español.

Goikoetxea fue un símbolo elegido por ETA para extender su amenaza a la Ertzaintza y a los militantes abertzales que se atreviesen a hacerle frente. Pero era mucho más que un simple ertzaina. Afiliado al PNV desde los 14 años, fue un activo militante antifranquista desde los 18. Trabajó en la distribuidora de libros San Miguel, que era una tapadera del partido jeltzale, encargado de llevar su propaganda. Apenas cumplida la veintena tuvo que marcharse un año a navegar porque sabía que el régimen de Franco estaba tras sus pasos. Aquello no iba con él y volvió a Euskadi. No tardó en ser detenido y encarcelado por propaganda ilegal en la cárcel de Carabanchel. Él fue uno de los últimos miembros del PNV que salió libre después de la muerte del dictador. Siguió trabajando activamente con el partido hasta que en 1980 el entonces consejero de Interior, Luis María Retolaza, encargó la creación de la primera unidad de Berroci, el embrión de lo que es hoy la Ertzaintza. Una veintena de hombres seleccionados con mimo entre simpatizantes de la absoluta confianza del PNV formaron un grupo de élite dirigido por Ramón Villalonga y el propio Goikoetxea.

“Yo podría ser el siguiente”

En 1985, el sargento mayor se hizo cargo de la jefatura de los AVCS (Adjuntos a la Viceconsejería de Seguridad), que se convirtieron en los servicios de información encargados de la lucha antiterrorista. Goikoetxea seleccionó a los miembros de la unidad. Una tarea en la que, según recuerdan algunos amigos, tuvo que superar serias dificultades porque no había muchos agentes con voluntad de intervenir en esta tarea. Los éxitos que cosechó en la lucha antiterrorista le colocaron en el punto de mira de ETA. Primero fue la desarticulación del ‘comando Bizkaia’ en 1990. Goikoetxea empezó a ser señalado en las publicaciones de la izquierda aber-



tzale, sobre todo a raíz de las denuncias de malos tratos formuladas por uno de los detenidos. Un año después, ETA le calificó de “despreciable torturador y asesino de encargo” por su intervención en una operación en el parque Etxebarria, de Bilbao, en la que perdieron la vida el ertzaina Alfonso Mentxaka y el terrorista Juan María Ormazabal, ‘Turko’. Daniel Etxebarria, miembro del Berroci Berezi Taldea, estaba cerca de Mentxaka cuando cayó abatido. La operación, en la que él participó -explica-, estaba diseñada en un principio para ir a por “tres pringados” y acabó en un tiroteo con un comando que llevaba una bomba para “atentar contra un policía nacional”. A partir de ese momento, los nombres de ‘Pampero’ y de otros ertzainas empezaron a salir también en publicaciones cercanas a la izquierda abertzale. Algunos de ellos temieron seriamente por sus vidas. ‘Pampero’ asegura que le advirtió de sus sospechas al menos dos veces al entonces viceconsejero de Seguridad, José Manuel Martiarena. “Pero nos dijo que no nos preocupáramos, que no pertenecíamos a ningún grupo de riesgo”, lamenta. El propio Goikoetxea realizó sus únicas declaraciones públicas para salir al paso de la “campaña de desprestigio” que esta-

ba sufriendo. “Entiendo que a ellos les parezca una persona molesta porque soy un profesional de la Ertzaintza y nacionalista. Tanto a ETA como a su mundo les duele que sea ‘gente de casa’ la que va a por ellos. Pero soy vasco y seguiré viviendo en Euskadi”, dijo a la agencia Vasco Press.

Ocho meses después, ETA acabó con su vida. A partir de entonces, todo cambió. Ya no había intocables. El PNV emitió un duro comunicado en el que advirtió a ‘Egin’, a ETA y a KAS que les consideraba un “todo” y que interpretaba el atentado como un ataque “directo”. Un grupo de ertzainas creó el colectivo Hemen Gaude y encendió una “llama por la paz” para plantar cara a los etarras. Un gesto de valentía que no evitó que muchos agentes empezasen a ocultar su profesión en su vecindario. HB reaccionó pidiendo la retirada de la Policía vasca de la lucha antiterrorista y, al mismo tiempo, en muchas comisarías aparecieron pasquines del entorno radical con un mensaje: “Si no nos atacas, yo no te ataco”. “Incluso entonces hubo compañeros que decían ‘algo habrá hecho’ o ‘era un mando’”, recuerda Etxeberria. Este berroci, retirado como víctima del terrorismo, militante del PNV durante años, dice que su carrera se truncó cuando mataron a Joseba. “Me entró un ataque de rabia porque se lo había advertido. Empecé a golpes con todo en la comisaría. Me defenestraron por decir que se podría haber evitado. Y me di cuenta de que, si no rompía con aquello, yo podría ser el siguiente”, recuerda. Han pasado 20 años desde que asesinaron a Joseba. ETA ya no mata. Los uniformes de los ertzainas empiezan a verse otra vez en los colgadores de las casas. Lo único que sigue en su sitio es el semáforo de la calle Tívoli.



"ME ENFRENTO MUCHOS DÍAS A GENTE QUE PIENSA COMO LOS ASESINOS DE MI PADRE Y QUE ME LLAMAN ASESINO A MÍ"

Jose Goikoetxea, hijo del sargento de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, que estaba a su lado cuando ETA perpetró el crimen hace 20 años, es también ertzaintza. Hoy nos ofrece su testimonio como víctima del terrorismo.

Hace veinte años, cuando él solo contaba 16, ETA asesinó a su aita de dos tiros a bocajarro delante de sus propios ojos. Codo con codo. A su lado. Iba de copiloto en el coche con el que su padre, Joseba Goikoetxea, sargento mayor de la Ertzaintza, le llevaba al colegio. Un semáforo en rojo, el coche que se detiene y una sombra que, a traición, siega una vida y destroza una familia para siempre.

Dos décadas después, Jose Goikoetxea, el orgulloso hijo mayor del sargento, ha dejado atrás el odio y es también ertzaina. Como su aita. Como siempre ha querido. Su padre fue un pionero, de los que pusieron los cimientos de la Policía vasca. Él, en cambio, es de la última promoción. Sin privilegios. Y, paradojas de este país, le ha tocado participar, por ejemplo, en los desalojos de los muros populares en el Boulevard de Donostia y en Ondarroa -en ambos, además- con los que la izquierda abertzale trataba de impedir la detención de varias personas condenadas. Y allí, en primera línea en ambos operativos, ha tenido que escuchar lo indecible. "Me llamaron de todo. Me llamaron asesino. Y tú, estoicamente, aguantando y aguantando y tratándoles lo mejor posible", subraya.

Joseba Goikoetxea fue una figura clave en la pequeña historia de Euskadi de los últimos años hasta aquel 22 de noviembre de 1993 en que un comando de ETA acabó con su vida en un semáforo de la calle Tivoli de Bilbao cuando contaba 42 años de edad. Militante abertzale desde joven y comprometido con la lucha por la libertad, estuvo en la cárcel durante el franquismo. Salió a la calle con la amnistía de 1977. A partir de entonces, continuó



su militancia en la formación jeltzale y en 1976 volvió a ser detenido por distribuir el órgano del PNV Euzkadi, que era ilegal. Ya en 1980 pasó a formar parte de Berroci, el embrión de lo que posteriormente sería la Ertzaintza, donde llegó a ser el responsable de la unidad de información.

Su asesinato causó una fuerte conmoción, ya que fue el primer ataque directo contra un miembro del PNV y de la Ertzaintza. A partir de entonces, nada volvió a ser igual.

Jose, su hijo ertzaina, se deshace en elogios al recordarle. Es un mocetón de 1,90, abierto, alegre y profundamente sincero. En su rostro, en su forma de hablar, en sus palabras, demuestra una humanidad y una dignidad a buen seguro heredadas de su madre, Rosa Rodero, una de las primeras víctimas que en este país ha hablado de la necesidad de no odiar, de reconciliación, de perdón. Junto a su mujer y a su hijo de dos años que no para un segundo, Jose se abre por primera vez y habla con total franqueza. Su cara irradia felicidad.

"Era un gran padre. Una persona a la que sobre todo le gustaba estar mucho con nosotros. Era muy familiar. Nos trató siempre, desde que nos conoció, como sus hijos", arranca. Y es que Jose y su hermana eran fruto de un matrimonio anterior de su madre. Joseba llegó cuando él tenía 8-9 años.

"Éramos sus hijos. Y para nosotros era aita. Para todo, en todos los aspectos, era nuestro padre", recalca. Hasta el punto de que se han cambiado el apellido. Es un Goikoetxea. "Tramitamos el apellido hace unos cuatro años", recuerda ayudado por su mujer, gracias al cálculo del tiempo que llevan casados. "El juez admitió que a nosotros se nos consideraba hijos de Joseba a todos los efectos. La gente nos trataba con su apellido, hasta el correo me llegaba a casa como Goikoetxea".

La imagen de su aita está grabada a fuego en la memoria de Jose. "Se preocupaba muchísimo de mí, de que estudiase, de que fuese por el buen camino... estaba muy encima. Yo le recuerdo como un muy buen padre", rememora.

Pero todo cambió aquel maldito día en aquel maldito semáforo. Cuesta pedir a una víctima que reviva un momento tan trágico. Sobre todo si, como Jose, lo recuerda "todo" como si fuera ayer.

"Si quieres, te lo relato", señala.

- Adelante.

"Fueron dos impactos contundentes. A mí me chocó tanto que giré la cabeza a un lado, recuerdo cómo mi padre caía contra el volante, se quedaba dada la bocina... yo salí despedido por la puerta, caí al otro lado del coche. Vi a la persona. Me giré y vi a la persona, que iba con un pasamontañas puesto hacia

arriba, pero le reconocí la cara. Y le vi cómo se marchaba, y cómo había otra persona que le esperaba más adelante, a la que no llegué a reconocer. Lo recuerdo todo. Intenté reaccionar saliendo detrás de ellos, pero una señora me paró".

-¿Qué se pasa por la cabeza en esos momentos?

- En ningún momento pensé. Si llego a haber pensado, seguramente hubiese cogido el arma de mi padre y me lo hubiera llevado por delante, porque yo entonces tenía 16 años, era consciente, sabía manejar un arma porque mi padre me había enseñado. Si lo llego a pensar lo habría hecho. No pensé. Del susto caí a un lado, al oír el ruido tan fuerte. Cuando vi a una persona corriendo, lo único que hice fue salir detrás de él. Una señora, que nunca sabré quién es, me cogió, me agarró y me gritó dos veces "¡Estás loco, que va armado!", y ya me tiré al suelo, de impotencia, y ahí me quedé, esperando....

La primera espera duró cinco interminables y agónicos días, los que Joseba Goikoetxea, con un tiro en la nuca y otro en la zona lumbar, tardó en morir. Del relato de Jose no sorprende tanto su precisión como sus palabras. No habla de "asesinos" o "terroristas" para referirse a quienes le arrebataron a quien tanto amaba. "Personas". Personas que disparan. Personas que huyen. Personas que esperan. Personas que le hicieron sufrir lo que nunca imaginó.

"Fue algo traumático, unos años muy difíciles. A mí me pilló en una edad muy mala, tenía 16 años, y con dos hermanas pequeñas. Hubo unos 3-4 años que era difícil aceptarlo. Yo a mi madre no le permitía sufrir. Quería hacerme el duro. Si había algún otro atentado y mi madre normalmente lloraba, yo no se lo permitía, me enfadaba muchísimo con ella. No quería que llorase por nada. Quería hacer ver que éramos duros, que había que tirar para adelante. Yo me hice muy duro, muy duro pero cerrado. Eso es malo. Luego me ayudó la familia a superarlo y aprendes a aceptar las cosas como son y, como dice mi madre, a perdonar, que en aquella época no podía. Me cerré totalmente. Yo había perdido a un padre, y además delante de mí. Fue muy traumático".

Con 16 años, una madre viuda y dos hermanas pequeñas, Jose "el duro" -nunca echó una lágrima en aquella época, "ni en los funerales"- quiso con-



Pero todo se supera. Lo hace recordando a su padre, quién fue y lo que representó. "Mi padre murió luchando por lo que había vivido toda su vida. No murió de forma absurda, murió luchando. Y siempre me va a quedar que es una muerte mucho más digna", dice orgulloso.

Siempre quiso ser ertzaina, como su aita. "Toda la vida". Pero se graduó hace solo tres años, una vez que en Euskadi se acababa el terrorismo. "Es que en casa hacerlo antes hubiese sido muy duro", reconoce. Recuerda a su padre como un hombre feliz con su labor

y ahora él se siente "muy feliz y muy contento" de seguir sus pasos.

"Estoy viviendo algo que él ya vivió en aquella época: disfrutar con lo que hacía. Disfruto mucho -mira a su mujer, que asiente-. Voy al trabajo contento. Soy feliz yendo a trabajar, porque creo en la empresa que represento, en los motivos por los que se formó y me hace sentirme orgulloso estar ahí".

Alguien puede pensar que hacerse ertzaina ha sido un intento de emular a Joseba Goikoetxea. "No es un homenaje a mi aita. Ahí sí que lo tengo claro: nunca me podré comparar con él, ni lo que hizo. Y no voy por ese camino, porque si no, lo voy a llevar muy mal. Es más lo que me gusta hacer, y creo que puedo hacer bien", subraya.

Su trabajo nunca ha sido fácil en Euskadi. Ahora, salvando las distancias, tampoco.

"Me tengo que enfrentar muchos días a gente que piensa como los asesinos de mi padre y que me llaman de todo en una línea policial. Y ahí estoy. Lo soporto", relata.

"Lo que más me irrita trabajando como ertzaina es encontrarme en una línea de contención (en el Boulevard en Donosti o en Ondarroa) y que en la primera línea, chicos de 17-18 años, muchos que no sabían lo que significaba, estuviesen cantando, en contra de nosotros, el Lepoan hartu. No saben lo que significa, quiénes eran los que estuvieron luchando. Me duele que asuman ciertas canciones como propias. Esa canción es de los gudarís y de los que lucharon en la época franquista, entre ellos mi padre. Pero no de los de ahora. Era la canción de mi padre".

Jose ya lo hizo, se echó al hombro a su aita, intentó hacerlo con su familia en su mentalidad de 16 años y siguió adelante. Siempre adelante..

URKULLU ENTREGA EL PREMIO RENÉ CASIN DE LOS DERECHOS HUMANOS 2013 A LA COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO

El lehendakari Urkullu presidió el martes 10 de diciembre en Gasteiz la entrega del Premio René Cassin de los Derechos Humanos a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Euskadi por su larga trayectoria en la defensa de los refugiados y los emigrantes. El acto estuvo muy marcado por la muerte de Nelson Mandela y el lehendakari reclamó a todos los que estaban "alabando el ejemplo de Mandela" que lo apliquen en Euskadi para asentar la paz y la convivencia.



Durante su intervención, Iñigo Urkullu pidió aprovechar la oportunidad de aplicar en Euskadi los valores del líder sudafricano Nelson Mandela. "Quiero pedir a todas las personas que en estos últimos días están alabando el ejemplo de Mandela que lo apliquen, porque tenemos la oportunidad de hacerlo aquí en Euskadi", señaló en el acto en el que hizo entrega del premio René Cassin al presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Euskadi, Javier Galparsoro, junto al secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández. En el acto de entrega del premio a los derechos humanos 2013, hubo representación de todos los partidos políticos, del

ámbito judicial, así como representantes de diferentes colectivos y asociaciones que trabajan con los refugiados en Euskadi.

Urkullu aseguró que "no hay atajos para construir la paz y para fortalecer la convivencia" y defendió que la "memoria" debe construirse sobre el "respeto" a los derechos humanos y también sobre el "rechazo" a su vulneración. El lehendakari basó en el binomio "memoria y verdad"

el camino que debe recorrer la sociedad vasca y envió un advertencia política. "El pasado no puede convertirse en un obstáculo o en la excusa permanente para no recorrer el camino del a convivencia". También vinculó con esta idea la "garantía absoluta de la irreversibilidad de los pasos dados" y del "daño causado". Asimismo apeló a los valores de tolerancia, generosidad, altura de miras, reconciliación y convivencia como las guías que pretende impulsar su Gobierno e instó en que "si nos parece bien en Sudáfrica tratemos de facilitarlo en Euskadi". "No hay fórmulas mágicas, nadie es dueño de toda la verdad ni de toda la razón", señaló.

JUAN MARÍA URIARTE ES PREMIADO POR SU LABOR EN FAVOR DE LA PAZ



El domingo 26 de enero, la Fundación Sabino Arana premió a obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte con uno de los premios que concede anualmente "por su muy significativa contribución a la paz y a la reconciliación y por su firme defensa de los derechos humanos, de todos los derechos para todas las personas".

Preguntado por Testimonio de Silencio cómo valora este galardón, Uriarte respondió que "como un reconocimiento porque he intentado, con mayor o menor acierto, contribuir a la pacificación. Siempre han estado en mi alma muy profundamente las víctimas, todas las víctimas y quisiera mostrarles mi reconocimiento y el deseo de que puedan sanar las gravísimas heridas que han padecido y también la voluntad de que toda la sociedad y todos los estamentos sean para ellas colaboradoras y reparadoras del gran daño, del gran mal físico y moral que han padecido".

MAIXABEL LASA, TXEMA URKIJO Y JAIME ARRESE, PREMIO DERECHOS HUMANOS 2013

El galardón, entregado el jueves 6 de febrero en Madrid, reconoce actividades como llevar el testimonio de las víctimas a las aulas de Euskadi, la experiencia 'Glencree' o las reuniones entre presos y víctimas.

La asociación pro Derechos Humanos de España ha premiado la labor realizada en Euskadi por Maixabel Lasa, Txema Urkijo y Jaime Arrese durante los últimos años y les ha concedido el Premio Nacional de Derechos Humanos 2013.

Según recuerda la asociación en una nota, Maixabel Lasa y Jaime Arrese son familiares de víctimas de ETA, y, al igual que Txema Urkijo, han sido representantes en la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco durante dos legislaturas. En la actualidad Txema Urkijo es asesor de la

Secretaría General de Paz y Convivencia en Euskadi.

"En su condición de víctimas, resulta encomiable su compromiso y lucha por la paz en Euskadi, participando y promoviendo iniciativas con un gran potencial humano, como los encuentros restaurativos entre víctimas y ex miembros de ETA", destacó.

Con este premio, la asociación reconoce la labor realizada por Lasa, Urkijo y Arrese y premia la experiencia de diálogo entre exmiembros de ETA y sus víctimas. El galardón, entregado en Madrid, reconoce además otras importantes actividades como llevar el testimonio de las víctimas a las aulas de Euskadi, la experiencia 'Glencree' o las reuniones entre presos y víctimas.

En palabras de Maixabel Lasa, el hecho de recibir este reconocimiento fuera de Euskadi tiene una "notable importancia".

CONCEPCIÓN MARTÍN, VIUDA DE PEDRO ANTONIO BLANCO: "LA BOMBA DE ETA ESTALLÓ EN EL CENTRO DE MI HOGAR"

La viuda del teniente Coronel asesinado por ETA relata en el juicio su calvario.

Concepción Martín, viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, asesinado el 21 de enero de 2000 en Madrid por ETA, aseguró el martes 18 de febrero en el juicio ante los cinco acusados de asesinar a su esposo que: "la bomba no sólo estalló en la calle, estalló en el centro de mi hogar", y añadió que lleva 14 años esperando este momento.

En un emocionado testimonio ante los procesados por la muerte de su marido, que tenía 48 años, ha dicho que ella y sus dos hijos -un niño de 10 años y una niña de 15 en el momento de los hechos- llevan todo este tiempo tratando de sobrevivir "a esta tragedia y a esta situación horrible y luchando por no ser una ruina moral".

La Audiencia Nacional inició el martes 18 de febrero la vista por esta causa, en la que la fiscal Teresa Sandoval pide más de un siglo de cárcel para Iván Apaolaza Sancho, Ana Belén Egües Gurruchaga, Juan Luis Rubenach Roiz y Gorka Palacios Alday y seis años para Javier Abaunza Martínez, por su participación en esta acción que supuso la ruptura de una tregua que ETA había anunciado quince meses antes.



La viuda de la víctima recordó que lleva 23 años casada con Pedro Antonio Blanco, que en un principio cogía el autobús para ir a su trabajo hasta que un general compañero suyo le ofreció recogerle con su coche oficial, ya que "le gustaba mucho hablar con él". "Mi marido actuaba como militar y no podía consentir que un general viniera a buscarte a casa por lo que decidí esperarte cada mañana en la confluencia de las calles de Pizarra y Virgen del Puerto -donde se produjo el atentado". Añadió que antes del atentado tenían una vida de familia de clase media normal, aunque debían adoptar medidas de seguridad para lo cual su marido le compró una linterna grande para mirar debajo del coche antes de llevar a sus hijos al colegio.

"Esa bomba no solo estalló en la calle de Pizarra, estalló en el centro de mi hogar alcanzándonos a mis hijos y a mis sue-

gros y ya no hemos vuelto a ser los mismos", relató de forma muy emocionada.

Señaló que su suegro perdió la memoria hasta el punto de que en la capilla ardiente creía que estaba asistiendo a un homenaje, que su hija "dejó de ser una adolescente" y que su hijo no lo ha superado con facilidad y "no fue capaz de salir adelante", para apostillar: "Cómo le iba a contar una barbaridad así a los compañeros de colegio".

Sobre su hijo apuntó que ha requerido tratamiento psicológico y ha comentado que este tipo de jóvenes "acaban en movimientos violentos donde se sienten resarcidos por su dolor insoportable". La viuda del teniente coronel aseguró que se ha convertido en una persona muy desconfiada y "es difícil que vuelva a ser el que era".

Recordó que tuvieron que cambiar de barrio y que sus suegros "murieron en la más absoluta tristeza".

Policías que se personaron en el lugar del atentado relataron que vieron al fallecido junto al coche bomba, que era una "bola de fuego", y que luego los terroristas, en su huida, hicieron explosionar un segundo vehículo a unos cuatrocientos metros, lo que produjo una situación caótica con destrozos en edificios y coches. Además del fallecido, el atentado provocó tres heridos, entre ellos una menor que tenía 14 años y que precisó tratamiento médico-quirúrgico.

CONDENADOS A 3.860 AÑOS DE CÁRCEL POR ATENTAR CONTRA LA CASA CUARTEL DE BURGOS

La Audiencia Nacional condenó el miércoles 11 de diciembre a 3.860 años de cárcel a los miembros del comando Otazua de ETA Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria por el atentado con una furgoneta bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos en 2009, que causó 160 heridos de diversa consideración.

La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a cada uno de ellos a esa pena por 160 delitos de asesinato en grado de tentativa y un delito de estragos, y destacó en la sentencia los testimonios de los peritos, que declararon en el juicio que la explosión fue "aterradora" y dejó el edificio destruido "por arriba y por abajo". La sala estableció, además, que deben pagar 15 millones a la Dirección General de la Guardia Civil por los daños al edificio, e indemnizar con 39.074 euros a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por los daños cau-

sados dos hospitales de Burgos próximos a la casa cuartel.

El atentado se produjo en la madrugada del 29 de julio de 2009, cuando una furgoneta bomba cargada con más de 700 kilos de amonal explotó y causó heridas a 160 personas, entre ellas 41 niños. La sentencia considera probado que los tres miembros de la banda, siguiendo instrucciones, decidieron atacar contra la casa cuartel y que, para ello, se desplazaron a Burgos, donde recopilaban información sobre el lugar donde colocaron la furgoneta, un aparcamiento localizado en la parte trasera de la casa cuartel. Posteriormente los tres se fueron al Estado francés, donde otro miembro de la banda les suministró una furgoneta verde Mercedes Vito que, ya en Araba, pintarían de blanco y cambiarían por la matrícula de una furgoneta de la misma marca y modelo que pertenecía a un vecino de Burgos.

Los miembros del comando Otazua ya habían sido condenados y la mayor pena que se les impuso fue 45 años de prisión por el asesinato del inspector jefe de la Policía Eduardo Puelles en 2009.

LA AUDIENCIA NACIONAL SENTENCIA A "KANTAUURI" A 56 AÑOS POR EL ASESINATO DE LOS BECERRIL

La Audiencia Nacional ha condenado a 56 años de prisión al exdirigente de ETA José Javier Arizcuren Ruiz 'Kantauri' por ordenar el asesinato del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, Ascensión García, en Sevilla el 30 de enero de 1998.



Alberto Jiménez-Becerril.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia considera probado que desde finales de 1994 'Kantauri' era el jefe de los llamados "comandos ilegales" de ETA y responsable de todos sus actos criminales, entre otros del llamado "comando Andalucía", integrado por José Luis Barrios Martín, Mikel Azurmendi Peñagaricano y María Teresa Pedrosa Barrenechea.

Los magistrados explican en la sentencia, en la que también le condenan a pagar un millón de euros a los tres hijos del matrimonio asesinado, que se han recabado "abundantes pruebas de cargo" que acreditan que 'Kantauri' fue quien ordenó el asesinato del concejal de Sevilla y su mujer, pues los comandos debían pedirle "autorización concreta" para perpetuar acciones contra personas del ámbito político. La sentencia detalla que 'Kantauri' se reunió en Francia con dos miembros del "comando Andalucía", ya condenados por estos hechos, y allí les impartió "instrucciones concretas, facilitándoles la suma de un millón y medio de pesetas y tres pistolas Browning, más una pistola Star". Así, sobre la una y cuarto de la madrugada del 30 de enero de 1998 los etarras

Barrios y Azurmendi, armados con dos pistolas que les había entregado 'Kantauri', siguieron al concejal y a su esposa durante 245 metros "pasando por estrechas, sinuosas y oscuras calles" y "ante la soledad que reinaba en esas calles". Jiménez-Becerril se dio cuenta de que dos individuos les seguían y, como consecuencia, él y su mujer aceleraron el paso. Esto no impidió que Barrio y Azurmendi se acercaran más, hasta situarse a unos 30 o 60 centímetros de la pareja, de forma que a la altura del número 11 de la calle de don Remondo, Azurmendi disparó en la cabeza del concejal, cuando este se giró alerta por los pasos de sus perseguidores. La víctima se desplomó entonces "de forma instantánea" y su mujer comenzó a pedir ayuda a gritos, relata la sentencia, momento que aprovechó Barrios para disparar "a corta distancia a la base de

la nuca de Ascensión García". "Los planes de 'Kantauri' se ejecutaron", apostilla la sentencia.

A la hora de condenar al etarra, el tribunal ha tenido en cuenta entre otras pruebas las propias declaraciones que prestaron los autores materiales de los hechos en sede judicial, así como unas cartas manuscritas de 'Kantauri' incautadas en un 1997 en el piso franco del "comando Vizcaya". En esos documentos, el jefe de los llamados "comandos ilegales" ordenaba dedicar "toda la fuerza posible" en secuestrar a concejales del PP y abogaba por que si el rapto no era posible, los comandos debían "dar caña" y "a por otro".

"Si no podéis hacer un secuestro, dadle en toda la cabeza. Pero tened en cuenta que es el secuestro lo que crea inestabilidad y contradicciones mayores por su dureza", señala en sus órdenes 'Kantauri', que concluye: "Dales caña lo más fuerte que podáis".

El contenido de estas cartas es lo que ha llevado al tribunal a aplicarle la agravante de alevosía, pues, aunque no fuera autor inmediato de los hechos, 'Kantauri' proporcionó a sus subordinados las instrucciones necesarias para llevar a cabo brutales atentados, facilitándoles armas, explosivos, dinero y todo el material necesario para el "éxito" de las acciones.

En este sentido, la sentencia identifica a 'Kantauri' con "los jefes que ni se manchan las manos de sangre, ni corren peligro alguno de ser detenidos".

FRANCIA CREE QUE URÍA FUE ASESINADO POR NO PAGAR

El hallazgo de un documento a nombre de Inaxio Uria en los archivos del aparato financiero de ETA hace pensar a la Policía francesa que su asesinato obedeció más al impago del 'impuesto revolucionario' que a la participación de su empresa en la construcción de la 'Y vasca'. El fichero fue intervenido a Ekaitz Sirvent al ser detenido el 10 de abril de 2009 en la estación ferroviaria de Montparnasse en París nada más apearse de un tren de alta velocidad procedente de Burdeos, según testificó el teniente de policía Benoît Auger Latife durante el juicio al aparato de extorsión que se celebró en París. Este hallazgo coincide con el quinto aniversario del asesinato del empresario. La familia le recordará hoy con una concentración silenciosa en la localidad guipuzcoana de Azpeitia. Como en anteriores ediciones, el homenaje tendrá lugar a la una de la tarde en Loiola, frente al monolito que recuerda el lugar donde miembros de ETA le tirotearon en 2008.

LA POLICÍA GALA CALCULA QUE ETA EXIGIÓ 135 MILLONES DE "IMPUESTO REVOLUCIONARIO" ENTRE 2005 Y 2007

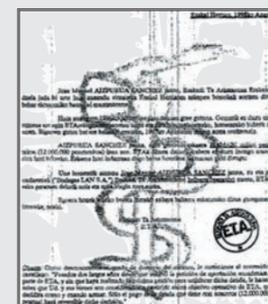
El recorte a la mitad del gasto por la irrisoria recaudación que lograba la banda motivó el cisma en 2008 entre las dos facciones 'Thierry'Ozaeta y 'Ata'-Txeroki.

En 2005, 2006 y 2007 ETA exigió a un millar de empresarios una cifra global de 135 millones de euros en concepto de 'impuesto revolucionario', según estimaciones de la Policía francesa a partir de archivos internos. Pero las cifras efectivamente recaudadas eran porcentualmente irrisorias pues, por ejemplo, en 2005 los ingresos por extorsión solo alcanzaron los 625.000 euros.

La drástica política de recortes de la tesorería, que impuso reducir a la mitad los gastos de funcionamiento, está en el origen de la crisis cismática que opuso en 2007 y 2008 al tándem político-financiero de 'Thierry' con el complejo logístico-militar de 'Txeroki' y 'Ata'. El testimonio bajo juramento de los policías Nicolas Engel y Benoît Auger-Latife ante el Tribunal Especial de lo Criminal de París arrojó el lunes 2 de diciembre luz inédita sobre la complicada situación financiera de ETA y el limitado impacto de la extorsión en el empresario, comercio y profesionales liberales en los coletazos de la lucha armada. La cifra más llamativa por su dimensión desorbitada es la que contabiliza un total de 134.732.000 euros en peticiones del 'impuesto revolucionario' reclamadas en 1.593 cartas remitidas entre enero de 2005 a diciembre de 2007 a 1.025 víctimas.

Esos guarismos proceden del material informático intervenido en abril de 2009 al ser arrestado en París a Ekaitz Sirvent Auzmendi, juzgado desde el pasado 25 de noviembre junto a Ainhoa Ozaeta y Peio Ion Sánchez Mendaza por presunta gestión del 'impuesto revolucionario' desde el aparato Gezi. Entre los archivos de esta estructura había un listado de todos los códigos alfanuméricos atribuidos a cada objetivo para autentificar los envíos y facilitar su seguimiento. En esa secuencia de cifras y letras, la primera inicial corresponde a la provincia de la empresa, los números siguientes indican el mes y el año de la demanda, los siguientes el número de registro en la base de datos de ETA, a continuación viene la cantidad exigida y se termina con la letra del recaudador de Gezi que lleva el expediente.

Los 134 millones y pico son, por tanto, una extrapolación a partir de los códigos alfanuméricos y no del contenido de las cartas, todas criptadas y protegidas por claves de acceso que no se han podido descifrar. No es el caso de medio centenar de misivas preparadas para ser enviadas en abril, mayo y junio de 2009 con peticiones globales del orden de millón y medio al mes que todavía no habían sido encriptadas. Por ejemplo, fechadas en abril se descubrieron 17



cartas de recordatorio con sumas de entre 60.000 y 300.000 euros y con data de junio había 14 misivas de amenazas de 36.000 a 180.000 euros.

Las cifras de ingresos se encontraron en mayo de 2008 en la casa que ocupaban en Burdeos el jefe político Xabier López Peña, 'Thierry', y Ainhoa Ozaeta, 'Kuraia', la supuesta tesorera. Según la Policía francesa, el binomio sustituyó en idénticos cometidos a la pareja formada por Mikel Albisu, 'Antza', y Marixol Iparragirre, 'Baltza', detenidos en octubre de 2004 en una granja bearnesa. La contabilidad referida a 2005 refleja unos ingresos totales de 760.380 euros, de los que 625.000 corresponden al 'impuesto revolucionario', el 82%, una proporción equivalente a la del ejercicio de 2006.

A título comparativo, Iparragirre, la anterior tesorera, había consignado en 2002 una recaudación de 1.434.681 euros fruto del chantaje. La merma progresiva de recursos trajo como consecuencia «una purga drástica consistente en dividir por dos las asignaciones a todos los aparatos», explicó el capitán Engel. A su juicio, el brutal tijeretazo a los gastos de funcionamiento motivó las críticas de Mikel Karrera Sarobe, 'Ata', a Ozaeta en su calidad de responsable del dinero. En un documento titulado 'Es hora de hablar claro', fechado en enero de 2008 y encontrado también en Burdeos, 'Ata' arremetía contra la «incompetencia» de 'Kuraia' por poner en peligro la seguridad de los militantes con los recortes, no reinvertir los fondos ahorrados o haber realizado una ruinoso por tardía conversión de dólares en euros, entre otras críticas. La crisis derivó en expulsiones recíprocas por parte de ambos bandos enfrentados en una escalada de tensión que obedeció a «diferencias sobre el reparto del dinero y no de línea política», según testificó la semana pasada el comandante Stéphane Durey, otro policía antiterrorista. Atribuida a Sirvent, se halló en su poder una contribución partidaria de cambiar la metodología de la extorsión y de apuntalarla con atentados selectivos para reeditar el 'efecto Korta', repunte recaudatorio registrado tras el asesinato el año 2000 del presidente de la patronal guipuzcoana. El autor argumentaba que se había producido una «democratización del impuesto» a causa de las campañas masivas.

«Los empresarios conocen perfectamente el procedimiento y sus plazos. Las patronales les avisan y les dicen a partir de qué plazo deben comenzar a inquietarse (a partir de la tercera o de la cuarta carta). Debemos poner término a su tranquilidad y a su conocimiento. Debemos jugar más sobre el efecto sorpresa y el efecto psicológico», recomendaba. ETA anunció en marzo de 2011 el fin de la extorsión.

UN MILLAR DE EMPRESARIOS PAGARON A ETA EN 4 AÑOS

ETA reclamó entre 2005 y 2009 a 1.025 empresarios, sobre todo del País Vasco y Navarra, algo más de 134 millones de euros para financiar su actividad terrorista.

Estos son algunos de los datos que se han conocido en el juicio que se siguió en París contra el cabecilla Ekaitz Sirvent y otros miembros de la banda. En la vista oral, la Fiscalía francesa destacó el papel de Sirvent como responsable de la extorsión realizada por ETA. Los documentos que se le incautaron tras su detención, en 2009, demuestran que en cuatro años y medio (entre 2005 y 2009) la banda exigió el llamado «impuesto revolucionario» a más de un millar de empresarios. El fiscal Jean-François Ricard se refirió ante el Tribunal de lo Criminal de París a esas «1.025 víctimas» que aparecen como destinatarias de los

1.593 correos que habían dejado traza en los archivos en soporte informático que llevaba al ser capturado en una estación de tren de París el 10 de abril de 2009. La mayor parte de esos archivos no han podido ser leídos porque estaban codificados. En algunos de los correos aparece explícitamente el nombre del empresario extorsionado, y la cantidad que se le exigía, además de la advertencia de que si no la abonaban se convertirían «en un objetivo potencial de ETA». Por lo general, ETA exigía que se le pagara en billetes de 100, 50 y 20 euros y, en caso de haberse negado a los requerimientos precedentes de la organización terrorista, el empresario era catalogado como «enemigo de la lucha por la liberación de Euzkadi» y se le informaba: «usted y sus bienes pasan a ser objetivos operativos».

29 de noviembre de 2013

GETXO RINDE SU HOMENAJE ANUAL A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Ayuntamiento de Getxo, con la excepción de Bildu, homenajea a las víctimas del terrorismo.

La corporación municipal del Ayuntamiento de Getxo, con la excepción de los cuatro representantes de Bildu en el Consistorio, rindieron homenaje el viernes 29 de noviembre de 2013 a las víctimas del terrorismo en un acto que se desarrolló en el monolito ubicado en la plaza de San Ignacio. Dos txistularis han interpretaron el Agur Jaunak, a cuyo término se guardó un minuto de silencio por parte de los representantes de PNV, PSE-EE y PP. El homenaje se completó con la colocación por parte del alcalde de Getxo, Imanol Landa, de un ramo de flores al pie de la escultura ubicada en la plaza de San Ignacio. El homenaje se viene celebrando tras el acuerdo alcanzado en Pleno en marzo de 2009. En declaraciones a los medios, Landa subrayó que el municipio tiene "su pro-



pio recorrido en relación al reconocimiento y memoria de las víctimas". "En Getxo tenemos víctimas del terrorismo de ETA y del GAL. Mediante este acto sencillo, pero emocionado, queremos traer al presente la memoria de todas las víctimas", ha indicado. Asimismo, recordó que en 2014, "antes de primavera", también se llevará a cabo el homenaje anual a las víctimas del Franquismo y la Guerra Civil. Preguntado por la ausencia de representantes de Bildu en el acto, Landa abogó por poner la "lupa" en el compromiso y recuerdo de Getxo para con

las víctimas. "A partir de ahí, otra serie de lecturas y reflexiones, que sin duda tendrán más o menos importancia, serán las que serán, pero yo quiero subrayar que Getxo sigue trasladando el compromiso de reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo", ha expresado. Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Marisa Arrúe, recordó que en el municipio se han producido "16 asesinatos por la banda terrorista ETA, así como multitud de coches bomba y vecinos que han sufrido esta lacra durante muchos años". Además, lamentó que un grupo político, en referencia a Bildu, "siga sin condenar estos actos y sin venir a hacer un reconocimiento a este sufrimiento". "No vale hablar y decir que se condena o que ellos también sufren. Ya está bien, tiene que dar los pasos, acercarse a estos homenajes y condenar los actos de violencia que están repuntando en Euskadi", concluyó.

3 de diciembre de 2013

AZPEITIA RINDE HOMENAJE A INAXIO URÍA CON MOTIVO DEL V ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

Cientos de personas recuerdan en Azpeitia a Inaxio Uria al cumplirse cinco años de su asesinato a manos de ETA.

Más de un centenar de personas, entre las que se encontraban representantes políticos del PNV, EA, PSE y Aralar, así como familiares y allegados de Inaxio Uria, recordaron el martes 3 de diciembre de 2013 en Azpeitia a este empresario, cuando se cumplen cinco años de su asesinato por ETA. No hubo presencia de miembros de Sortu ni del PP. La concentración silenciosa que tuvo lugar a las 13,00 horas se prolongó por un cuarto de hora junto al monolito colocado hace cuatro años en memoria de Uria, al lado del restaurante Kiruri, en el barrio azpeitiarra de Loiola, donde el empresario guipuzcoano fue tiroteado por un miembro de ETA cuando se dirigía al establecimiento hostelero. A este acto de recuerdo asistieron familiares y allegados de Uria y trabajadores de la empresa Altuna y Uria, de la que era fundador Inaxio.



hermanos, sobrinos y nietos de Inaxio. En sus rostros era patente que "el 3 de noviembre ha quedado marcado con dolor y sufrimiento en el calendario de nuestras vidas", como manifestaron tras el asesinato. Al acto del homenaje no acudió su viuda, Manoli Aramendi, aunque sí al oficio religioso. Al término de la concentración, Miren Uria, sobrina del empresario asesinado, quiso agradecer a los presentes en la concentración, a las instituciones y a los medios de comunicación por el trato dado a la memoria de Inaxio. "Aquí vienen los que quieren venir y nos hemos sentido siempre muy arropados",

A la misa de mediodía en la basílica de Loiola, a la que acudieron los más allegados de la familia Uria, Azpeitia acogió un año más una multitudinaria ofrenda floral silenciosa. A los pies del monolito se depositó un centro con decenas de rosas rojas y un ramo en el que podía leerse la frase "antegiko lagunak" (de los amigos de la empresa). En primera fila, los hijos, los

señaló Uria, quien insistió en que a este acto acude "el que le ha conocido, el que le quiere y el que quiere honrar su memoria".

A preguntas de los periodistas Miren eludió pronunciarse sobre la ausencia, un año más, del alcalde de Azpeitia, Eneko Etxebarria de Bildu, y de miembros de Sortu. Se da la circunstancia de que, horas después, el regido tuvo una mención especial hacia los Uria al cierre del pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento. Etxebarria indicó que "me hubiese gustado haber dado un paso más por nuestra parte, en otro escenario, y ofreció su "total reconocimiento y apoyo a la familia Uria". Por parte de los partidos, estuvieron presentes en el homenaje los dirigentes del PNV Andoni Ortuzar y Joseba Egibar, así como los representantes de EA Pello Urizar y Juanjo Agirrezabala. La secretaria de organización de Aralar, Rebeqa Ubera, acudió en representación de la formación, mientras que, por parte del PSE, estuvo presente su secretario general en Gipuzkoa, Iñaki Arriola. Desde las instituciones estuvieron presentes la presidenta del Parlamento Vasco,



Bakartxo Tejeria, y la consejera de Empleo y Competitividad del Gobierno vasco, Arantza Tapia. Además, el empresario vasco estuvo representado por el presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua.



Comunicado a los medios de la familia Uria

El sábado 30 de noviembre de 2013, la familia Uria Aramendi envió a los medios un comunicado con motivo del quinto aniversario del asesinato de Inaxio en el que recordaban "al marido, padre, hermano y amigo que nos arrebataron" y señalaban que, aunque "posiblemente cada uno de nosotros hemos gestionado nuestros sentimientos de formas muy diferentes, el sabor final siempre sea el mismo: dolor, recuerdo y carencia". "A ese sufrimiento poco a poco nos gustaría ir añadiendo otro matiz, la esperanza. La esperanza en la justicia, en la memoria. Esperanza en un proceso de cambio de nuestra sociedad sin olvidos, con memoria y justicia. Esa justicia que no siempre va unida a la ley", apuntaban. En estos "tiempos convulsos" consideran "importante" anteponer la ética y los valores humanos. "Los que han causado tanto sufrimiento asesinando cobardemente niños, mujeres y hombres deben de cumplir sus condenas íntegras. Ellos son los que deben de sentir la presión, no nosotros", añadían.

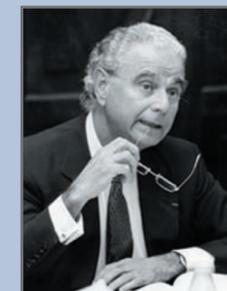
15 de febrero de 2014

HOMENAJE A MANUEL BROSETA EN EL XXII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El miércoles 15 de febrero, la Asociación de Amigos de la Fundación Profesor Manuel Broseta llevó a cabo una ofrenda floral su memoria con motivo del XXII aniversario de su asesinato a manos de ETA.

Al homenaje, que se ha celebrado a las 13 horas en el monolito conmemorativo ubicado en la Avenida Blasco Ibáñez de Valencia, acudieron familiares, amigos, autoridades y personalidades. Abrió el acto Pablo Broseta como presidente de la Asociación de Amigos de la Fundación Manuel Broseta, y posteriormente cedió la palabra al ex presidente del Tribunal Constitucional y amigo del jurista asesinado, Pascual Sala. Sala insistió que el Estado de Derecho no puede negociar el final de una banda terrorista y que lo único que tiene que hacer ETA es disolverse y pedir perdón a las víctimas por el daño causado. También abogó por el cumplimiento de las penas.

Entre las personalidades que acudieron al acto de homenaje destacó la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, quien tomó la palabra y señaló el carácter simbólico para la sociedad valenciana y española de la figura del profesor Manuel Broseta. También estuvieron presen-



Manuel Broseta.

tes el Conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano o la Consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, así como representantes de las asociaciones de víctimas como Francisco Zaragoza, presidente de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de Víctimas del Terrorismo; Pierre Vanlangenshove, Presidente de la Legion d'Honneur y Miguel Ángel Alambiaga, Delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana. También estuvieron presentes los patronos de la Fundación Manuel Broseta, Rafael Ferrando y Manuel Broseta Dupré, presidente y vicepresidente de la misma; el presidente del Consell Juridic Consultiu, Vicente Garrido; el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán; María Emilia Adán e Ignacio Jiménez de la Iglesia.

Con cerca de 150 asociados, la Asociación de Amigos de la Fundación Profesor Manuel Broseta tiene como uno de sus objetivos principales difundir los valores de tolerancia, convivencia y respeto a las opiniones contrarias que marcaron de manera decisiva la trayectoria vital de Manuel Broseta. Con este acto se recordó no sólo su memoria sino la de todas las personas que han sido víctimas de la violencia, intolerancia y sinrazón terrorista.

23 de enero de 2014

FAMILIARES Y AMIGOS RINDEN HOMENAJE A GREGORIO ORDÓÑEZ EN EL XIX ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El jueves 23 de enero familiares y amigos rindieron homenaje en el cementerio de donostiarra de Polloe al que fuera concejal del Partido Popular en la capital guipuzcoana, Gregorio Ordóñez, con motivo del XIX aniversario de su asesinato a manos de ETA.

Tras el homenaje, que comenzó quince minutos antes de las cinco de la tarde, la hermana de Gregorio Ordóñez y actual presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez lanzó un durísimo mensaje a Mariano Rajoy en presencia de la presidenta del PP de Euskadi, Arantza Quiroga, y del portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, al señalar que "este gobierno nos desprecia". De nada sirvió la presencia de la cúpula de los populares vascos en el homenaje, que en las últimas horas había estado precedido por la polémica, ya que Consuelo Ordóñez alegó que no acudía al acto convocado por el PP en el Kursaal una hora después porque no la dejaban ofrecer un discurso propio, según la formación popular porque simpatiza con UPyD, aunque ella negó en el cementerio de Polloe militar en partido político alguno.

Tras el "veto" que dijo haber sufrido y las "excusas peregrinas" y el "paripé" que según ella hizo el PP durante la organización del homenaje, la presidenta de Covite arrojó sus críticas al Ejecutivo de Rajoy. "Este gobierno no escucha a las víctimas, es el gobierno quien ha roto las relaciones, los que no vienen, los que dan plantones a las víctimas, y son ellos los que nos desprecian, los que dicen que es muy difícil gobernar y tener mayoría absoluta. No somos nosotros quienes les estamos dando ningún portazo", señaló Consuelo Ordóñez. Al homenaje acudió también el impulsor de VOX, Santiago Abascal, y representantes de UPyD como Rubén Múgica. La puntual llegada a las cinco de la tarde al cementerio de



había empezado con 15 minutos de antelación y para entonces el sacerdote se encontraba ya en el uso de la palabra. Tras el responso y la ofrenda floral, los representantes populares y los de Covite se saludaron.

La hermana de Gregorio Ordóñez aludió precisamente a la incomodidad de los dirigentes del PP al escuchar sus críticas. "Si alguien se ha sentido incómodo, que se pregunte si es Consuelo la que les incomoda o son sus conciencias". Añadió que echaba en falta que "no se hubiese recordado la figura" de su hermano "por sus compañeros de partido que tantas veces se vanaglorian y dicen que es un referente y un símbolo, y que hablan por su boca diciendo lo que haría ahora y dónde estaría ahora", algo que ni siquiera su propia familia "se ha atrevido a decir nunca".

Consuelo Ordóñez acusó al PP de haberse distanciado del discurso que históricamente mantuvo su hermano. "Gregorio dijo que por mucho que (los terroristas) mataran nunca iban a conseguir nada. Pero han cambiado mucho las cosas y, me produce muchísima tristeza decirlo, pero estamos más cerca que nunca de que consigan todo lo que no consiguieron mientras nos mataban". La presidenta de Covite se opuso también a la "idea" que, según ella, se asegura desde "Madrid", de que la organización armada "está derrotada" y que "solo se espera su rendición" porque, en su opinión, "por primera vez ETA acaricia la posibilidad de ganar las próximas elecciones autonómicas" de 2015.

"Que no nos vengan con el cuento de que somos unos intransigentes porque no queremos que esos pobres chicos que están en las cárceles salgan a la calle", abundó Ordóñez, porque "tiene narices que personas que han estado matando, a los tres años salgan, les pongan la banda de música y les den un trabajo", aseveró.



Polloe de los dirigentes del PP, entre los que se encontraban Iñaki Oyarzábal y Borja Sémper, se produjo en medio de un claro desconcierto, ya que el acto



23 de enero de 2014

EL PARTIDO POPULAR RINDE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE ETA ENTRE 1995 Y 2000

El jueves 23 de a las seis de la tarde, el Partido Popular rindió homenaje en el Kursaal donostiarra a las víctimas del terrorismo asesinadas entre 1995 y 2000, sin la asistencia de una de ellas, la hermana de Gregorio Ordóñez, Consuelo Ordóñez, quien declinó la invitación por negársele el uso de la palabra en un acto dedicado, ente otros, a la memoria de su hermano. Las hermanas y viudas de otras víctimas homenajeadas sí pudieron tomar la palabra. Consuelo, no.

Muchas veces es preciso escuchar cosas que no se quieren oír si se quiere dar una imagen de tolerancia. Pero no fue esto lo que sucedió en el homenaje que el PP rindió a la figura de Gregorio Ordóñez en el Kursaal donostiarra, al negársele tomar la palabra su hermana Consuelo, quien, evidentemente, declinó la invitación que la habían cursado. Un gesto poco elegante de un partido que, precisamente, hace de la defensa de las víctimas su bandera.

Apoyar a las víctimas es escuchar y dar voz a todas, se comparta o no su discurso. Discernir o escoger su voz en función de la conveniencia, es utilizarlas y mani-



pularlas. Todas deben ser escuchadas y deben poder expresar su opinión, con o sin fundamento; se comparta o no su discurso, que siempre sale del dolor de su corazón, y desde luego a ninguna se le debería negar la palabra. Menos aún durante un homenaje en su memoria. En lugar de Consuelo hablaron otras víctimas, como Mari Mar Blanco, hermana del concejal Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA en 1997 o Pilar Elías, viuda de Ramón Baglietto, edil de UCD en Azkoitia, víctima de la banda terrorista en 1980. La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, censuró que el «coraje cívico» que demuestran los cargos populares se estaba viendo «mancillado por unos pocos, aquí y allí, sin ninguna sensibilidad

y sin ningún respeto». Frente a los reproches de que el PP está cediendo ante la banda terrorista, replicó que ETA «se disolverá como un azucarillo, sin que haya nada a cambio».

También quienes le precedieron en su discurso - Alfredo Marco Tabar, Antonio Merino, José Usandizaga o, Pilar Elías-, incidieron en el rechazo a las

críticas que estaba recibiendo el PP por su política frente a ETA, ahora que desde el PNV, PSE y Bildu le reclaman concesiones a la banda terrorista a cambio de beneficios para sus presos. La presidenta del Partido Popular vasco, Arantza Quiroga cerró el acto de homenaje respondiendo a los reproches de la presidenta de Covite. Reivindicó el "coraje" y el "compromiso" mostrado durante años por los cargos populares vascos en la lucha contra ETA. "Nadie puede venir a darnos lecciones de ningún tipo". "Hemos sido nosotros, aquí, los que hemos aguantado. Y solo desde la mezquindad y el interés político se puede poner en duda la trayectoria de hombres y mujeres como vosotros". Nuestro ha sido el compromiso contra la intolerancia y nadie puede venir a reprocharnos nada- manifestó Quiroga-. El miedo no pudo con nosotros. ¡Cómo lo va a hacer ahora! Estamos más que orgullosos de permanecer en este partido de personas intachables, de un partido que se agarró a la ley para resistir".

Arantza criticó el cinismo de quienes no movieron un dedo en el pasado y hoy "dicen que es el PP el que no quiere la paz en su tierra", en alusión a la izquierda abertzale. "La nuestra ha sido una batalla de las no armas contra las armas, y esas últimas aparecerán tarde o temprano para su desguace", añadió. Quiroga abogó por trazar desde las instituciones vascas una línea "entre víctimas y asesinos", porque "la bondad y la infamia no pueden confundirse" y aseguró: "ETA se disolverá como un azucarillo y sin darle nada a cambio".

"Han sido demasiados años de ETA como para que de un plumazo algunos pretendan pasar del terrorismo a la aldea feliz de la reconciliación como si nada hubiera pasado", zanjó.

26 de enero de 2014

HOMENAJE A RAMÓN DÍAZ EN SAN SEBASTIÁN CON MOTIVO DEL XII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El domingo 26 de enero, familiares, amigos y compañeros de la sociedad Loiotarra, recordaron al cocinero de la Comandancia de Marina de San Sebastián Ramón Díaz, en el duodécimo aniversario de su asesinato. A manos de ETA. El acto de homenaje y recuerdo consistió en la colocación de un retrato de la víctima en el lugar donde fue asesinada, la realización de una ofrenda floral y se guardó un minuto de silencio en su memoria. Sus allegados pidieron que su ejemplo de bondad



sirva para "asentar" la paz en Euskadi.

30 de enero de 2014

HOMENAJE A JIMÉNEZ BECERRIL EN SEVILLA CON MOTIVO DEL XVI ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El jueves 30 de enero, familiares y amigos rindieron homenaje a Alberto Jiménez Becerril y a su esposa en el lugar donde fueron asesinados a manos de ETA, con motivo de su XVI aniversario.

La eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril manifestó durante el homenaje celebrado en memoria de su hermano -el concejal de Sevilla Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA junto con su esposa, Ascensión García, hace dieciséis años-, su convencimiento de que quienes apoyan a los terroristas «nunca debieron entrar en las instituciones democráticas», en referencia a la izquierda abertzale. También señaló que en la ciudad hispalense «no confundimos a los héroes». «Quienes asesinan por la espalda son unos criminales y unos cobardes, y aquí el único pasillo que le haríamos es el que con-



duce directo a la cárcel, y los únicos cohetes que tiraríamos serían para celebrar la entrega de las armas», añadió en presencia de los tres hijos del matrimonio víctima de la banda terrorista. Jiménez Becerril confió asimismo en que los terroristas renuncien a su arsenal y colaboren con la justicia, para que el sacrificio de su hermano y de su cuñada «no haya sido en vano».

El acto de homenaje se celebró en el sitio exacto en el que los asesinos de ETA cometieron el crimen, donde luce una placa de recuerdo «necesaria para la memoria, la verdad y la justicia», según la eurodiputada. Al homenaje asistieron también, la ministra de Empleo, Fátima Báñez; la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril -alcaldesa de Sevilla cuando tuvo lugar el asesinato-; la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo; y el actual primer edil de la capital hispalense, Juan Ignacio Zoido.

8 de febrero de 2014

ETA HOMENAJE A JOXEBA PAGAZAURTUNDÚA EN ANDOAIN CON MOTIVO DEL XI ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El sábado 8 de febrero, familiares y amigos de Joxeba Pagazaurtunda le rindieron homenaje en Andoain con motivo del XI aniversario de su asesinato a manos de ETA.

Tras el homenaje, que consistió en una ofrenda floral que se realizó ante la escultura de Agustín Ibarrola que recuerda a Joxeba, su hermana Maite Pagazaurtundua denunció que en estos momentos «nos rodea el fango de la manipulación de la historia y de la construcción de un pasado a medida del caramelo de la paz y de las otras piezas del tocomucho de ETA». La escultura «La casa de Joseba», erigida por Agustín Ibarrola en honor a esta víctima de ETA, fue el sitio elegido para el homenaje que contó con la presencia de Maite Pagazaurtundua, número dos a las elecciones europeas por UPyD, y de la viuda del asesinado, Estíbaliz Garmendia.

La líder de UPyD, Rosa Díez, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Iñaki Arriola, y el portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, son algunos de los representantes políticos que se desplazaron hasta Andoain para honrar la memoria de Joseba Pagazaurtundua.

Maite Pagazaurtundua, señaló que el denominado por algunos «proceso de paz y convivencia» y que en su opinión se podría llamar, en lenguaje sencillo, «paz por presos» supondrá un «fracaso histórico» por el deterioro de la democracia española que supondrá y que no puede medirse todavía.

A su juicio, no es posible medirlo aún, primero, «por la propaganda y las fotos que sostienen el teatrillo», y, segundo, «porque hace falta distancia temporal para que se diluya el pensamiento cautivo de estos tiempos».



"Pasividad"

«No es necesaria la colaboración activa del Gobierno de la nación para el fracaso histórico que apunta. La pasividad derivada de la falta de fe en derrotar toda la estrategia de ETA es suficiente para que la impunidad llegue a extenderse de lo social a lo penal», señaló Maite, quien se dirigió también a su hermano para prometerle que no dejarán de dar «testimonio de cada paso» dado dentro de este «gigantesco truco que pasará a la historia de la infamia». «No seremos dóciles. Te queremos. Un beso, querido hermano», finalizó diciendo Maite Pagazaurtundua, quien recitó un poema que escribió en recuerdo a Joseba en el que considera que «los políticos de ETA, los de la raza que carece de corazón» son «especialmente culpables» de su asesinato. Durante el homenaje a Joseba, que se celebró bajo una intensa

lluvia, también tomó la palabra Fernando Savater, quien quiso dejar claro que la «paz es el cumplimiento de la ley», que «los etarras» que les preocupan «no son los que están justamente cumpliendo sus condenas en las cárceles sino los que aún están sueltos» y que el «nuevo tiempo» proclamado por algunos no es tal, ya que lo novedoso en Euskadi sería precisamente tener «una democracia abierta, plural».

Rubén Múgica, hijo del dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA, consideró «esencial el relato de lo ocurrido», advirtió de que «no hay equilibrio posible entre los asesinos y los asesinados» porque «o se está con los que mataron o se está con los que murieron» y aseguró que «sólo desde la malicia de unos y la desidia de



otros puede pedirse tanta paz para una guerra que nunca» ha existido. En la ofrenda foral celebrada previamente por la agrupación socialista de Andoain tomó la palabra la portavoz municipal del PSE, Maider Lainez, quien denunció que en el Ayuntamiento, «mes tras mes y pleno tras pleno, los concejales de PNV y Bildu aprueban mociones en las que solicitan mejoras» para los presos de ETA o «ayudas económicas para que las familias puedan visitarlos».

«Cuánto daríamos los que estamos aquí por poder desplazarlos lo que hiciera falta» con tal de ver a Joseba Pagazaurtundua y hablar con él, «aunque sólo fueran unos minutos», recalcó Lainez, al tiempo que lamentó que desgraciadamente esa posibilidad ya no exista.

20 de febrero de 2014

HOMENAJE A FERNANDO BUESA Y JORGE DíEZ EN EL MUSEO ATRIUM DE VITORIA

Su viuda, Natividad Buesa, pidió una reflexión «sincera» a «todos aquellos que apoyaron, justificaron o fueron cómplices» de la violencia, y que reconozcan «que se equivocaron, que actuaron mal, y que causaron un daño injusto e irreparable».

La Fundación Buesa celebró el jueves 20 de febrero en el Museo Artium de Vitoria un acto de homenaje en memoria del dirigente socialista alavés Fernando Buesa y del ertzaina Jorge Díez, asesinados por ETA el 22 de febrero de 2000.

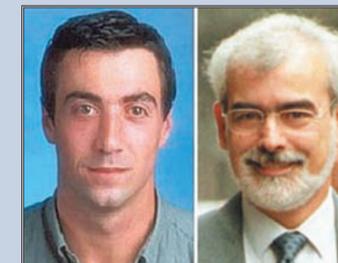
Al acto, que la Fundación Buesa había titulado «Hacia un consenso en valores democráticos» acudieron más de 200 personas y contó con la participación de todos los partidos políticos, incluido EH Bildu a través de Peio Urizar, así como del exlehendakari José Antonio Ardanza, del expresidente del PNV Josu Jon Imaz, que asistió como patrono de la Fundación, y de víctimas como Mari Mar Blanco.

También tomaron parte en el homenaje el magistrado vasco Fernando Grande-Marlaska, que fue invitado para dar su visión sobre la aplicación de la legalidad frente a la violencia terrorista. En su discurso, la presidenta de la Fundación y viuda de Fernando Buesa, Natividad Rodríguez, señaló que pese a que desde hace dos años ya nadie teme por su vida, hoy hay que seguir reclamando la desaparición de ETA.

También consideró que se debe seguir exigiendo que «todos aquellos que apoyaron, justificaron o fueron cómplices de su violencia hagan una reflexión sincera», que reconozcan «que se equivocaron, que actuaron mal y que causaron un daño injusto e irreparable».

La viuda del político socialista asesinado por ETA recordó que el recurso a la violencia terrorista «no fue una opción inevitable por un supuesto conflicto, sino una trágica elección libre de quienes optaron por imponer sus ideas por la fuerza», y animó a las víctimas del terrorismo a «resistir en el papel» que les ha asignado la vida de «dar testimonio de lo ocurrido, para que el olvido sea imposible y se construya un relato verdadero».

La hija de Fernando Buesa y vicepresidenta de la Fundación que



Jorge Díez. Fernando Buesa.

lleva su nombre, Sara, también intervino e hizo un alegato en favor de la tolerancia como base para una convivencia armónica en la sociedad vasca.

Explicó que en el País Vasco, «la intolerancia y la falta de aceptación del pluralismo ha sido el germen del fanatismo asesino de ETA», cuya violencia tenía el objetivo de «imponer un proyecto político totalitario y excluyente». Y lamentó que la idea de que el proyecto de los totalitarios debía ser asumido por todos «por las buenas o por las malas» permanece «muy presente en algunos discursos de hoy en día». Asimismo recordó que la superación de las consecuencias de la violencia no será posible sin el respeto a los valores de «verdad, memoria y justicia».

«Necesitamos una memoria ética, un relato veraz, que permita conocer lo que realmente ha sucedido -ha sentenciado- y la memoria tiene que estar también vinculada a la justicia, evitando un olvido que lleve a la impunidad».

No obstante, señaló que la justicia, tal y como establecen las leyes,

también debe buscar la reinserción social de los presos, porque *"todo ser humano que ha actuado mal, ha pagado por ello y manifestó que su arrepentimiento y deseo de cambio merece una segunda oportunidad"*. El expresidente del PNV, Josu Jon Imaz, señaló en su intervención que ahora que el fin del terrorismo parece estar más cerca, es fundamental que no se cometa el error de olvidar lo que el azote del terrorismo ha provocado.

Además defendió la necesidad de diseñar un relato de *"deslegitimación"* del terrorismo, frente a los intentos de ETA para justificar su *"barbarie"*. Asimismo subrayó la necesidad de *"construir un proyecto de país integrador"*, que evite las estrategias de *"unos contra otros"* y el que se asegure *"el respeto a las instituciones"* y a las diferencias ideológicas entre unos y otros ciudadanos.

Miren Ortubay, por su parte, lamentó que la violencia haya envenenado a todos. ETA, señaló, *"nos ha robado parte de nuestra humanidad porque nos llegó a quitar la compasión"*. El dirigente de Comisiones Obreras, Santi Bengoa, otro de los patronos de la Fundación Buesa, constató la victoria de la democracia sobre ETA y lamentó los discursos *"populistas"* de sectores que quieren imponer la idea de la *"victoria"* de la banda.

Grande Marlaska asegura que el cese de ETA no ha implicado un parón de la Justicia

"El cese de ETA no ha implicado un parón en la Justicia. Se siguen celebrando juicios, existen entregas temporales, los procedimientos en marcha"



Díez Elorza y citó a las víctimas presentes. Afirmó que el éxito del fin de la actividad de ETA es de toda la sociedad, pero también de las fuerzas de seguridad, los fiscales y los jueces. *"Se ha vencido con la ley y con los valores democráticos"*.

El magistrado apostó por investigar los más de 300 crímenes de ETA que no se han esclarecido y advirtió que *"la impunidad será cero"*.

El juez hizo un recorrido, con inclusión de anécdotas, de la aplicación de la legalidad frente a la violencia terrorista y defendió el valor de las sentencias para fijar la memoria de los *"hechos ocurridos. Es un buen archivo histórico. No hay nada que inventar para elaborar un relato verdadero y muy poco parcial. Hay fallos condenatorios pero también absolutorios. En una democracia solo se condena si hay pruebas y todo el mundo ha tenido derecho a una defensa"*. También recordó al sargento de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea, asesinado en 2003, *"porque fue el primero que se dio cuenta que para derrotar a ETA había que vencer a su entorno. Posiblemente, por eso lo mataron"*.

Marlaska insistió en que las víctimas han sido las grandes olvidadas y la Justicia debe hacer también su *"mea culpa"* por no haber comprendido el gran drama que se originaba detrás de cada atentado. También se refirió al proceso de resocialización de los presos etarras y dijo que la ley les exige tres normas: el reconocimiento del daño causado, la voluntad de repararlo y la petición de perdón. *"Deben observarse si no queremos una sociedad patológica"*, advirtió.

siguen adelante porque la impunidad hubiera sido un obstáculo para el Estado de Derecho», aseguró el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, en el acto de recuerdo y homenaje del líder socialista Fernando Buesa y Jorge Díaz. Grande Marlaska tuvo palabras de cariño para las familias Buesa y

22 de febrero de 2014

OFRENDA FLORAL EN MEMORIA DE FERNANDO BUESA Y JORGE DÍEZ EN VITORIA

El sábado 22 de febrero, familiares, amigos y representantes institucionales y miembros de todos los partidos políticos, rindieron homenaje a Fernando Buesa y a Jorge Díez en el lugar en el que fueron asesinados por ETA el 22 de febrero de 2000, mediante la realización de una ofrenda floral.

Todos los años, con motivo del aniversario de sus asesinatos, los familiares llevan a cabo una ofrenda floral en su memoria en este rincón de la capital alavesa, donde se ha instalado un monolito en su memoria.



21 de febrero de 2014

EL PARLAMENTO VASCO RINDE HOMENAJE A FERNANDO BUESA Y A ENRIQUE CASAS

El viernes 21 de febrero, todos los partidos presentes en la Cámara vasca rindieron homenaje a Fernando Buesa y Enrique Casas y dará continuidad a estos actos en memoria de los parlamentarios asesinados.

Todos los partidos vascos con representación en el Parlamento vasco rindieron homenaje el viernes 21 de febrero con cinco minutos de silencio a los parlamentarios socialistas Enrique Casas y Fernando Buesa, asesinados en sendos atentados terroristas en 1984 y 2000.

Dos retratos en blanco y negro de ambos y un pebetero encendido presidieron el acto, de carácter silencioso, junto a la escultura *"Brújula de medianoche"*, ubicada en la entrada del Parlamento de Vitoria. El acto finalizó con aplausos y se llevó a cabo en virtud de una decisión acordada una semana antes por la Mesa de la Cámara según la cual se acordó que se iba a rendir homenaje a los cuatro parlamentarios asesinados por grupos terroristas antes de la celebración del pleno más próximo al aniversario de cada fallecimiento.

Así, unos minutos antes de que comenzara el pleno de control, el lehendakari, Iñigo Urkullu, junto a seis de sus consejeros, parlamentarios de todas las formaciones citadas y la presidenta de la Cámara, Barkartxo Tejería, acompañada por los miembros de la Mesa, protagonizaron el homenaje.

El silencio se apoderó del acceso principal al Parlamento Vasco.



Durante cinco minutos, las palabras que conforman los mensajes de los aforados en el atril desaparecieron para dejar paso a la memoria de dos dirigentes socialistas que perdieron sus vidas en sendos actos terroristas. En esta ocasión no hubo diferencias ni matices en el homenaje. Todos los partidos políticos presentes en el Parlamento

se dirigieron al acceso principal del edificio antes de ocupar sus respectivos escaños para acompañar y guardar cinco minutos de silencio ante los retratos de Buesa y Casas, asesinados por ETA y los Comandos Autónomos Anticapitalistas, respectivamente.

Entre los asistentes también estaban presentes los portavoces parlamentarios Joseba Egibar, Laura Mintegi, José Antonio Pastor y Julen Arzuaga, junto al secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, así como la presidenta del PP vasco y también parlamentaria, Arantza Quiroga, su portavoz en la Cámara, Borja Sémpér, y el único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro.

Enrique Casas, que fue secretario general del PSE de Gipuzkoa y encabezó la lista de los socialistas vascos a las elecciones autonómicas, fue asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas durante la campaña electoral vasca, el 23 de febrero de 1984.

El también dirigente socialista Fernando Buesa, exdiputado general de Araba, y exconsejero de educación del Gobierno vasco, murió en un atentado de ETA con coche bomba el 22 de febrero del año 2000. La explosión causó asimismo la muerte de su escolta, el ertzaintza Jorge Díez Elorza.

El Parlamento dará continuidad a estos homenajes, avalados por la Mesa a propuesta del PNV, con el recuerdo al dirigente de Herri Batasuna, Santiago Brouard, tiroteado por los GAL el 20 de noviembre de 1984, y a Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA el 23 de enero de 1995.



8 de marzo de 2014

HOMENAJE A ISAÍAS CARRASCO CON MOTIVO DEL VI ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

La hija de Isaías Carrasco exige un «examen de conciencia» a los presos de ETA, mientras que Patxi López insta a «ganar la batalla de la convivencia en libertad».

No estoy exigiendo arrepentimiento ni perdón, pero me falta que no haya un examen de conciencia, la voluntad de reparar el daño causado o de colaborar con la Justicia». Éste fue el mensaje que envió el sábado 8 de marzo a los presos de ETA y a los que exigen una flexibilización de la política penitenciaria Sandra Carrasco, hija del exconcejal del PSE de Mondragón asesinado hace seis años por la banda. Más de un centenar de personas recordaron a la víctima con una ofrenda floral frente a su casa, en el mismo lugar donde fue abatido a tiros por un etarra cuando se dirigía a su trabajo como cobrador en el peaje de la A-8 en Bergara. En el acto, estaban presentes cargos socialistas, con Patxi López a la cabeza, además de la familia y amigos del exedil. Muchos de ellos no pudieron reprimir las lágrimas.

Sandra Carrasco, que estaba acompañada por su madre, Marian Romero, y sus hermanos Ainara y Hodei, glosó emocionada la figura de su padre, al que calificó como «una buena persona». Aseguró que su progenitor «no estaría muy de acuerdo con la política que se está haciendo en la actualidad». Criticó que pese a cumplirse dos años del cese de la actividad armada por ETA, «hasta hace bien poco no se han empezado a ver sus pasos, y porque no le ha quedado más remedio». Con su habitual entereza y rotundidad en público, exigió a los etarras que dejen de dar «rodeos» y tengan «la valentía de disolverse de una vez por todas, para que podamos vivir en libertad».

Aunque admitió que hay que respetar las leyes y sentencias, aclaró que no compartía alguna de



ellas. Puso como ejemplo la derogación de la 'doctrina Parot', al considerar que «ha permitido excarcelar a muchos asesinos», y dijo entender las críticas de las familias de sus víctimas. Denunció, asimismo, los «pasos cuanto menos ridículos», de ETA, como «la falsa entrega de armas», en alusión al vídeo de etarras con verificadores internacionales.

«Meses teñidos de luto»

Antes que Sandra Carrasco intervino Patxi López, quien combinó el recuerdo a Isaías con sentimientos personales y duros mensajes políticos. Recordó que «febrero y marzo son para nosotros dos meses teñidos de negro y de luto», y mencionó los asesinatos de Casas, Múgica, Buesa, Elespe, Pagazaurtundua, Priede y Carrasco. Denunció que «mientras unos mataban, otros aplaudían y otros muchos apartaban la mirada para no ver lo que pasaba». Citó expresamente a la alcaldesa de Mondragón en 2008, Ino Galparsoro. «Se negó a condenar el asesinato, porque no era de los suyos», relató. No olvidó que durante la manifestación de repulsa «muchos vecinos cerraron las ventanas y sus corazones, y nos dieron



la espalda».

«Compañero Isaías, hemos vencido al terrorismo de ETA, pero ahora nos queda por ganar la batalla de la libertad, la convivencia y el relato de la verdad para que nunca más vuelva a suceder», proclamó convencido el exlehendakari. Censuró que la izquierda abertzale utilice la palabra democracia mientras se niega a «asumir su responsabilidad». «Hay gente que no quiere reconocer la verdad elemental del terrorismo, que el asesinato no tiene nunca justificación», recalcó. Advirtió, además, de que «dicen que hay muchos relatos, verdades o historias, pero en ninguno el que mataba podrá ser considerado un héroe, salva patrias o defensor de ideas legítimas». Ante los primeros pasos de ETA hacia su desarme, alertó de que «el presente pasa por su desaparición definitiva, sin escenificaciones ni teatros». Aseguró que los socialistas «no nos vamos a dejar engañar por juegos mediáticos y actos de propaganda». «En Euskadi vivimos personas con ideas e identidades diferentes, pero queremos vivir todos juntos», enfatizó.

Al acto asistieron, entre otros dirigentes, Rodolfo Ares, Iñaki Arriola, Miguel Buen y Txarli Prieto, además de parlamentarios, alcaldes y concejales. También acudió el diputado Odón Elorza, y un año más, a título personal, el miembro de EA y ahora concejal de Bildu en Mondragón, José Antonio Barriocanal. El presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y su esposa, Rafaela Romero, portavoz en las Juntas, no pudieron llegar al averiarse su coche a la altura de Bergara.

10 de marzo de 2014

INTERIOR ENTREGA 365 CONDECORACIONES A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO LA VÍSPERA DEL 11-M

El lunes 10 de marzo, el Ministerio del Interior entregó 365 condecoraciones de la Real Orden de Reconocimiento Civil a damnificados directos de I terrorismo y a familiares de quienes sufrieron el brutal atentado.

Fue el primer gran acto institucional que se celebró en recuerdo de las víctimas del 11-M en el décimo aniversario del atentado, y también el primer gran evento desde la tragedia en el que las asociaciones de víctimas estuvieron unidas.

El acto tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid y fue presidido por el titular del Departamento, Jorge Fernández Díaz, quien aseguró que las 192 personas que perdieron la vida en los trenes y la explosión del piso de Leganés donde se suicidaron los terroristas y los más de 2.000 heridos de aquellos atentados son «una representación de nuestra querida España». «Todos íbamos en esos cuatro trenes», señaló el ministro ante un abarrotado auditorio.



Fernández insistió en el «deber irrenunciable» de los españoles y los poderes públicos en que esas personas heridas y fallecidas se conviertan para siempre en parte de «nuestra memoria colectiva» y que ocupen «un lugar destacado en la historia» del país. «Los españoles hemos sufrido mucho y durante mucho tiempo por el terrorismo», recordó el titular de interior, quien reiteró que la memoria de las víctimas de esos ataques tiene que «permanecer indeleble entre nosotros». «Los que hoy nos acompañan -señaló- nos recuerdan día a día que es deber de los españoles, especialmente de sus gobernantes, mantener la memoria presente de todos ellos».

Además del titular de Interior, en la entrega de medallas participaron, entre otros, las presidentas de las asociaciones de víctimas Pilar Manjón (11-M) y Ángeles Pedraza (AVT). También estuvieron la máxima representante de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco; la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril; y los directores de la Policía y la Guardia Civil, Ignacio Cosidó y Arsenio Fernández de Mesa.



12 de marzo de 2014

CONCIERTO-HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL AUDITORIO NACIONAL

El miércoles 12 de marzo, el Auditorio Nacional rindió homenaje a las víctimas del terrorismo en un concierto presidido por la Reina, donde el décimo aniversario del 11-M estuvo muy presente. En su discurso, María del



Mar Blanco, pidió tenerlas en el recuerdo porque «olvidar es volver a morir».

EL PARLAMENTO VASCO GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO POR EL 11-M

El Parlamento vasco guardó el jueves 13 de marzo un minuto de silencio en memoria de las víctimas del 11-M. Los parlamentarios de EH Bildu rompieron el silencio para citar a viva voz desde sus escaños a Ángel Berrueta y Kontxi Sanchís. Berrueta, un panadero de Pamplona, fue asesinado por un policía nacional y su hijo tras negarse a poner un cartel que atribuía a ETA la masacre; Sanchís falleció de un infarto en una manifestación para repudiar ese crimen en Hernani.



11 de marzo de 2014

MISA-FUNERAL DE ESTADO EN RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M EN SU DÉCIMO ANIVERSARIO

Diez años después de los atentados del 11 de marzo de 2004, las víctimas aparecieron sus diferencias para recordar a los 192 fallecidos en los trenes de Madrid.

Casi un millar de personas se dieron cita el martes 11 de marzo en el funeral de Estado celebrado en la catedral de La Almudena y oficiado por el cardenal-arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, con la presencia de los Reyes, la princesa de Asturias, la infanta Elena y el presidente del Gobierno, así como más de un centenar de autoridades.

El funeral reunió a más de 800 personas entre instituciones del Estado (150); familias de víctimas y representantes de los servicios de emergencias (350), así como ciudadanos (más de 300). También consiguió reunir a todas las asociaciones de víctimas por primera vez desde 2007: Mari Mar Blanco, (Fundación Víctimas del Terrorismo), Pilar Manjón, (Asociación 11-m Afectados del Terrorismo), Ángeles Domínguez (Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M) y Ángeles Pedraza (Asociación Víctimas del Terrorismo). “¿Por qué murieron?”, se preguntó el cardenal Rouco en referencia a esas 191 personas fallecidas el 11 de marzo de 2004 en cuatro trenes que se dirigían a la estación de Atocha. “Murieron, sufrieron y sufrimos porque hubo alguien, hubo personas, que con una premeditación escalofriante estaban dispuestas a matar inocentes a fin de conseguir oscuros objetivos de poder; porque hay individuos y grupos, sin escrúpulo alguno, que desprecian el valor de la vida humana subordinándolo a la obtención de sus intereses económicos, sociales y políticos. ¡Siempre tan mezquinos! En una palabra, nunca faltan los Cainés dispuestos a matar a Abel.

La misa, a la que asistieron 40 obispos, contó también con la presencia de representantes de otras seis religiones (islam, ortodoxa, griega, ortodoxa rumana, episcopal española reformada, ortodoxa rusa y budista).

Fue un acto intenso pero no dramático como el funeral de Estado de hace diez años. No hubo lágrimas ni gestos desesperados. Seriedad y dignidad en un dolor



que remite con el tiempo, pero no olvida.

Un matrimonio que perdió a un hijo de 26 años y que prefirió no identificarse lo explicó así: “nuestra vida ha quedado marcada para siempre; las celebraciones familiares, todo. Ya nada es igual. Pero el tiempo ayuda, eso es indudable”.

En su homilía el cardenal Rouco Varela también miró hacia adelante. “Hay que estar abierto al perdón, siempre, aunque sólo se pueda hacer efectivo cuando se muestra arrepentimiento sincero por los crímenes cometidos y se reparan los daños causados”.

Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, explicó que la mayor parte de los socios de su agrupación están parados “y muchos sin cobrar siquiera los 400 euros”, por lo que reclamó un “plan de reinserción para las víctimas”, que se han visto afectadas por los recortes e las subvenciones. Manjón recordó además que para ella “el 11-M es cada día”.

La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, señaló que “la dignidad con las víctimas es un pilar fundamental que no debe olvidarse”.

Después de la misa homenaje, en el Senado, el presidente Mariano Rajoy se declaró “muy reconfortado” por haber celebrado “todos unidos” el décimo aniversario “de uno de los atentados más terribles que se ha producido en España”, y concluyó con la expresión de un deseo: “Ojalá nunca más tengamos que hablar de terrorismo en nuestro país ni en ningún sitio”.



HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M EN EL BOSQUE DE LOS AUSENTES

La Asociación Víctimas del Terrorismo, presidida por Ángeles Pedraza rindió homenaje el Bosque de los Ausentes del Retiro a las 12 del mediodía a las víctimas del 11-M.



Al acto, en el que también estaban Ángeles Domínguez y Mari Mar Blanco, asistieron numerosos políticos del Gobierno y del Partido Popular, como los ministros de Justicia e Interior, Alberto Ruiz Gallardón y Alberto

Fernández Díaz; la alcaldesa de Madrid, Ana Botella; la secretaria general del PP, M^a Dolores de Cospedal; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, o la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes. También estuvieron presentes la portavoz parlamentaria socialista Soraya Rodríguez y la líder del UPyD, Rosa Díez. Ángeles Pedraza, que había prometido “hablar como madre” dijo a los asistentes “Nosotros no podemos olvidar. Yo quiero hoy pedir justicia y pediros que acabéis con todos los terroristas. Sé que la economía es un pilar de la sociedad, pero también lo es la ética y la moral. Las víctimas necesitamos el espacio que merecemos, no nos dejéis sufrir en soledad. Algo no va bien si las víctimas nos sentimos solas. ¿Es justo que seamos un estorbo para algunos?”

Luchad con coraje contra todos los terrorismos”.

Trajeados de oscuro y con lazos negros en las solapas y en los vestidos, los políticos escucharon inmóviles a Pedraza, quien continuó diciendo: “Son 3.652 días sin dejar de luchar por la justicia para ellos, 522 semanas... Son más de mil vidas rotas por la sinrazón. Excepto

el 10 de noviembre, todos los días están marcados en negro en la historia del terrorismo en España”.

“Sí, sí, el 10 de noviembre es el único día que no ha habido asesinatos terroristas”, le dijo Pedraza a Gallardón, nada más bajar del estrado, ante la pregunta del ministro.

Para entonces ya iban camino del cielo 192 globos blancos y en los tres árboles que coronan El Bosque de los Ausentes había depositadas decenas de ramos de flores

colocados por algunas víctimas de los atentados de aquel día y por parte del público que se había concentrado ante la música de la viola y el piano. Era también difícil de ver a alguien que no se había colocado en la ropa un lacito negro, ni hombres ni mujeres que no tomaran una flor y la pusieran en alguno de los árboles de los ausentes.



HOMENAJE EN LA ESTACIÓN DE ATOCHA A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M

Al acto acudió el presidente de la Federación Autonómica de Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal.

Una hora después del acto de homenaje a las víctimas rendido por la AVT en el bosque de los Ausentes del Retiro madrileño, a las 13,00 horas del martes 11 de marzo, la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, presidida por Pilar Manjón, rindió homenaje, en la estación de Atocha, a las víctimas del 11-M con motivo de su décimo aniversario. Al acto asistieron el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, el secretario General del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, el sindicato de actores y los sindicatos CCOO y UGT.

Pilar Manjón señaló en su discurso: “Hoy estamos aquí todas las víctimas. Pedimos a los políticos que luchen contra todos los terrorismos”. “Os agradecemos que no os hayáis bajado de los trenes. Hoy es un día para recordar a los que murieron y para la unión de las víctimas. Hoy nos acompaña Joaquín Vidal, presidente de la Federación Autonómica de Víctimas del Terrorismo. Qué mejor muestra de Unidad que tener una víctima de ETA con nosotros en este escenario. Rechazamos cualquier terrorismo y estamos aquí contra el fanatismo religioso o ideológico”. Después del discurso, Pilar señaló que “a los que se bajaron de los trenes se les oye más que nosotros”. También recaló “todos somos inocentes, todos eran inocentes. Cualquiera de nosotros podía viajar en esos trenes y morir. Sólo el azar y los malditos asesinos son los responsables”.



Tres mujeres con un ramo de flores aguantaron las lágrimas hasta que sonó un nombre. Quizá uno de los suyos. Los fotógrafos las fotografiaron y una de ellas les increpó con los nervios de una intimidad a medias, ese conflicto entre el dolor interno y el homenaje público.

Jaime Cedrún, secretario general de CCOO en Madrid dijo en su

intervención que la verdad ya se conoce. “No hay otras teorías que la de la justicia. Le mando un mensaje a Ignacio González para que deje de hacer el ridículo avalando esas teorías”. Cedrún comenzó su discurso diciendo. “Estamos aquí contra el horror de la incompreensión hacia las víctimas, de los insultos, de los anónimos, de las amenazas y del poco respeto de algunos medios y políticos. Que este 11-M sea distinto a otros y que termine el hostigamiento a las víctimas. Que sea el de la unidad de las víctimas para que no haya víctimas de primera y víctimas de segunda”.



José Ricardo Martínez, secretario de UGT en Madrid señaló: “Nos repugna ver a políticos que tienen dudas. ¿Sobre que o quién? ¿De que la Justicia se ha definido? ¿De la verdad desgraciada. ¿No dudan, mienten. Y nosotros no podemos aceptar esa mentira”. “Nos preocupa que se esté reescribiendo la historia. Queremos que se escriba. Porque tenemos memoria. No olvidamos lo que hicimos cada uno y lo que dijimos”. Tras la lectura de los nombres de los fallecidos, con su edad y nacionalidad, el acto finalizó con una salva de aplausos.

COMUNICADO DEL EPPK

LOS PRESOS DE ETA ACATAN LAS LEYES Y SE RESIGNAN A SUS PENAS

Los reclusos reconocen «con toda sinceridad el sufrimiento causado» y abren la vía a la reinserción «individual» en un histórico comunicado que supone un punto de inflexión.

Reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y el daño multilateral generados» y «podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa se efectuase utilizando cauces legales, aun cuando ello implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena».

En un gesto histórico que dibujó un punto de inflexión en el camino abierto tras el cese de la actividad armada de ETA el 11 de octubre de 2011, el colectivo oficial de presos de la banda (EPPK) emitió el sábado 28 de diciembre de 2013 un comunicado en el que -contrariamente a los criterios tradicionales impuestos por la organización- abrió la puerta a negociar que «nuestra excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria» se efectúe «de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en un tiempo prudencial», asumiendo la legalidad vigente. El colectivo dejó traslucir así su resignación y constatación de que no habrá negociación alguna entre el Gobierno y la banda.

Las imágenes de presos etarras enfrentándose a los magistrados de la Audiencia Nacional, golpeando las 'peceras' en los juicios y negándose a tomar la palabra al «no reconocer» al tribunal pueden pasar a la historia si se asume la literalidad de la declaración de dos folios remitida a 'Gara' y 'Naiz. info' junto con un vídeo en el que la exdirigente etarra Marixol Iparragirre, 'Anboto' -uno de los seis portavoces del EPPK-, anunció este paso, en respuesta a las peticiones del 'foro social'.

El 27 de mayo, esta plataforma impulsada por Lokarri elaboró doce conclusiones para consolidar la paz en Euskadi. El quinto punto decía: «Recomendamos que el proceso de reintegración (de las personas presas y huidas) se realice por medio de cauces legales, aceptando que el mismo, siendo integral, se debe desarrollar de forma individualizada, escalonada y en tiempo prudencial. Este proceso requiere por parte de los presos mostrar su compromiso con el nuevo escenario de paz y renunciar a vías violentas. Además, en su caso, debe haber por su parte un reconocimiento del daño causado como consecuencia de su actuación».

Entonces, el colectivo de presos se comprometió a dar una respuesta y abrió un debate interno. La contestación llegó siete meses después utilizando los mismos términos del 'foro social', que el lunes 23 de diciembre de 2013 creó una comisión de seguimiento, entre otros fines, para reactivar sus postulados. La importancia del texto del EPPK radica en dos cuestiones. Por un lado, el reconocimiento del daño causado, paso que se les había exigido desde diferentes partidos y colectivos de víctimas para ser creíbles.

Aunque nunca había llegado tan lejos,



el 'frente de makos', conformado por los presos irreductibles que no se han acogido a ninguna medida de reinserción, si llegaron a declararse «conscientes del múltiple dolor generado» en una declaración leída en Gernika en junio de 2012. El lunes 28 de diciembre fueron más lejos al renunciar también «al método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos». Una forma de aludir sin citarlo al terrorismo de ETA durante 40 años.

Peticiones de traslado

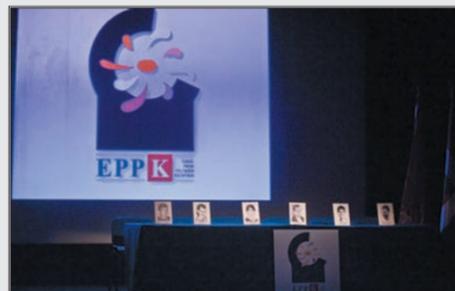
Pero, posiblemente, el gesto más significativo es la aceptación de la legalidad española y de sus beneficios penitenciarios, algo que hasta la fecha era un tabú y que ya había provocado la expulsión de la banda de los reclusos de la 'vía Nanclares'.

Ahora, los presos del EPPK -según el listado de Etxerat, hay alrededor de 520 reos vinculados a la banda entre España y Francia- recalcan que «compartimos que tanto la ley como su aplicación cumplen una función esencial de cara al futuro, ya que han de ser utilizados para fortalecer los pasos que hayan de darse». Dentro de un «proceso integral», se muestran dispuestos a estudiar que su «vuelta a casa» se efectúe «de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en un tiempo prudencial». Y asumen la «responsabilidad» de cada uno de ellos «dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes».

El viraje de 180 grados se ha producido de forma paulatina. El año pasado, el EPPK rechazó cualquier medida individual. Sin embargo, desde entonces han cambiado varias cosas. Para empezar, la banda ha constatado que el Gobierno de Rajoy no parece dispuesto a entablar diálogo alguno. Hace menos de dos semanas, el propio Amaldeo Otegi, encarcelado en Logroño, instaba a la izquierda abertzale a avanzar «de forma unilateral» al constatar que Madrid nunca tomará parte en una negociación a la vieja usanza.

A esto se ha añadido el impacto de la sentencia de Estrasburgo contra la 'doctrina Parot'. La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha permitido la excarcelación de decenas de presos con largas condenas, que fueron juzgados con el antiguo Código Penal. Sin embargo, es muy posible que su salida de la cárcel haya provocado una convulsión en el EPPK, ya que, frente a la liberación de aquéllos, los terroristas que continúan encarcelados según la nueva legislación se enfrentan a largas penas y a un horizonte sombrío en el que muchos no pisarán la calle hasta ser casi septuagenarios.

La estrategia del EPPK es comenzar a pedir en breve el traslado de los reos a cárceles vascas. Serán solicitudes individuales. Primero para los enfermos, luego para los que llevan más de 20 años en la cárcel y así sucesivamente. Falta por saber la respuesta que dará el Gobierno a su nueva actitud.



LOS DUROS DE ETA ASUME LA VÍA POLÍTICA DE LA IZQUIERDA ABERTZALE Y ALLANAN EN CAMINO AL DESARME DE ETA

Setenta exreclusos escenifican en Durango su apuesta por las vías pacíficas, en sintonía con la izquierda abertzale, ero sin abdicar de su pasado etarra.

Los presos de ETA excarcelados por la derogación de la doctrina Parot ratificaron el sábado 4 de enero en Durango (Bizkaia), en una exhibición de unidad con los 527 compañeros de terror que siguen en las cárceles españolas y francesas, que apoyan sin fisuras y sin críticas su último manifiesto y se suman a la renuncia de los encarcelados a utilizar en el futuro medios violentos, además de asumir la legalidad penitenciaria.

En el escenario del Kafe Antzokia de la localidad vizcaína, el antiguo matadero de la ciudad, los excarcelados avanzaron en la estrategia de acumular fuerzas en torno a los presos, el verdadero motor ahora de ETA, con más miembros dentro que fuera de las cárceles -apenas quedan medio centenar de terroristas escondidos-, pero sin cruzar la línea de condenar la violencia, pedir perdón o exigir a ETA el desarme y su disolución, como sí ha hecho la izquierda abertzale. El portavoz de Sortu, Fernando Barrena, dijo el 30 de diciembre pasado que el desarme de ETA es «fundamental para el proceso de paz».

Allí estaban, en el teatro convertido en sala de prensa, algunos de los más sanguinarios terroristas liberados. «Acumulamos cerca de 1.500 años de cárcel», leyó en castellano uno de los portavoces del colectivo, José Antonio López Ruiz, Kubati, -condenado él solo a 1.210 años, de los que cumplió 26 por 13 asesinatos-. A su espalda, con más de 150 crímenes en total, se mantuvieron firmes los exterroristas Francisco Javier Martínez Izagirre, Javi de Usansolo; Juan Manuel Píriz; Jesús María Zabarte, el canicero de Mondragón, o Miguel Turrientes, además de Inmaculada Pacho, junto a Isidro Garalde, Mamarru, integrante a mediados de los noventa de la cúpula de la banda.

Sin admitir preguntas, sin una lista de exterroristas presentes y sin facilitar información sobre la posible ausencia de Antonio



Troitiño, en castellano y euskera, los exetarras Itziar Martínez Sustatxa, Arantza Garbaio, Estanis Etxaburu, y el propio Kubati quisieron dejar claro desde la mesa presidencial: «Aceptamos toda nuestra responsabilidad en lo relativo a las consecuencias del conflicto».

Lejos de las tradicionales reivindicaciones de la banda, como la amnistía y la autodeterminación, que han mantenido inamovibles durante décadas, Kubati dio el apoyo colegiado a las medidas de reinserción individuales y «al derecho a decidir que tiene el pueblo vasco», y que situó en el centro de la futura solución política. «Queremos subrayar nuestra total conformidad con las decisiones adoptadas» por el colectivo de presos EPPK, y «con el escenario político abierto por la izquierda abertzale». El mismo terrorista que en 1985 asesinó de dos disparos a su excompañera Yoyes -María Dolores González Katarain, por aceptar medidas de reinserción- dio por finiquitado el ciclo de la violencia y, aunque sin citarla, aprobó la denominada vía Nanclares como mecanismo individual para recortar penas y progresar de grado. Además,

proclamó la «total conformidad con las decisiones adoptadas» por el colectivo de presos EPPK y «con el escenario político abierto por la izquierda abertzale».

El de este sábado fue otro capítulo en el guion de la derrota de ETA. Un proceso que a nivel interno comenzó a asumirse en noviembre de 2011, cuando ETA anunció su decisión de abandonar las armas, aunque solo hace siete meses el Foro Social de Euskal Herria fueron más allá y emplazaron a los presos a asumir la legalidad penitenciaria para desbloquear la situación en las cárceles.

Conscientes de que el Gobierno de Mariano Rajoy no estaba dispuesto a dar ningún paso, ni acercamiento de presos a las cárceles vascas ni mejoras de grado, han acabado claudicando.

Fuentes de la lucha antiterrorista interpretan que al apostar de forma pública por un camino al margen de la violencia, y al eliminar de su diccionario utopías como la amnistía o la autodeterminación como condición para iniciar el diálogo que pedían, ETA «se libera del lastre de reivindicaciones imposibles y facilita la decisión unilateral del desarme».

Kubati reconoció el daño causado por las acciones de ETA y anunció que «actuaremos con responsabilidad».

El único incidente se produjo cuando un periodista de Intereconomía exigió a los exreclusos que pidieran perdón y los organizadores del acto le invitaron a que se marchara de la sala.



EL GOBIERNO VASCO INSTA A LOS EXPRESOS A PEDIR EL DESARME Y LAS VÍCTIMAS HABLAN DE "HUMILLACIÓN"

El Gobierno vasco consideró que el acto celebrado en Durango con expresos de ETA como protagonistas responde a "una escenificación" para una estrategia ya conocida desde hace años. Ahora bien, advirtió que "no es suficiente mencionar el sufrimiento", sino que "es necesario reconocer el daño causado y apelar al desarme inmediato de ETA".

A través de un comunicado, el Ejecutivo de Vitoria valoró como un "paso importante" el echo de que los exreclusos de la banda hayan ratificado el comunicado del EPPK, en el que se reconoce el sufrimiento causado y se acepta la legalidad penitenciaria española para lograr excarcelaciones de forma "escalonada" e "individual". Sin embargo, desde Lehendakaritza se lamentó que "a día de hoy no se ha concretado nada de lo ya conocido". El Gobierno vasco insistió en que "es tiempo de pasar de las palabras a los hechos con pasos continuados. "No sólo hay que hablar retóricamente de las consecuencias del conflicto" ni tam-

poco confundir "un proceso de pacificación y normalización de la convivencia con lo que permanentemente identificar como un "proceso democrático", reiteraron, en una apelación que también realizaron PSE y PP vasco.

Especialmente críticos con la comparecencia de Durango fueron los presidentes de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y de Dignidad y Justicia, que calificaron el acto de "bochornoso" y "humillación" para los damnificados. Ambos colectivos solicitaron sin éxito la ilegalización del mismo. "Hoy es el día de la indecencia, han ganados los terroristas", censuró Ángeles Pedraza. La máxima representante de la AVT lamentó que "la justicia no está con las víctimas", al tiempo que señaló que la comparecencia de los expresos fue "la mayor vergüenza ocurrida en España". Por su parte, Daniel Portero advirtió de que el acto de los expresos "supone que la impunidad de ETA es absoluta y que la Audiencia Nacional lo permite".

ETA RATIFICA SU CESE Y LOS PARTIDOS PIDEN SU DESARME

El lehendakari y la mayoría de los partidos vascos acogieron con indiferencia la comunicación interna de ETA a su comité ejecutivo, difundido por el diario Gara el domingo 19 de enero, en que reafirmaba de forma aplastante el abandono de la violencia.



Valoraciones políticas

En una entrada en Facebook, Iñigo Urkullu consideró que reafirmarse en decisiones como el fin de la violencia, en su momento señaladas como irreversibles, "obedecerá a razones propias, pero no supone ningún paso adelante". Por ello, pidió a la organización que vaya más allá y se desarme sin demora, reconozca el daño causado y "no solo el sufrimiento como consecuencia del conflicto", y se disuelva. En idénticos términos se pronunció el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, en una nota de prensa en la que aseguró que "no es el anuncio que todos esperamos". Tras oponerse a que ETA realice análisis políticos, coincidió con Urkullu en pedir el desarme unilateral. "Mejor hoy que mañana", remachó. En ese sentido, recordó que PNV y Sortu se manifestaron por la paz en Bilbao, y que ese lema no sería compatible con la pervivencia de una organización armada. También pidió que reconozca el daño causado y pida perdón a las víctimas.

El secretario de Organización y Coordinación del PSE, Rodolfo Ares, por su parte, dejó ver en declaraciones a Europa Press que el comunicado sería una obviedad y que "no recoge ninguna aportación". "Solo faltaría que no ratificara el abandono de la violencia", señaló. En línea con las últimas declaraciones del PP, tampoco el presidente popular en Gipuzkoa, Borja Sémper, quiso dar publicidad al texto, e insistió en que solo le interesa el comunicado de disolución. EH Bildu fue la única fuerza que concedió relevancia al documento. Por boca de Pello Urizar, opinó que ETA ha dado un paso más y que, aunque debería dar otros, los partidos tendrían que empujar a favor de ese escenario. Un matiz diferente aportó en declaraciones a Efe el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, quien, aun considerando positivo el texto, pidió a ETA que se convierta en una organización civil y desarmada para pervivir de esa forma hasta que se solucione la situación de los presos. Por otra parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo en una entrevista publicada en ABC que está seguro de que el PNV persigue la disolución de ETA, pero que Madrid no comparte su vía. "Nosotros queremos llegar hasta el final de ETA por la línea recta", zanjó.

Por una parte, el texto corroboraba que el cese de la violencia es firme, ya que más del 80% de los miembros de la organización avala las decisiones adoptadas por el MLNV desde 2009, mientras el porcentaje de negativas se limita al 4,2%. Cuando apenas habían pasado unas semanas del rebrote de la kale borroka, esa cifra alejaba la posibilidad de una vuelta atrás -que también descarta incluso el Ministerio del Interior- o de una escisión que, a la vista de los datos, de producirse tendría poco peso además de escaso recorrido, ya que se toparía con la oposición de Sortu. Asimismo, ese documento se suma al comunicado del colectivo de presos, que también renunciaba a los métodos empleados en el pasado. Sin embargo, después de que los reclusos apostaran por acatar la legalidad y solicitar beneficios penitenciarios con peticiones individuales, desde distintos ámbitos comenzó a especularse con que ETA acompañara ese paso con un gesto a favor de su desarme. Por ello, y porque en teoría el debate sobre el final de la violencia estaría superado desde el comunicado de cese definitivo de octubre de 2011, y en ese sentido el último texto no sería novedoso, al lehendakari y a los partidos les supo a poco la reflexión de ETA y le exigieron que se desarme y que reconozca el daño causado. El texto, que en cualquier caso no es un comunicado al uso sino un documento dirigido a la militancia de la organización en diciembre, lo firma el Comité Ejecutivo de la organización, y según Gara habría sido utilizado por medios de comunicación de Madrid para lanzar la idea de que ETA pretende autoasignarse la orientación política de la izquierda abertzale, por hacer referencia, entre otras cuestiones, al camino hacia la independencia. No obstante, se matiza que la organización habría precisado que el protagonismo corresponde a la ciudadanía. Los partidos rechazaron el texto por no avanzar en el desarme.

EL GOBIERNO VASCO ABRE LA PUERTA A TENER CONTACTOS CON ETA PARA SU DESARME

Erkoreka asegura que la banda debería expresar primero de forma "inequívoca, clara y rotunda" su voluntad de entregar los arsenales.



El Gobierno vasco dejó el martes 11 de febrero la puerta abierta a mantener contactos con ETA para favorecer su desarme. Aunque no contempla esa posibilidad a corto plazo, Josu Erkoreka reconoció que el Gobierno vasco, a diferencia del central, no descarta entablar un diálogo con ETA si se dan las condiciones.

Erkoreka hizo estas declaraciones en la rueda de prensa de todos los martes tras el Consejo de Gobierno. A preguntas de los periodistas que le interrogaron sobre la posibilidad de que ETA impulse una "vía vasca" para la entrega de sus arsenales, el portavoz de Lehendakaritza reconoció que el desarme de la banda es "una pieza imprescindible e indispensable" para asentar la paz y la convivencia en Euskadi. Añadió que el Gobierno vasco "hará lo que tenga que hacer sin renunciar a ninguna oportunidad que se presente".

"No estamos dispuestos a dejar pasar ninguna oportunidad que se pueda presentar para consolidar el fin de la violencia, la paz y la convivencia", insistió. Los argumentos empleados por Erkoreka no significan que el Gobierno vasco haya establecido o tenga previsto establecer un diálogo con ETA, como precisaron horas después los responsables de comunicación de Lakua. El propio portavoz precisó que cualquier "hipotético" contacto con la organización armada debería partir de una premisa previa: la banda tendría que expresar de forma "inequívoca, clara y rotunda" su voluntad de destruir sus arsenales. "Cuando ETA expresa rotunda e inequívocamente esa voluntad, hay procedimientos y mecanismos. A partir de ahí se pondrá en marcha lo que se tenga que poner en marcha", señaló Erkoreka.

El Gobierno vasco marca así distancias con el Ejecutivo central. El PP ha venido reiterando, desde su llegada a la Moncloa, que no está dispuesto a entablar ningún tipo de conversación con ETA, ya sea por la vía directa o indirecta,

por entender que "no se debe nada" a los terroristas y que ha de mantenerse firme hasta que la organización armada se disuelva y ponga a sus miembros a disposición de la Justicia para que cumplan sus condenas y colaboren con el esclarecimiento de los casos pendientes de resolución.

Erkoreka rebatió las críticas que Arantza Quiroga había realizado al asegurar que "un gobierno

democrático no puede negociar con una banda terrorista", preguntándose si con esa afirmación Quiroga "cuestiona" las "convicciones democráticas" de presidentes del Gobierno como Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Todos ellos, en algún momento de su mandato abrieron vías de contacto con la cúpula etarra, entablaron negociaciones y sondearon la posibilidad de pactar con los terroristas el final de la violencia.

Señaló que, en todo caso, el Gobierno vasco mantiene como principal exigencia a ETA que inicie cuanto antes el proceso de desarme "ordenado y verificado" porque "lo demanda también la sociedad vasca". Y restó importancia a quién debe ejercer la labor de supervisión de esa entrega de armas, bien recaiga esa tarea en la Comisión Internacional de Verificación (CIV) o en otro organismo internacional. "El desarme debe hacerse con o sin verificadores. Es algo que el Gobierno vasco exige rotundamente y sin ningún tipo de matiz desde hace mucho tiempo".

Erkoreka advirtió también, que todos los movimientos que el gabinete jeltzale vaya a dar en este sentido estarán presididos por los cinco principios que Urkullu considera fundamentales para asentar la convivencia en Euskadi. Además del desarme inmediato, esa guía incluye el reconocimiento del daño injusto causado por parte de ETA, la reparación a las víctimas, la flexibilización de la política penitenciaria y la apuesta por un consenso entre las cuatro grandes formaciones políticas vascas, en alusión al PNV, PSE, PP y Sortu.

IBARRA VINCULA EL FUTURO DE LOS PRESOS A LA DISOLUCIÓN DE ETA

Mientras el proceso de paz sigue a expensas de que ETA anuncie su disolución y, por consiguiente, su desarme; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, reconoció el miércoles 12 de febrero que, una vez alcanzado ese punto, el tratamiento penitenciario de los presos que están cumpliendo pena por delitos de terrorismo se vería lógicamente "afectado" si la banda dejara de existir. Cuestionado respecto a si los jueces deberían actuar entonces con mayor flexibilidad en la aplicación de la ley, precisó que en la administración de justicia de Euskadi "la juez de Vigilancia Penitenciaria en este momento no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a la aplicación de esta propuesta de modificación de la política penitenciaria".

Ibarra, voz de peso en la judicatura, ya se ha referido en más de una ocasión a que medidas como el acercamiento de los reclusos y la concesión del tercer grado caben "perfectamente" en la actual legislación, ya que permiten "lecturas más flexibles". En este contexto, consideró que el reglamento penitenciario es "un marco normativo suficiente" para que la ejecución de penas por terrorismo "pueda atender al principio primero y básico de que las responsabilidades son individuales", por lo que "a las responsabilidades individuales les corresponde un tratamiento penitenciario también individualizado, no de grupo"; y, asimismo, al segundo principio básico de que "la finalidad de la pena es la reinserción".

LA COMISIÓN DEL FORO SOCIAL QUIERE HABLAR CON ETA, CON LOS PARTIDOS Y CON LAS VÍCTIMAS

El grupo de ocho personalidades vascas y francesas muestra su disposición a favorecer "nuevos pasos" en el proceso de paz.

La comisión del "foro social", que inició su andadura oficial el 23 de diciembre y que está compuesta por ocho personalidades de Euskadi y Francia, anunció el miércoles 12 de febrero su disposición a entablar contactos con ETA, con los partidos políticos y con las asociaciones de víctimas. El grupo responde de esta manera al comunicado que ETA realizó el domingo 19 de enero y a través del cual se mostraba dispuesta a abrir una "vía vasca" para su desarme e instaba al lehendakari, Iñigo Urkullu, a impulsar iniciativas para favorecer el proceso de paz. Los expertos que componen esta comisión emitieron un breve comunicado en el que confiesan que quieren entablar un diálogo con ETA para "avanzar en el camino propuesto" por el "foro social" en las recomendaciones que hicieron públicas a finales de mayo del pasado año. Aquel documento, de doce puntos, apostaba entre otras cosas porque los presos renunciaran a la amnistía y abrieran vías judiciales de forma individual para lograr beneficios penitenciarios y favorecer su progresiva excarcelación. Y a ETA le conminaba a poner en marcha un proceso de desarme "controlado, ordenado y consensuado" y que fuera verificado por un organismo independiente. Tanto el EPPK, el colectivo oficial de los presos, como la cúpula



terrorista han aceptado aquellas doce recomendaciones y las consideran un "punto de partida" con el que empezar a trabajar. En este escenario, la comisión ha anunciado que iniciará contactos para "contrastar el contenido" de aquellas recomendaciones y que colaborará "para impulsar nuevos pasos que ayuden a que el proceso de paz avance y se consolide". Una decisión que el grupo de

interlocución adoptó el lunes de diciembre y que significa que la comisión va a cursar invitación tanto a la banda terrorista como a los partidos vascos y a las asociaciones de víctimas para mantener reuniones y conocer los diferentes puntos de vista. En este sentido, los expertos reconocen que el 27 de diciembre mantuvieron una reunión con el grupo de interlocutores del EPPK, entre los que figuraba la abogada Arantza Zulueta. Aquel encuentro se produjo un día antes de que los reclusos de ETA hicieran público un comunicado, leído por Marixol Iparragirre, "Anboto2, en el que aceptaban las leyes españolas para impulsar su salida de prisión. La comisión señala que seguirá dialogando con los representantes de los presos a pesar de que algunos de esos interlocutores estén encarcelados a consecuencia de la operación de la Guardia Civil el 8 de enero. La nota emitida por el grupo de expertos asegura que mantienen su compromiso de abrir un "diálogo constructivo" para facilitar la "reintegración" de los reclusos.

LA FUNDACIÓN BUESA CRITICA QUE LOS PARTIDOS NO HAYAN FORZADO A SORTU A ASUMIR EL SUELO ÉTICO

La Fundación Fernando Buesa ha pedido que no se permita a Sortu establecer "un veto de hecho" a la hora de avanzar en un consenso basado en valores democráticos.

Aboga también por profundizar en el acuerdo alcanzado la pasada legislatura entre los grupos que acepten su contenido. La entidad que recuerda la memoria del que fuera vicelehendakari y dirigente socialista considera que la negativa de Sortu a no aceptar el denominado "suelo ético" pactado por el resto de fuerzas políticas la pasada legislatura, "es la más clara y la más grave manifestación" de la falta de consenso. En esta situación, la Fundación Fernando Buesa entiende que lo más coherente es



que los firmantes del "suelo ético" hubieran exigido a la formación de la izquierda abertzale su aceptación. "Pero no ha sido así", manifestaron sus dirigentes mediante la publicación de un comunicado. La fundación considera "inaceptable" que los consensos básicos sobre valores democráticos "se rompan cuando llegan al Parlamento los que han conculcado dichos valores en las últimas décadas".

DENUNCIAN QUE INTERIOR NO COMPLETA LAS AYUDAS A LAS VÍCTIMAS DE LOS GAL Y LA EXTREMA DERECHA

Una decena de víctimas de los GAL, el Batallón Vasco Español (BVE) y la Triple han visto en el último año y medio cómo el Ministerio de Interior se ha negado a ampliar sus respectivas indemnizaciones en cumplimiento de la nueva ley estatal sobre este colectivo de damnificados.

Así lo han constatado en la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco. El Gobierno central se ampara en el convenio europeo en materia de concesión de ayudas para denegar dichas partidas. La normativa internacional recoge que podrán no ser indemnizadas aquellas personas que tuvieran vinculación con "organizaciones que perpetren delitos violentos". En este caso, el Ejecutivo central alega una supuesta relación de los afectados con ETA o su "entorno".

ETA COMIENZA EL LENTO PROCESO DE SU DESARME

ETA deja fuera de su una parte mínima de sus armas ante la Comisión Internacional de Verificación, que considera "creíble" el gesto, que debe ser previo al desarme total.

ETA inició el viernes 21 de febrero el proceso para su desarme y consolidó su progresivo desmantelamiento como organización armada a través de dos imágenes con mucha carga simbólica. El líder de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), Ram Manikkalingam, exhibió en el hotel Carlton de Bilbao un documento en el que se recoge un inventario del material precintado por la banda armada. El documento culmina con la firma del grupo de verificadores y el sello oficial de ETA. La otra imagen llegó -poco antes de las tres de la tarde y casi al mismo tiempo que la comparecencia del grupo de verificación- a través de la televisión pública británica, la BBC, que emitió un vídeo en el que dos miembros de la banda encapuchados -según la Policía española, uno sería David Pla y el otro Xabier Goienetxea- entregaban el documento firmado a Manikkalingam y a Ronnie Kasrils, otro de los seis integrantes del CIV. Todo ello con el Guernica de Picasso como testigo.

Según fuentes solventes, el desarme total se podría completar en un plazo no superior a un año. ETA tiene tomada la decisión de desprenderse de manera unilateral de todo su arsenal, en coherencia con su decisión de abandonar de manera definitiva la actividad armada. Su disolución es otro asunto. La escenificación de la "entrega" realizada el viernes 21 de febrero, o más propiamente dicho, la disposición a no usar esas armas, ya que los terroristas se las llevaron en una caja de cartón, es el prólogo a esta vía y tuvo al equipo de Manikkalingam como principal protagonista.

Según consta en el inventario, la Comisión que lidera ha constatado que ETA ha procedido a precintado un total de 16,4 kilos de explosivos, cuatro armas, 300 balas y dos granadas, además de temporizadores y cordón detonante. Entre los explosivos que se han dejado fuera de uso operativo se encuentran 4,5 kilos de pentrita, ocho kilos de clorata y sodio, otros cuatro kilos de clorato de



sodio molido y diez gramos de nitromanita. El inventario también incluye 190 metros de cordón detonante y dos temporizadores, 300 balas, un fusil, un subfusil y dos revólveres.

Estas son las armas, munición y explosivos que han quedado fuera de uso operativo. Los verificadores aseguraron desconocer el armamento que ha quedado al margen de este listado pendiente de una futura entrega, si se produce.

El vídeo no respondió a las expectativas de quienes esperaban un gesto de mayor calado en términos cuantitativos. En una mesa no muy amplia entraba todo el material entregado. Un gesto muy pequeño si de lo que se trata es de ganar credibilidad y confianza ante los agentes políticos e institucionales y sobre todo ante la sociedad, más aún en un mundo en el que la imagen llega a todos los rincones. "No me parece una cantidad pequeña si tenemos en cuenta que han sido entregadas en una situación de clandestinidad y, por tanto, con muchos obstáculos para fiarse", precisó Manikkalingam. En este sentido, subrayó que ETA "se reunió con nosotros tomando muchos riesgos y no los hubieran asumido si no estuvieran comprometidos en continuar con el desarme".

Durante la multitudinaria comparecencia, Manikkalingam reveló que en abril de 2013 ETA solicitó a los verificadores que incluyeran en su mandato "la verificación de un proceso unilateral de sellado y puesta fuera de uso operativo" del armamento. La Comisión de Verificación acep-

tó la solicitud y en septiembre de ese año la banda les transmitió "que estaba dispuesta a dar el primer paso en este proceso". Según precisaron, el encuentro entre los miembros de ETA y los dos verificadores se llevó a cabo en enero de este año en un escenario que Manikkalingam no quiso desvelar.

El jefe del equipo de verificadores señaló que confía en que este paso

sea "creíble y significativo" de cara a desmantelar todo el arsenal de la banda. "Desde nuestra experiencia en otros procesos, inventariar y poner fuera de uso operativo las armas, munición y explosivos es un paso necesario previo al desarme completo", apostilló Manikkalingam.

Admitió que siguen sin poder hablar con los Gobiernos español y francés, lo que aboca a una situación muy complicada para poder llevar a cabo su misión. "Si el Gobierno español y el francés no cooperan, técnicamente sería muy difícil completar el desarme", señaló el jefe de los verificadores. Un material tan reducido resulta factible de precintado y manejar para la Comisión, a pesar de los riesgos que comporta. "No queremos repetir la verificación que tuvimos que hacer, no fue nada fácil. Sería bastante más difícil hacerlo con cantidades grandes de armamento", explicó. Manikkalingam pone el dedo en la llaga.

Con la estructura que posee el CIV y los apoyos actuales llega hasta donde llega y puede hacerse cargo de un material limitado, pero el sellado y la posterior verificación de todo el material de ETA restante requiere de una mayor intencionalidad y una mayor cobertura legal. De lo contrario, los riesgos de la tutela del armamento serían muy severos. Por todo ello, Manikkalingam ofrece su colaboración para un eventual desarme completo, pero subraya que si Madrid y París mostraran otra disposición, "se haría mucho más rápido y fácil". En este sentido, recordó que lo más importante es que los Gobiernos de Rajoy y Hollande "permitan el avance del proceso". En concreto, destacó que esa cooperación podría traducirse en ayuda técnica pero también "sería muy importante que no se hicieran detenciones" de miembros de ETA y alertó del riesgo de un "final desordenado" de la banda. "En este caso no sabes dónde pueden acabar las armas".

EL MINISTRO DE INTERIOR DESACREDITA A LOS VERIFICADORES AUNQUE VE "POSITIVO" EL GESTO

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante el anuncio de los verificadores señaló que el único comunicado de ETA que vale es el de su disolución y "con la Guardia Civil y la Policía basta" para certificar el desarme de la organización armada, aunque, eso sí, "es evidente que todo lo que sea avanzar en el camino de la desaparición de ETA es positivo, y todo lo que sea entregar las armas es positivo".

Jorge Fernández Díaz tomó la palabra antes de que el grupo liderado por Ram Manikkalingam presentara su informe el viernes 21 de febrero en Bilbao. Poco después de las 13.00 horas -cuando las citas del Ejecutivo con la prensa tras el Consejo de Ministros acostumbran a empezar entre las 13.45 y las 14.30 horas-, Fernández Díaz se adelantó a lo que podía ocurrir en Bilbao y señaló que "no son los verificadores los que derrotaron a ETA. No nos hace falta, con todos los respetos, porque los mejores son la Guardia Civil y la Policía". A su entender, a la organización armada le "bastaría con ofrecer la geolocalización y señalar las coordenadas de sus depósitos de armas", algo que el ministro definió como "muy fácil" y compatible con cualquier avance que sea "lógicamente positivo".

Fernández Díaz recordó que el Gobierno español "no está en tregua ni se adapta a esa teatralización". Basó esta postura en las 99 detenciones realizadas desde que Mariano Rajoy accedió a La Moncloa como presidente en diciembre de 2011: "Parece que la sociedad tuviera que ir dándoles encima las gracias por que no nos someten al yugo terrorista".



Covite pide la comparecencia de los verificadores ante la Audiencia Nacional

Covite, reclamó el viernes 21 de febrero a la Audiencia Nacional que cite "a declarar como testigos a los autodenominados verificadores internacionales después de que estos hayan acreditado que se han reunido con terroristas de ETA requeridos

por la Justicia". Más aún y "en conversaciones con Covite", Tras la comparecencia del grupo liderado por Manikkalingam y el posterior vídeo emitido a través de la BBC, "Covite se puso en contacto con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que trasladó al colectivo la conveniencia de pedir cuanto antes que los mediadores internacionales sean citados como testigos a fin de que pongan en conocimiento de las autoridades toda la información que tengan sobre terroristas huidos de la justicia".

En este sentido, la asociación liderada por Consuelo Ordóñez, remitió "una petición formal en la que solicita que requiera urgentemente a Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils, Chris Maccabe, Satish Nambiar, Aracelly Santana y Fleur Ravensbergen".

El objetivo que persigue "es que aporten información sobre el número de terroristas huidos con los que se han reunido, sus identidades si las conocen, los lugares en los que se reunieron con ellos y toda la información que resulte útil para que las Fuerzas de Seguridad del Estado detengan a criminales requeridos por las autoridades".

URKULLU RECONOCE EL "PASO" HACIA EL "DESARME COMPLETO"

Se compromete a apoyar la gestiones que seguirán realizando los verificadores.

Ignacio Urkullu comenzó la viernes 21 de febrero participando en el homenaje a los políticos socialistas asesinados por ETA Fernando Buesa y Enrique Casas, continuó contestando a la oposición en el Parlamento Vasco sobre la organización armada y cerró su agenda pública a primera hora de la tarde valorando el anuncio dado a conocer por la Comisión Internacional de Verificación (CIV). En esta declaración, el lehendakari reconoció el "paso dado" por ETA hacia el "desarme completo", pese a ser "pequeño" y "no suficiente," y se mostró dispuesto a "seguir colaborando" con los verificadores internacionales en los próximos pasos que den hacia ese desarme total.

"Es un pequeño paso, no suficiente, pero cubre una primera y necesaria etapa para el desarme completo", declaró durante la lectura de una breve declaración. Tras dar por bueno el hecho de que "ETA ha empezado a desarmarse de manera unilateral e incondicional", incidió en que se trata de "una etapa de un recorrido sin vuelta a atrás", que a su juicio "debe tener un horizonte próximo", el del "desarme total y absoluto". En línea con una de las exigencias que reitera en sus discursos sobre el final de ETA, Urkullu reclamó que en "ese recorrido" hacia la disolución "hay



un hito importante", como así definió al "reconocimiento" por parte de la organización armada del "daño injusto causado".

Aunque estaba prevista la comparecencia de Josu Erkoreka para valorar el anuncio del CIV, finalmente fue el propio Urkullu quien salió a declarar para fijar la posición del Ejecutivo. Lo hizo respondiendo al emplazamiento que le había trasladado apenas unas horas antes el

grupo de Ram Manikkalingam en el encuentro que mantuvieron en Bilbao, para que fuera el propio lehendakari quien respaldara la gestión del grupo de Amsterdam.

El lehendakari reconoció explícitamente el trabajo de los verificadores. El Gobierno vasco considera "fiable y segura" la intermediación de la CIV, según precisó Urkullu, para "garantizar el desarme total e irreversible de ETA". No conforme con eso, el lehendakari mostró su disposición a que el Ejecutivo vasco siga "colaborando en estas claves": "El Gobierno vasco seguirá colaborando con la comisión y le prestará apoyo y respaldo en la gestión de los próximos pasos", concluyó.

Unas horas antes, en el Parlamento, cuando UPyD le preguntó si descarta abrir un canal de diálogo con ETA, afirmó que Lakua va a "aprovechar todas las oportunidades" que se le presenten para "lograr un final ordenado" de la banda.

EL IRA TAMBIÉN COMENZÓ SU DESARME ANUNCIANDO EL SELLADO DE SUS DEPÓSITOS DE ARMAS

EL mecanismo emprendido por ETA para desprenderse de su armamento guarda similitudes con el empleado en su día por el IRA para efectuar el mismo proceso.

La organización norirlandesa recurrió también a observadores internacionales para que avalaran su estrategia de punto y final, anunció el sellado de depósitos, y un equipo de verificadores supervisó la eliminación de sus armas, desprendiéndose la banda progresivamente de todos sus almacenes de explosivos. Esta fórmula encabezó un trayecto que se prolongó desde el 10 de abril de 1998, con la firma de los Acuerdos de Viernes Santo, hasta 2005, cuando renunció a la violencia y completó su desarme. Fue en mayo de 2000 cuando el IRA anunció su intención de entregar el arsenal que almacenaba de forma "completa y verificable", a través de la denominada Comisión Internacional Independiente de Desarme, similar al Comité Internacional de Verificación que el viernes 21 de febrero visitó nuevamente Euskadi para corroborar las intenciones de ETA. Aquel ente, integrado en su mayoría por militares e impulsado por quien fue presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, acreditó hasta cuatro entregas de armas: el 23 de octubre de 2001, el 8 de abril de 2002, el 21 de octubre de 2003 y el 26 de septiembre de 2005. Cuatro años en los que se fraguó el desarme de los principales grupos paramilitares, no exentos de tensión, especialmente porque la comisión trabajaba en secreto y no se hizo fotografía o grabación alguna de los actos de entrega y destrucción de armas hasta el momento cumbre, ni un listado público del armamento entregado, precisamente para evi-



tar que algunos de los grupos armados tuvieran la sensación de derrota o de humillación. ETA, por su lado, parece haber recurrido a una escenografía en clave interna, dirigida a evitar el riesgo de disidencias y escisiones.

El reglamento de la comisión verificadora en el proceso irlandés era muy explícito en la forma de proceder, pero estricto en su confidencialidad. Y eso que en octubre de 2003 el primer ministro británico, Tony Blair, estuvo a punto de publicar los detalles del desarme del IRA, ante el descontento de los unionistas protestantes. En enero de 2004 se creó la Independent Monitoring Comision (IMC), por un acuerdo entre los dos gobiernos, con el objetivo de monitorizar la no utilización de la violencia en la vida política de Irlanda del Norte. En septiembre de 2005, dos clérigos locales, el protestante y expresidente metodista Harold Good y el católico Alec Reid, certificaron que el IRA se había desmovilizado. Después de un conflicto que en tres décadas provocó la muerte de 3.526 personas, el desarme definitivo llegó después de que la banda renunciara a la lucha armada y aceptara la vía política, el 28 de julio de 2005, para conseguir su propósito de unificar la isla de Irlanda. Las autoridades pertinentes inspeccionaron y destruyeron los arsenales para finalmente

fundirlos.

El IRA entregó centenares de rifles automáticos, un lanzador de misiles tierra-aire y tres toneladas de explosivos. La comisión declaró que el arsenal constaba de 1.000 rifles, dos toneladas de explosivos Semtex, siete misiles tierra-aire y dos docenas de vehículos pesados, relación que satisfizo al Gobierno británico porque cuadraba con los datos que poseía el servicio de inteligencia. Pese a la desconianza del reverendo radical protestante,

Ian Paisley, que entorpeció el desarrollo de los acuerdos; este escenario propició que los ministros británico e irlandés iniciasen contactos para restaurar la autonomía de Irlanda del Norte. El 9 de octubre de 2006 se produjo una cita histórica: Sean Brady, arzobispo de la Iglesia católica irlandesa, y Paisley, se reunieron en Belfast; y en marzo de 2007 se reinstauró la autonomía con el pacto para un gobierno de poder compartido entre el máximo exponente del unionismo radical y Martin McGuinness, excomandante del IRA y número dos de un Sinn Féin liderado por Gerry Adams.

En septiembre de 2008 quedó confirmado el completo desarme del IRA, con todo el material destruido, aunque sí se especuló con que la banda revendió parte de su armamento a otros grupos terroristas. La demora o la amenaza latente de sus escisiones (IRA de Continuidad e IRA Auténtico) fue interpretada en Irlanda, especialmente por los unionistas, como uno de los factores que dificultó la reconciliación. En cuanto al reconocimiento del daño causado, la organización dio un primer paso en 2002 con un comunicado en el que lamentaba el sufrimiento originado tanto a los "combatientes" como a los "no combatientes", es decir, a sus objetivos políticos y a las llamadas víctimas colaterales.

ORTUZAR EXIGE A ETA QUE "NO JUEGE CON LOS TIEMPOS" EN SU DESARME

El paso que ha dado ETA es un primer paso, positivo, en la dirección correcta. Un paso dado de forma unilateral e incondicional. Pero no es más que eso. Un paso. Un primer paso hacia su desarme definitivo y, como tal, insuficiente por sí solo. Se trata, además, de un paso más corto y menos decidido de lo que hubiera sido deseable" admitió el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.



Ortuzar interpretó el limitado volumen de lo sellado en el zulo de ETA ante los verificadores internacionales en clave de las "tensiones internas" que tiene el mundo de la izquierda abertzale y de los presos. Y aseguró que no se ha producido

un "desarme completo" porque ETA quiere evitar la idea de "rendición" entre su gente.

En una declaración de la Ejecutiva de su partido, reunida en asamblea extraordinaria para ratificar por unanimidad a Izaskun Bilbao como número dos en la candidatura para las elecciones europeas, en relación al sellado de parte del armamento de la banda anunciada la víspera por la Comisión Internacional de Verificación (CIV), Ortuzar exigió a ETA que "no juegue con los tiempos ni con las escisiones" y ha animado asimismo a la Comisión a "seguir trabajando en favor de la paz". "Que no aplique a su desarme ni ritmos ni criterios que obedezcan a intereses particulares", solicitó.

EL VIDEO QUE SÓLO QUERÍA GRABAR ETA

Una grabación en vídeo casero provocó que los miembros de la Comisión Internacional de Verificación tuvieran que explicar por primera vez ante la Audiencia Nacional sus contactos con ETA.

El grupo que lidera Manikkalingam se ha reunido en varias ocasiones con la dirección de ETA desde que comenzaron con su labor de mediación a finales de 2011. Pero nunca antes fueron citados por el juez porque nunca había quedado constancia de esos encuentros. La grabación realizada en enero, muestra como Manikkalingam y el expolítico sudafricano Ronnie Kasrils recogen dos hojas con el listado de armamento que la banda tenía previsto inutilizar -todo el material está encima de una pequeña mesa-. Un etarra estampa en el documento el sello de la organización, el portavoz de la CIV firma con una estilográfica. La escena, que el viernes 21 de febrero distribuyó la BBC, impulsó una denuncia de Cotite para que los verificadores explicaran quiénes eran los dos etarras, cómo se rea-



lizó ese encuentro y dónde están las armas inutilizadas.

Los verificadores mostraron muchas dudas antes de aceptar ser grabados, pero accedieron ante la exigencia de ETA, que quería dejar constancia gráfica de ese paso, insuficiente para el Gobierno vasco y para la mayor parte de la ciudadanía. ETA quería que su primer gesto de desarme trascendiera y por eso hizo llegar la cinta a la BBC, la cadena pública de tele-

visión británica en la que han dado a conocer algunas de sus decisiones más importantes en los últimos años.

Manikkalingam y Kasrils aceptaron finalmente participar en la grabación del vídeo, que ha sido ridiculizado en las redes sociales y no ha gustado tampoco a otros grupos que están mediando con la banda terrorista. Consideren que, a pesar de lo que cree la cúpula etarra, la entrega de armas a una comisión de expertos sin ningún tipo de rango militar -Satish Nambiar está ya retirado- o de cobertura por parte de los gobiernos de España y Francia, puede ser considerado "humillante" para la organización, porque expresaría el poco valor que las instituciones conceden a su gesto.

LOS VERIFICADORES DEFIENDEN SU TAREA PARA "CONSOLIDAR LA PAZ" TRAS DECLARAR ANTE EL JUEZ DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Agradecen el "coraje" del lehendakari Urkullu, que se reunió con ellos en Madrid para avalar su trabajo "desinteresado".

Abandonaron Madrid satisfechos y tranquilos, despojándose de la preocupación que la citación de la Audiencia Nacional (AN) les generó la víspera y, sobre todo, convencidos de que su papel en el proceso de paz vasco cuenta con el aval de la gran mayoría de la sociedad vasca. Fue la sensación que trasladaron los integrantes de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), los tres que el domingo 23 de febrero declararon ante el juez Ismael Moreno -Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils y Chris Maccabe-, después de relatar ante la justicia española el encuentro que mantuvieron el pasado enero con los miembros de ETA con el fin de avalar el inicio del desarme de la banda terrorista.

Una tarea que los mediadores continuarán desempeñando al saberse arropados además por el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien les trasladó en primera persona el respaldo de su Ejecutivo y de la ciudadanía en una reunión previa a la declaración que arrancó a las ocho de la mañana en el hotel Villa Real donde pernoctaron, que se extendió durante hora y media, y en la que igualmente estuvo presente el secretario general para la Paz y Convivencia, Jonan Fernández. El Gobierno vasco decidió citarse con los verificadores -lo hizo por segunda vez tras la declaración ante el juez- para expresarles su apoyo ante la "incomprensión" que a su juicio refleja el hecho de que se les reclame mediante orden judicial "cuando



han estado en otros países como Sudáfrica y Colombia haciendo estas mismas cosas". El propio Manikkalingam agradeció el "coraje personal y político" del lehendakari para impulsar con su presencia en la capital española el trabajo de la CIV, y se congratuló a su vez del mensaje de ánimo recibido por parte de PNV y PSE.

El portavoz de la comisión verificadora, que llegó en taxi a las diez de la mañana a las puertas de la Audiencia Nacional, donde sus tres represen-

tantes permanecieron durante tres horas, leyó a la salida un comunicado en inglés donde quisieron resaltar la "auténtica oportunidad para la paz" por la que tratan de ofrecer su granito de arena, y más "contando desde siempre con el apoyo de la sociedad vasca". Su incredulidad inicial por el llamamiento judicial obedece a que en su dilatado currículo en este tipo de conflictos nunca han tenido que sortear contratiempos de este calibre, haciendo hincapié en que son "profesionales con experiencia". "Estamos aquí (en la AN) porque queremos ser transparentes y, por ello, hemos colaborado con el juez Moreno". Resaltaron además que su intención reside en contribuir a la "consolidación de la paz y la coexistencia" en Euskadi después del cese de la violencia de ETA. "Estamos aquí -insistieron- para ayudar a que esto se lleve a cabo en interés no solo de todas las personas que viven en el País Vasco, sino en el resto de España", explicó Manikkalingam. "Desde que se declaró de forma unilateral el alto el fuego permanente y verificable, ETA ha mantenido el cese de la actividad armada y cumplido con sus compromisos. Ahora es tiempo de sellar las armas y ponerlas fuera de uso", indi-

caron los mediadores ante los periodistas. Los otros tres miembros de la CIV que se ausentaron en Madrid -Fleur Ravensbergen, que el sábado 22 de febrero tomó un avión a París; Aracelly Santana, que abandonó Bilbao el viernes 21, por la tarde; y Satish Nambiar, ausente en la cita de la capital vizcaína por encontrarse enfermo- tienen intención de ofrecer también ante el juez la misma versión de los hechos.



llamamiento al estado

Jonan Fernández solicitó a los poderes del Estado que reflexionen sobre las "consecuencias" de someter a la sociedad vasca "a un estado de convulsión permanente" y de "espasmos uno detrás de otro" en relación a la banda terrorista. En opinión del secretario para la Paz y Convivencia, "esto no es bueno, no es sano" porque de lo que se trata es de que "estamos gestionando una buena noticia, la noticia de la paz". Ello no exculpa a ETA, a quien asimismo invitó a que sopesa sobre las conse-

cuencias de la "dilatación del final de su existencia", instando de forma paralela a todas las fuerzas políticas e instituciones a crear un espacio de trabajo compartido y de cooperación para llevar a buen término un final ordenado.

Fernández insistió en que en la disolución de ETA la tarea debe ser compartida, lo que "de momento no se está haciendo", y recalcó la necesidad de perseguir "un espacio de consenso para desarrollar todos los ámbitos estratégicos que tienen que ver con el

final de la violencia, la convivencia y la paz". "Es una tarea pendiente", precisó, defendiendo el "prestigio internacional reconocido y contrastado" de los verificadores, que tratan de ayudar "desinteresadamente" al desarme "total, unilateral e incondicional" de ETA. De ahí que el Gobierno vasco ampare su labor sin tener "nada que ver" con la financiación de sus actividades. La CIV confía en que esta citación no suponga una travesía minada de obstáculos y afirma que "no alterará para nada" su esquema de trabajo.

ETA SE LLEVÓ EN UNA CAJA DE CARTÓN LAS ARMAS INUTILIZADAS

Enero de 2014. Ram Manikkalingam y Ronnie Kasrils, dos de los integrantes de la Comisión Internacional de Verificación, viajan en tren hacia Toulouse. Allí, en la estación, les aguarda un hombre ataviado con gafas y gorro que les recoge en coche para trasladarlos a un edificio que no aciertan a situar. Acceden al lugar por el garaje y son conducidos a una habitación en la que les esperan los dos miembros de ETA, encapuchados, bajo el Guernica de Picasso, que les muestran el arsenal sellado. Este fue el relato de los hechos que los mediadores narraron al juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, una declaración para colaborar con la justicia carente de sobresaltos, que no proporcionó más pistas fiables y no pudo determinar la identidad de los integrantes de la banda armada, salvo la película de cómo se grabó el vídeo, que fue entregado por la propia ETA a la cadena británica BBC para su emisión.



Sin mayores datos, salvo uno que no deja indiferente. Tras recoger el documento con la relación de los elementos que habían colocado encima de la mesa -cuatro armas, dos granadas, 16 kilos de pentrita, la munición, los activadores de explosivos y el cordón detonante que se aprecian en las imágenes del vídeo, que fue grabado por otro componente de la banda allí presente-, recibieron el compromiso verbal de que las armas y explosivos estaban inutilizados y que jamás volverían a ser utilizados. Y, a continuación, firmado el acta del material, los miembros de ETA metieron todo él en una caja de cartón, la precintaron con cinta de embalar y se la volvieron a llevar de la vivienda.

Los verificadores, que ni pudieron tocar todo ese armamento, aseguraron al juez no saber nada más. Ni quiénes eran los integrantes de la organización -si bien los agentes policiales sospechan con datos fundados que responden a las identidades de David Pla y Xabier Goienetxea-, ni dónde se encuentran, ni quién custodia y en qué sitio ese arsenal fuera de uso. Eso sí,

el magistrado reclamará informes a las fuerzas de Seguridad del Estado para tratar de esclarecer sus nombres y apellidos. Lo que sí reconocieron los mediadores en la sede judicial es que fueron "contactados" en Amsterdam, por vez primera, en junio o julio de 2011 mediante una carta de carácter anónimo, señalando que su labor se halla financiada por un colectivo que responde a las siglas DAG, así como por algún gobierno escandinavo, y que les

paga 750 euros por cada jornada de trabajo. DAG son las siglas del Dialogue Advisory Group, organismo encargado de facilitar mediante el diálogo la resolución de conflictos violentos y dirigido por Ram Manikkalingam.

No es la primera vez que los jueces reclaman a mediadores o verificadores que ofrezcan su versión de los hechos sobre sus encuentros con miembros terroristas. Así sucedió en marzo de 2011 con el socialista Jesús Eguiguren, José Manuel Gómez Benítez (exvocal del Consejo General del Poder Judicial) y Javier Moscoso (exministro y ex fiscal general del Estado), quienes declararon como testigos ante el magistrado Pablo Ruz, que investigaba las negociaciones del Gobierno de Zapatero con ETA, que arrancaron en 2005 y se frustraron con el atentado de Barajas, para saber si hubo órdenes políticas de no detener a terroristas. El juez indagaba sobre si el chivatazo en el bar Faisán para hacer fracasar una operación contra la red de extorsión de ETA tuvo su origen en el Ministerio del Interior. Entonces, como ahora, tampoco pudieron identificar a los encapuchados y dar datos de localización. Alguno de los interrogados respondió que el diálogo con ETA fue "como una partida de ajedrez" en la que se intentaba convencer al adversario con distintos recursos, incluidas medias verdades o mentiras.

Con los miembros de la CIV que avalan actualmente el desarme de la banda, las diligencias abiertas por el juez continúan en marcha a la espera de que puedan declarar los tres verificadores que faltan por hacerlo.

EL GOBIERNO VASCO AVALA LA CONTINUIDAD DE LA VERIFICACIÓN Y APREMIA A ETA A SU DESARME

Josu Erkoreka afirma que los verificadores tienen «la misma disposición y compromiso» para seguir trabajando en Euskadi a pesar de las polémicas.



El Gobierno vasco quiso, el martes 25 de febrero, poner el balón en el tejado de ETA tras unos días convulsos desde que el viernes 21 de febrero el grupo de verificadores de Ram Manikkalingam compareciera de forma solemne en Bilbao para anunciar que la banda había dejado fuera de uso parte de sus armas, un arsenal que luego se comprobó muy reducido: apenas tres pistolas, un rifle y varios kilos de material para la fabricación de explosivos. Aquella comparecencia acabó el domingo 23 de febrero con los expertos internacionales declarando en la Audiencia Nacional y con el lehendakari realizando una visita 'express' a Madrid para mostrarles su apoyo. Pero, tras esa tormenta, el Ejecutivo autónomo optó por centrar su discurso en la propia organización, a la que instó a realizar un «desarme absoluto». «A ETA se le debe exigir más», reconoció Josu Erkoreka.

La citación judicial a la Comisión Internacional de Verificación encendió todas las alarmas en el gabinete de Iñigo Urkullu. A su entender, el equipo de Manikkalingam podría acabar renunciando a volver a Euskadi al constatar que su labor le estaba provocando problemas ante la Justicia

y que no estaba siendo respaldada por el Gobierno central. Y es una hipótesis que preocupa en la Lehendakaritz, donde creen que el trabajo de Manikkalingam -así como el de Jonathan Powell, exasesor de Tony Blair- es fundamental para garantizar un final de ETA sin escisiones ni «flecós» pendientes. Urkullu y su entorno insisten en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy puede ser más flexible en ciertas materias -la política penitenciaria, por ejemplo- y que los mediadores cumplen una función que hay que valorar. Pero recordó que, más allá de las polémicas, la última palabra la tiene ETA y que si la banda decide afrontar su desarme «absoluto e irreversible» la Comisión Internacional de Verificación «estaría dispuesta a certificarlo en pocos días». Aun así, Erkoreka advirtió que esa afirmación no presupone nada ni confirma que la banda vaya a realizar un movi-

miento de este tipo en breve tras el vídeo hecho público el viernes en la BBC.

El Gobierno vasco no ha ocultado un cierto malestar ante lo reducido del gesto de ETA, pero, en todo caso, Erkoreka quiso darle un tono positivo y destacar su valor «cualitativo». En su opinión, lo importante es que la banda «asume» que su desarme debe ser «unilateral e incondicional» cuando hasta hace no mucho defendía la necesidad de que esa entrega de armas se realizase tras entablar una negociación al mismo nivel con los ejecutivos de España y Francia.

Erkoreka también quiso contextualizar la visita de Urkullu a Madrid para apoyar a Manikkalingam, que la atribuyó a una situación «inédita y sin parangón» en otros lugares en los que se han vivido «procesos similares», en alusión a la citación judicial de un grupo que, según el Ejecutivo de Vitoria, tiene «la misma disposición y compromiso» para seguir trabajando en la búsqueda de una solución razonable y definitiva para cerrar sin flecos la cuestión del desarme.

En una línea muy similar se expresó la presidenta del PNV en Bizkaia. Itxaso Atutxa también solicitó a ETA que «acelere» su desarme para convertir «en positivo» el gesto de desarme ya iniciado. Un paso que la dirigente jeltzale admitió que ha creado «frustración» en la sociedad vasca.

POWELL SE COMPROMETE A SEGUIR IMPULSANDO EL DESARME CON «MÁXIMA EXIGENCIA A ETA»

El objetivo es cerrar el ciclo de la violencia en Euskadi con el final de ETA.

Los mediadores internacionales en el proceso de paz consideran vital lograr un compromiso conjunto por parte de PNV, PSE e izquierda abertzale para cerrar definitivamente el capítulo de la violencia en Euskadi con el final de ETA. Ese es el mensaje que transmitió el miércoles 26 de febrero Jonathan Powell tanto al lehendakari Iñigo Urkullu como a los representantes de las tres fuerzas políticas -PNV, Sortu y PSE- que se reunieron por separado con el exasesor del ex primer ministro británico Tony Blair y uno de los principales impulsores de la

Conferencia de Aiete.

Powell se interesó por la situación actual del proceso tras el primer gesto de desarme de ETA y la posterior citación judicial a los verificadores, y reconoció ante los partidos que esperaban un gesto más importante por parte de ETA, pero aun así valoró el paso dado por la organización. Con respecto a la Comisión Internacional de Verificación, Powell aseguró que el grupo liderado por Ram Manikkalingam cuenta con todo su apoyo, al tratarse de «profesionales» que actúan sin tutelajes políticos.

Ante los partidos, Powell admitió que el proceso de paz en Euskadi es «peculiar» debido al inmovilismo que mantiene el Gobierno español, algo que no ha suce-

rido en otras situaciones similares, por lo que recalcó la necesidad de una acción conjunta por parte de PNV, PSE e izquierda abertzale para alcanzar el fin del ciclo de la violencia en Euskadi con la disolución de ETA.

Asimismo, se comprometió a que el Grupo Internacional de Mediación, cuyo principal cometido es el seguimiento de los acuerdos adoptados en la Declaración de Aiete del 17 de octubre de 2011, seguirá trabajando con la máxima «discreción y lealtad». Reiteró además que mantendrán la máxima exigencia a ETA para que la organización armada proceda a su desarme y al desmantelamiento de sus estructuras militares.

ETA CONFIRMA SU VOLUNTAD DE «SELLAR» HASTA EL «ÚLTIMO» DE SUS ARSENALES

la banda ratifica que ha abierto un proceso con los verificadores y pide «responsabilidad» a los gobiernos para que no haya «obstáculos». También reconoce que el sellado de sus armas busca acuerdos sobre presos.



ETA confirmó el sábado 1 de marzo en un comunicado publicado en por Naiz, su intención de «llevar hasta el final» el proceso de «sellado» de todos sus arsenales, iniciado con el puñado de armas cuya filmación fue difundida el viernes 21 de febrero. Y asimismo confirmó que su intención es que esa escenificación ayude a fomentar las «conversaciones y acuerdos» necesarios para «superar todas las consecuencias del conflicto -presos, huidos-, incluido el desarme».

En el comunicado, fechado dos días después de que los miembros del Grupo de Verificación encabezado por Ram Manikkalingam se vieran obligados a pasar por la Audiencia Nacional, la organización utiliza un tono inusualmente comedido, sin exigencias explícitas, aunque no puede evitar advertir de que cualquier «ataque» u «obstáculo» puede condicionar el proceso «complejo y no exento de dificultades», y por ello demanda a los «agentes implicados» actuar con «responsabilidad».

La banda reitera su respaldo a los verificadores y, a pesar de que su sistema de neutralización de armas los ha dejado en evidencia, da a entender que continuará con ese «procedimiento prefijado», que implica enseñarles las armas, empaquetarlas, comprometerse a situarlas «fuera de uso operativo», quedárselas y entregar el inventario a Manikkalingam. Como defendieron los verificadores y Sortu el día en el que se difundió la cinta con los dos encapuchados y la muestra de armamento, ETA insiste en que el proceso de sellado de armas no depende sólo de su propia «voluntad» ni de la «profesionalidad» de los mediadores internacionales. En realidad, aunque la banda no lo diga de forma explícita, sus dirigentes distinguen entre sellado y entrega de armas porque su intención inicial es no realizar ningún tipo de entrega hasta que no se negocie una salida para huidos y presos. De hecho, aunque los verificadores han dicho que los pasos que están

dando los etarras son unilaterales, no descartan que, a la larga, quisieran obtener resultados. «Para ETA, los elementos más importantes son sus miembros, puede suponerse que quieran aprovechar y combinar ambas cosas y lo tienen muy presente», aseguraron. ETA aspira también a que en la negociación -que en el pasado tenía que efectuarse indefectiblemente con el Estado y que ahora pasa a llamarse «conversaciones y acuerdos» y el interlocutor no viene definido- quede claro que todo se hace «sin menoscabo de su dignidad política» -como pidieron los portavoces de los presos (EPPK) el 28 de diciembre- y respetando su versión histórica de lo ocurrido -como exigieron los huidos en el acto de Biarritz a principios del pasado verano-.

Con este comunicado, la banda pretende insistir en su estrategia de presión al Gobierno no sólo en sus objetivos finales, sino también en el procedimiento.

Quiere que no se realicen detenciones, como pidieron los verificadores, para que los etarras puedan moverse con libertad para hacer el inventario de sus armas.

Los expertos sostienen que una cosa es que ETA considere que puede llevar a cabo el proceso en dos fases -sellado y entrega- y la otra es que lo consiga. Según las fuentes consultadas, su final ideal sería la impunidad que las autoridades británicas concedieron al IRA, que ha provocado un enorme escándalo en el Reino Unido. Pero

podría pasar que el sistema que ha ideado se vuelva contra ella, que cuanto más tiempo transcurra sin que dé pasos definitivos, más presión sienta por parte de su propia gente, que ya han asumido términos como «desarme».

La exigencia del Gobierno vasco -dispuesto a tener un papel de mediación con el Gobierno central- a ETA para que adopte los pasos necesarios de forma unilateral e inmediata, puede ejercer una presión positiva relevante.

El comunicado forma parte de la planificación de la banda, que tenía previsto escenificar el sellado con una segunda parte de las reuniones de Ayete -frustrada porque la decepción que provocó la entrega de armas desaconsejó su celebración- que incluía la presencia de los mediadores encabezados por Currin y auspiciados por los abertzales, el comunicado y un acto, más adelante, con huidos.

«NO HAY QUE DEJAR PASAR ESTA OPORTUNIDAD» EDITORIALIZA «LE MONDE»

No hay que dejar pasar esta oportunidad», concluye el editorial publicado el sábado 23 de febrero por el diario «Le monde» sobre la entrega de material de ETA a la Comisión Internacional de Verificación (CIV). «No es más que una etapa en la vía de la resolución del doloroso conflicto vasco, pero es una etapa importante y hay que saludarla», escribe el periódico francés.

El artículo, publicado en primera plana, admite que «no se pone fin de un plumazo a cuarenta años de guerrilla». «Pero los avances desde hace dos años son reales. El miedo ha desaparecido del País Vasco donde la mayoría de los políticos circulan

sin escolta», señala el periódico francés. «Pese al resentimiento aún a flor de piel, los vascos de todas las tendencias quieren pasar la página de la violencia, de la intimidación y de la represión».

Tras recordar la labor en África del Sur, exYugoslavia e Irlanda del Norte, el editorialista resalta que la CIV «es respetada y hace un trabajo esencial», pero lamenta que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no reconozca su papel. «En Irlanda del Norte, el desarme total del IRA, culminado en 2005, tardó cuatro años. Rajoy debe tomar ejemplo de la experiencia norirlandesa», recomienda.

ETA LIGA SU DESARME A LA LABOR DE LOS MEDIADORES

La banda liga el futuro de su desaparición a las gestiones internacionales de mediadores como Ram Manikkalingam y Jonathan Powell.

La entrega de armas o arsenales «ni está ni ha estado en la agenda de ETA ni de la Comisión Internacional de Verificación». 23 de marzo de 2013. La cúpula etarra, compuesta por 'Josu Ternera', David Pla e Iratxe Sorzabal, asesta un sonoro golpe a los verificadores que dirige Ram Manikkalingam en respuesta al ultimátum que apenas un mes antes éstos habían lanzado a la organización terrorista: o arrancaba el desarme o la CIV se disolvía y dejaba su labor de interlocución. La advertencia de que la entrega de armas «ni está ni ha estado en la agenda» figuraba en un comunicado hecho público días antes del Aberrri Eguna del año pasado y suponía un jarro de agua fría para quienes ya por entonces auguraban un rápido final de la organización armada. Y trasladaba la impresión de que la comisión de verificación estaba amortizada. er.

Nada más lejos de la realidad. Apenas dos semanas después de ese duro texto, ya en abril, Manikkalingam recibió una carta con el sello de ETA. En la misiva, la dirección de la banda se contradecía a sí misma y ofrecía un mensaje radicalmente opuesto al que figuraba en el comunicado público. Transmitía al portavoz de la CIV su disposición a poner en marcha un proceso paulatino de desmantelamiento de sus arsenales. Daba así un giro de 180 grados en sus planteamientos. Todo en apenas quince días.

¿Qué ocurrió en ese intervalo de tiempo? ¿Qué hizo cambiar de opinión a la organización terrorista en tan corto espacio de tiempo? Fuentes conocedoras de la relación que mantienen ETA y los verificadores aseguran que la cúpula terrorista se ha dado cuenta de que «se ha quedado sola». Sin interlocución con el Gobierno de Mariano Rajoy, que se niega a habilitar cualquier cauce de contacto hasta que la banda anuncie su disolución, la dirección de la organización parece ser consciente de que el «único» asidero al que puede aferrarse para poner fin a su medio siglo de macabra historia es el que le ofrecen los mediadores internacionales. Al menos así lo interpretan quienes conocen de cerca el trabajo de Manikkalin-



gam y su equipo.

Hasta el punto de que estas mismas fuentes aseguran que se ha llegado un punto en que los verificadores son ahora quienes llevan «las riendas» de la relación con ETA porque la banda no está en situación de poner grandes condiciones para seguir avanzando en el desarme.

Y más aún después del «bochomoso» episodio del vídeo que el viernes 21 de febrero emitió la BBC. La grabación fue una exigencia de la banda. Manikkalingam no quería que se tomaran imágenes, consciente de que, en realidad, las armas y explosivos que se ponían fuera de la circulación eran «poca cosa» y que la escenografía era «humillante» para los propios terroristas, que se despojaban de una muestra de su arsenal ante unos ciudadanos «normales» y no ante miembros cualificados del Ejército español o francés. «El mito de que ETA debe ser tratado de igual a igual por los estados y por las fuerzas armadas quedaba anulado», reconoce una fuente conocedora de los entresijos de aquella grabación.

Quienes han tratado con la banda aseguran que su dirección «vive en otro mundo» y funciona con esquemas ideológicos más cercanos a los de los años ochenta que a los del siglo XXI. Y que la organización todavía quiere dar la impresión de que «tiene su peso» en la política de Euskadi y de España. Los terroristas querían, de hecho, haber retrasado el anuncio de



este nuevo movimiento y haberlo acercado a la fecha del 25 de mayo, cuando se celebrarán las elecciones al Parlamento europeo. Algo a lo que se negaron los verificadores al estar convencidos de que el gesto no sólo hubiera sido calificado de «insuficiente» por la mayoría de los partidos, sino que incluso se habría visto como algo «interesado» y no hecho por «convicción».

ETA se ha hecho a la idea de que sólo con ayuda internacional podrá salir del laberinto en el que se encuentra. La dirección de la organización entiende que no debe disolverse sin más. Que antes de bajar por completo la persiana debe solucionar el futuro de sus presos y de sus integrantes en activo. Resolver con el Gobierno central qué medidas especiales se le puede aplicar para que abandonen la cárcel en un periodo corto de tiempo. Para ello, se han apropiado de un concepto del Derecho internacional, el de la Justicia transicional. En síntesis, una aplicación especial de las leyes que se ha utilizado en países en guerra. De tal manera que se establece una especie de tabla rasa para determinados crímenes y aligerar así el número de personas que tienen que pasar por la cárcel. Un concepto de justicia transicional que no comparten la mayoría de los jueces en España, desde los conservadores hasta los progresistas, que sostienen que ese concepto no se puede aplicar a lo sucedido aquí porque no ha habido ningún conflicto bélico, sino unos terroristas que atentaban y un Estado de Derecho que combatía a la organización.

La cúpula de la banda cree que, ante la negativa de Rajoy a entablar contacto con ellos, deben ser las instituciones europeas las que den su apoyo al proceso abierto en Euskadi tras la declaración por parte de ETA de «cese definitivo de la actividad» violenta, de 20 de octubre de 2011. Confían en que el respaldo de organismos extranjeros fuerce a la Administración española a establecer alguna vía de diálogo, ya sea directa o indirecta. Y resolver así los 'flecós' pendientes. Porque la organización armada mantiene la creencia de que su final definitivo sólo será posible con la participación del Ejecutivo central. Si

no puede ser con el actual del PP, deberá ser con otro, del PSOE, para lo que confían en un relevo en La Moncloa a finales de 2015.

Próxima cita en Aiete

Mientras ese giro se produce, o no, ETA liga su futuro a las gestiones que están efectuando tanto la comisión de Ram Manikkalingam como el equipo de Jonathan Powell, ex asesor del ex primer ministro británico Tony Blair y que ahora dirige una empresa especializada en mediación de conflictos. Powell y Manikkalingam mantienen una labor coordinada, aunque sus contactos con los dirigentes de la banda se efectúen por vías distintas. Mientras los verificadores se encargan de labores operativas como el desmantelamiento de los arsenales, el exasesor de Blair pretende ahondar en las conversaciones con los partidos vascos y franceses. Tras reunirse el mié-



ércoles 26 de febrero con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y con representantes del PNV (Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea), de Sortu (Rufi Etxeberria) y del PSE (Rodolfo Ares), el expolítico británico pretende realizar próximamente un gran acto en el Palacio de Aiete que sirva de muestra de apoyo a los últimos pasos dados por ETA.

La reunión, prevista para el miércoles 26 de febrero y a la que se confiaba que asistieran personalidades como el líder del

Sinn Féin, Gerry Adams, y el ex primer ministro irlandés Bertie Ahern, se suspendió después de que la Audiencia Nacional citara a declarar ante el juez a Manikkalingam y a otros dos de los componentes de la CIV, Ronnie Kasrils y Chris Maccabe. Urkullu, según diferentes fuentes, fue una de las personas que habría recomendado a Powell que demorara esa cita para que no se generara una polémica aún mayor.

ETA acompañó el sábado 1 de marzo todos esos movimientos con un comunicado en el que respaldaba la labor de los verificadores y alababa su profesionalidad pese a los «obstáculos» que, en su opinión, están poniendo los gobiernos de España y Francia. Una muestra de apoyo cerrado que nada tiene que ver con los reproches que la banda lanzaba a la comisión hace un año. La cúpula etarra sabe que Manikkalingam es el único agarradero al que puede aferrarse.

JONATHAN POWELL PIDE A RAJOY QUE «AYUDE» AL DESARME DE ETA PARA EVITAR «UNA ESCISIÓN»

Jonathan Powell teme que, como ocurrió en el IRA, algún «loco» pueda echar mano de «sigla y armas» y perpetuar la actividad violenta.

Los gobiernos de España y Francia deben «ayudar» a ETA a llevar a cabo el proceso de desarme que la banda ha anunciado el viernes 21 de febrero. La colaboración de los ejecutivos de Mariano Rajoy y Françoise Hollande desterraría cualquier posibilidad de una escisión. El exasesor de Tony Blair durante el final del IRA Jonathan Powell ofreció el miércoles 5 de marzo su particular receta para un cierre ordenado de ETA. El político británico aseguró, en un artículo publicado en el diario 'Financial Times', que en Euskadi podría ocurrir lo mismo que sucedió en Irlanda del Norte y que algunos «locos» podrían echar mano de siglas y armas y perpetuar su actividad, como sucedió con el IRA Auténtico.

«Es importante que ETA siga controlando todo su material y a sus militantes mientras desarrolla el proceso de desmantelarse como movimiento terrorista, que será inevitablemente complejo», advierte Powell, que insta encarecidamente al Gobierno español a tomar parte en este proceso. El exasesor de Blair muestra su sorpresa por la postura que el gabinete del PP ha mantenido desde que la banda terrorista comunicara el «cese definitivo de la actividad armada» y, en especial, por la actitud de los populares después de que la Comisión Internacional de Verificación (CIV) anunciara la decisión de ETA de iniciar un paulatino desmantelamiento de sus arsenales.

En su artículo recuerda que «ningún» gobierno del mundo ha rechazado abrir líneas de contacto con aquellas bandas terroristas que expresan su voluntad de entregar las armas de manera



unilateral. Powell coincide, en este sentido, con la tesis que ya reiteró el portavoz de los verificadores, Ram Manikkalingam, en su última visita a Euskadi, al asegurar que es complicado completar un proceso de final de la violencia terrorista «sin la cooperación de los gobiernos». Y recuerda que la organización dispone aún de una «cantidad sustancial» de armas que pueden ser utilizadas. «Siempre hay locos y si la marca está libre y las armas sueltas, usarán ambas», sostiene el antiguo político británico.

Hasta el momento, la posibilidad de que pudiera producirse una escisión en ETA sólo había sido barajada por el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka. El representante autonómico aseguró una semana antes que la falta de implicación del

Ejecutivo de Rajoy podría dar pie a una ruptura dentro de la banda y que algunos terroristas optaran por continuar con la violencia. Una afirmación que el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, calificó de «gran mentira» e irresponsabilidad unos días después. Powell, que firmó la Declaración de Aiete junto a Kofi Annan y Bertie Ahern, entre otros, recuerda que en el caso de Irlanda del Norte, que conoce de primera mano, el IRA no entregó sus arsenales ni al Gobierno británico ni al irlandés, sino que nombró una comisión especial a la que dejó las manos libres para realizar las gestiones que considerara oportunas, sin dar cuentas a los responsables políticos. Un modelo que los diferentes mediadores que han viajado a Euskadi han tratado de exportar, pero con el que no comulga el Ejecutivo central, cuyo mensaje insiste en que la organización armada debe proceder a su disolución. El exasesor censura también la investigación judicial que ha llevado a los verificadores a prestar declaración en la Audiencia Nacional, ya que ahora no podrán «pasearse por el campo presenciando el desmantelamiento de las armas».

LOS PRESOS DE ETA COMIENZAN A PEDIR ESCARCELACIONES INDIVIDUALIZADAS

Una decena de reclusos enfermos de gravedad y los mayores de 70 años, los primeros en dar el paso.

El colectivo de presos de ETA (EPPK) ha empezado a pedir la puesta en libertad para los reclusos con enfermedades graves y para los mayores de 70 años. El resto de los presos comenzarán a pedir el acercamiento a la prisión alavesa de Zaballa y, en el caso de los internos en el Estado francés, a alguna cárcel próxima a Iparralde.

El primer movimiento lo han dado una decena de reclusos de ETA y de la izquierda abertzale ilegalizada que enviaron el lunes 10 de marzo, de manera individualizada la solicitud de puesta en libertad ante la junta de tratamiento de la prisión en la que cada uno se encuentra interno.

A esta primera remesa de solicitudes le seguirán otras en próximas fechas, previsiblemente también en tandas reducidas. El colectivo de presos anunció el 28 de diciembre del pasado año que "la vuelta a casa" sería de manera "escalonada, mediante



compromisos individuales y en un tiempo prudencial".

La petición de acercamiento así como la de excarcelación de los presos enfermos y los de mayor edad supone en la práctica el acatamiento de la legalidad penitenciaria a la que se han negado durante décadas, lo que les ha impedido poder acceder a los beneficios penitenciarios, a la mejora de grados y a la aplicación de redenciones,

como si lo han podido hacer una veintena de presos encuadrados en la vía Nanclares.

Según el EPPK, actualmente son alrededor de 530 los reclusos de ETA y la izquierda abertzale ilegalizada que cumplen condena en prisión, principalmente en el Estado español y francés, aunque también hay unos pocos en otros países. Solo seis de ellos son mayores de 70 años, de los que uno está condenado por delitos de sangre y los otros cinco fueron condenados en el macrojuicio 18/98. Este grupo y el de enfermos graves constituye la primera tanda de solicitantes debido a la urgencia de su situación.

LOS PRESOS DE ETA PIDEN SU ACERCAMIENTO A EUSKADI SIN RECONOCER EL DAÑO CAUSADO

El Gobierno dice que es un requisito imprescindible y reclama que se desvinculen de la banda.

Los gobiernos central y vasco mostraron el miércoles 12 de marzo su decepción por la falta de autocrítica de los presos de ETA, que pretenden solicitar su acercamiento a cárceles vascas sin reconocer el daño causado o realizar algún gesto hacia las víctimas. Los escritos que les han facilitado sus abogados, que desde el lunes 10 de marzo están recorriendo los centros penitenciarios para que firmen las peticiones, no incluyen ninguna referencia a su pasado delictivo ni una muestra de arrepentimiento.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, subrayó la necesidad de que realicen de forma individual una revisión crítica de su comportamiento y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que la ley exige la asunción del daño causado y la «desvinculación» de la organización terrorista para que los reos puedan ver mejorada su actual situación penitenciaria. Una apreciación que augura una negativa de Instituciones Penitenciarias –dependiente de Interior– a conceder esos traslados, lo que obligaría a los reclusos a iniciar un largo proceso judicial.

Los letrados que ejercen la defensa de los terroristas encarcelados comenzaron a dar detalles de los escritos que van a utilizar, en un proceso escalonado, los 510 presos de la



organización armada. Todos ellos reclamarán que sean llevados al centro penitenciario de Zaballa, en Álava. Lo harán en seis bloques. Tras los enfermos y mayores de 70 años le tocará el turno, en abril, a los 80 reclusos que llevan más de dos décadas entre rejas. Le seguirán, por este orden, los 74 internos con más de 15 años de estancia en la cárcel, los 170 encarcelados entre 10 y 15 años, el centenar recluso entre 5 y 10 años y, por último, los 70 que llevan menos de 5 años de internamiento.

El documento consta de tres apartados en los que se utilizan sólo argumentos jurídicos para exigir el acercamiento a Euskadi. Junto a referencias a los problemas que les está generando el alejamiento de su lugar de arraigo, los internos asumen la apuesta por las vías pacíficas que el EPPK realizó en su comunicado del pasado 28 de diciembre. Además, los textos inciden en cómo es la legislación española, francesa e internacional y en cómo se les están aplicando a ellos unas medidas especiales incluso cuando ETA ha anunciado su cese definitivo. Sin una mención al pasado delictivo de cada uno. Algo que sí les recomendaba el Foro Social.

Las solicitudes, que se tramitarán de forma individual, siguen un patrón similar, lo que en principio dificultaría que la administración ordinaria las pudiera aceptar. El proceso, en todo caso, no es sencillo, ni de rápida gestión. Durante dos semanas, las peticiones de los 16 presos enfermos o con más de 70 años irán llegando a las respectivas Juntas de Tratamiento de los centros donde están reclusos. Estas

analizarán cada caso dentro de las reuniones programadas y remitirán un informe a Instituciones Penitenciarias, que es el departamento que toma la decisión final. Desde la recepción de los escritos tiene un plazo máximo de seis meses para dar una respuesta. Si la contestación es negativa, los reclusos deberán comenzar la vía judicial. La estrategia de la defensa tiene, de hecho, como objetivo que los jueces se pronuncien y sean quienes permitan el acercamiento y la posterior excarcelación, en un recorrido que se debe prolongar durante años. La izquierda abertzale ha descubierto que la vía judicial puede ayudarle a desatascar los problemas con que se está encontrando en el proceso de paz una vez que el Gobierno de Mariano Rajoy se niega a entablar contactos con ETA para hablar de presos, armamento y terroristas aún

en activo. Los jueces acabaron con la 'doctrina Parot' -el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la anuló y la Audiencia Nacional puso en libertad a la mayoría de los afectados en unas pocas semanas- y ahora espera que hagan lo mismo con la dispersión. La defensa de los presos entiende que los jueces tienen potestad para avalar los traslados y que, si no lo hacen los tribunales españoles, puede ser el de Estrasburgo el que desautorice a la administración nacional. El Gobierno del PP, sin embargo, cree todo lo contrario. Asegura que no hay ninguna exigencia legal para que los penados cumplan sus condenas cerca de sus domicilios y que sólo se trata de una recomendación que depende de la valoración que realicen las autoridades penitenciarias del comportamiento y trayectoria de los reclusos.

El ministro del Interior, advirtió que el EPPK ya había tramitado unas solicitudes similares en 1996 y 2012 y que en ninguno de los dos casos fueron atendidas. Jorge Fernández Díaz aseguró que con las nuevas reclamaciones «se cumplirá la legalidad como siempre» y aludió a que el Código Penal «exige el reconocimiento del daño causado y desvincularse de la organización terrorista».

El Ejecutivo se apoya en sentencias como la que emitió el Tribunal Superior de Madrid en 2000. Aquel fallo denegaba la petición del etarra José Antonio Kortadi Alustiza para que se le acercara a Euskadi. Los jueces alegaban que el lugar de cumplimiento de las penas es una «facultad discrecional» de la Administración y que no existe un derecho de los internos a estar reclusos cerca de sus domicilios.

URKULLU REDOBLA LA EXIGENCIA SOBRE LA BANDA Y DEMANDA ARREPENTIMIENTO

El lehendakari insinúa que las peticiones de traslado son una estrategia «electoral».

El Gobierno vasco no está dispuesto a aflojar la presión sobre ETA y sus presos ni a permitir que se limiten a seguir un guión prefijado, pero a su manera, con los tiempos, los ritmos y los contenidos que ellos dicten para evitar ahondar en sus propias contradicciones. El lehendakari Urkullu, que mantiene una notable sintonía con el PSE en materia de pacificación y un acuerdo de mínimos cogido con alfileres con el Gobierno central, exigió a los reclusos de la banda que, más allá de «escenificaciones electorales», demuestren de manera fehaciente su «arrepentimiento» y el reconocimiento del «daño injusto causado» por la actividad terrorista. El lehendakari Urkullu, según su entorno, cree que sería contraproducente que la ahora denominada 'vía Zaballa' sea un mero trámite para solicitar el acercamiento sin los pasos exigidos a los etarras disidentes que en su momento recorrieron la conocida como 'vía Nanclares' de reinserción individualizada. «No conocemos aún el contenido exacto de la carta», apuntaron estas fuentes en referencia a la petición de traslado a Euskadi de dieciséis reclusos enfermos y mayores de 70 años, «pero esto no puede ser un juego perverso». «Tiene que ser serio, no vale cualquier cosa, ni una carta hecha a multicopista», señalan, convencidos de que el entorno de ETA está siguiendo la hoja de ruta que el lehendakari y su secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, entregaron en secreto a Sortu en octubre pasado, pero solo sobre el papel. La desconfianza de Ajuria Enea, donde la decepción con el ridículo gesto de desarme de ETA del pasado 21 de febrero ha sido palmaria, queda patente también en otra de las exigencias recurrentes de Urkullu, que reiteró tras la exigua entrega de armas a los verificadores: que ETA y la izquierda abertzale hagan autocrítica y asuman la injusticia del dolor provocado a las víctimas. Un paso que la Lehendakaritzza no cree cubierto con la declaración genéri-



ca del colectivo oficial de presos etarras (EPPK) de diciembre pasado, aun creyéndolo muy importante. Ese nivel de exigencia alentó el miércoles 12 de marzo el enfado de EH Bildu, que reprochó al lehendakari que «alimente la estrategia» del PP al poner «condiciones de carácter político» a los presos, que, en opinión de la izquierda abertzale, ya han hecho el camino necesario. Pero Urkullu no se fía. Es más, entrevistado en Euskadi Irratia, el lehendakari insinúo que las peticiones de traslado por fases –a los presos ancianos y enfermos les seguirán el resto por orden de antigüedad–,

que «ya estaban anunciadas», obedecen en realidad a una estrategia electoral para favorecer a la izquierda abertzale de cara a las próximas elecciones europeas.

«Parece que podemos estar ante una escenificación. Y no me gustaría que esta escenificación se haya planteado con fines electorales», advirtió Urkullu, que subrayó que el entorno de ETA siempre ha sucumbido a «tentaciones de este tipo» y recordó que el calendario anunciado por el EPPK tiene su ecuador justamente el 25 de mayo, el día de la cita con las urnas.

«Siempre he planteado que deberíamos sacar este tema del contexto electoral», insistió el lehendakari, que en su momento trasladó a sus interlocutores en la Comisión Internacional de Verificación (CIV) y a Jonathan Powell la convención de que el gesto de desarme no coincidiera con la campaña al Parlamento europeo para no restarle credibilidad.

En cualquier caso, después de su viaje a Madrid para arropar a Ram Manikkalingam y sus compañeros en su declaración ante la Audiencia Nacional, el lehendakari intenta equilibrar la balanza al redoblar la exigencia a la banda terrorista y el miércoles 12 de marzo volvió a vincular la entrega de armas con el esclarecimiento de atentados sin resolver y, aunque demandó a Mariano Rajoy que administre su estrategia en materia de paz con sentido «de Estado», insistió en que ETA «es la única culpable y la única deudora con la sociedad vasca».

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

LEHENDAKARITZA

Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia
Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritza

PRESIDENCIA

Secretaría General para la Paz y Convivencia
Dirección de Víctimas y Derechos Humanos



MIENTRAS MANTENGAMOS VIVA SU MEMORIA,
MANTENDREMOS VIVA LA ESPERANZA.
ES SU DERECHO, ES NUESTRA ESPERANZA.

“Memoria, Dignidad y Justicia”



LEHENDAKARITZA

Bake eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia
Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritza

PRESIDENCIA

Secretaría General de Paz y Convivencia
Dirección de Víctimas y Derechos Humanos



A.D.D.H.

Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana
Giza Duintasunaren Aldeko Elkartea